Defender la vida

Embajada de Noruega

Defender la vida

Defender la vida
© Hacemos Memoria
© Programa Somos Defensores
ISBN: 978-628-7592-18-6
ISBNe: 978-628-7592-19-3
Primera edición: noviembre de 2022

Comité editorial: Juan Camilo Castañeda, Lourdes Castro, Patricia Nieto, Sirley Muñoz, Víctor Casas, Yhobán Camilo Hernández
Coordinación del proyecto: Juan Camilo Castañeda
Autores: Mateo Yepes Serna, Karen Parrado Beltrán, Lizet Cuartas Echeverry, Valeria Arias Suárez, María Camila Restrepo Giraldo, Ángela Martin Laiton, Lina Robles Luján, Xiomara Karina Montañez Monsalve
Imagen de cubierta: *Alma viajera*, serie Oro Derivados, de Pedro Ruiz (2020); 100 x 78 cm, técnica mixta
Dibujo interior: *Libreta Pain De Mie N.° 34*, de Pedro Ruiz (2020); 21 x 15 cm, tinta sobre papel
Diseño y diagramación: Luisa Fernanda Bernal Bernal
Corrección: Juana Manuela Montoya Velásquez, Margarita Isaza Velásquez

Contacto:

Hacemos Memoria
Calle 67 53-108 bloque 12, of. 427
Medellín, Colombia
www.hacemosmemoria.org

Programa Somos Defensores
Calle 19 4-88, of. 1302
Bogotá D. C., Colombia
www.somosdefensores.org

Se permite la reproducción total o parcial otorgando el crédito a los autores, sin modificar el material original ni usarlo con propósitos comerciales, salvo autorización escrita del Programa Somos Defensores y el proyecto Hacemos Memoria.

Las crónicas periodísticas que contiene este libro fueron reporteadas y elaboradas por los participantes del curso y proyecto "Colombia en transición: liderazgos sociales y construcción de paz", ofrecido en el 2020 por Hacemos Memoria (Universidad de Antioquia) y el Programa Somos Defensores.

Cómo citar este libro: Hacemos Memoria y Programa Somos Defensores. *Defender la vida*. Medellín: Nomos. 2022.

Contenido

Presentación 7

Prólogo 11

Los amigos de la rana arlequín 15

Las crisálidas del Oriente 39

Entre el conflicto social y la paz territorial en Córdoba 61

Una lucha juvenil por la paz en los bordes de Bogotá 87

Donde el miedo agoniza 109

Devenir trans, bajo todos los fuegos 133

Los vigías de la ciénaga San Silvestre 155

Una catarsis que cure las heridas 177

Presentación

Representar a quienes defienden los derechos humanos

Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, la academia, instituciones estatales y organismos internacionales registran y denuncian las agresiones que se perpetúan contra las personas que defienden los derechos humanos y a los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Se han publicado, además, numerosos y valiosos informes que exponen las causas de estas violencias, señalan la responsabilidad de diversos actores y recomiendan al Estado acciones para que los proteja.

Pese a ello, de acuerdo con los registros de Amnistía Internacional y Front Line Defenders, Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Según el programa Somos Defensores, entre enero del 2018 y junio del 2022 asesinaron en el territorio colombiano a 716 personas que se dedicaban a esta labor.

En los últimos años, el registro y las denuncias de la violencia contra los líderes y las lideresas produjo una narrativa, especialmente en los medios de comunicación, en la que

son retratados únicamente como víctimas. Una representación inevitable en el contexto de las agresiones que sufren, pero que deja en un segundo plano sus luchas. Conocemos el problema, pero como sociedad ignoramos en buena medida quiénes son los líderes y las lideresas sociales, cuáles son sus acciones cotidianas, qué los motiva, a qué personas, poblaciones o causas defienden y en qué contextos lo hacen.

No en vano, en el *Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia*, publicado en el 2019, el funcionario de las Naciones Unidas Michel Forst señaló como una de sus principales preocupaciones el hecho de que en Colombia no haya un reconocimiento público positivo del papel que cumplen los defensores y las defensoras en la democracia. Por el contrario, según el Relator Especial, ellos son deslegitimados y criminalizados por actores estatales, situación que favorece las agresiones contra esta población.

Ante esta problemática, Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquia, y Somos Defensores se aliaron en el 2020 con la intención de trabajar juntos en un proyecto que ayudara a visibilizar las luchas de los líderes y las lideresas sociales, y sus acciones colectivas y habituales, con las que aportan a la protección de los derechos humanos de miles de colombianos y con las que intentan poner límites a poderosos sectores, legales e ilegales, que amenazan la dignidad de comunidades enteras.

Consideramos que los medios de comunicación y los periodistas, en su misión cotidiana de retratar la realidad del país, tienen retos importantes con respecto a la representación y la construcción de imaginarios sobre los líderes y las lideresas sociales de Colombia. Por eso, a finales del 2020, ofrecimos el curso "Colombia en transición: liderazgos sociales y construcción de paz", en el que participaron treinta reporteros de distintas regiones del país.

Con periodistas que asistieron al proceso de formación emprendimos la tarea de contar historias sobre organizaciones que ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos. Como resultado de ese trabajo colectivo presentamos la colección editorial *Defender:* tres libros con veinticuatro relatos periodísticos sobre colectivos que ejercen algún tipo de liderazgo social en diversas zonas del país. *Defender la vida,* el primer libro de la colección, presenta ocho historias escritas por periodistas de distintos departamentos de Colombia, que describen los esfuerzos de colectivos que se dedican a proteger los derechos de poblaciones y ecosistemas vulnerables.

En *Defender la vida* el lector podrá conocer las historias de la Asociación Amigos de Flora y Fauna de Risaralda, compuesta por campesinos que protegen el hábitat de una rana endémica; la Corporación Adagio, un colectivo del Oriente antioqueño que defiende los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales que viven en zonas rurales; la Fundación Cordoberxia, una organización que defiende los intereses de poblaciones rurales que viven en medio del conflicto armado en el sur de Córdoba; la organización Gestores de Paz de Potosí, un proceso que creó espacios culturales, artísticos y deportivos para niños, niñas y adolescentes en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá; los firmantes de paz de Icononzo, Tolima, que buscan la reconciliación con sus vecinos mientras se abren camino en la participación política en el municipio; la Asociación de Chicas Trans de Norte de Santander, que defiende los derechos de la población trans en Cúcuta; la Red Sur Barranquilla, que reivindica por vía de la memoria a las víctimas del conflicto armado en el Caribe colombiano, y, finalmente, la Corporación Yariguíes, que se opone a los proyectos de extracción petrolera que afectan la vida en los ecosistemas del Magdalena Medio.

Confiamos en que mostrar su labor y sus luchas ayude a que la sociedad reconozca el aporte invaluable que estas personas hacen a la democracia colombiana y, a la vez, contribuya a atenuar la estigmatización a la que son sometidas.

Prólogo
Criaturas solidarias

¿Qué se dirá en uno o dos siglos de una asociación que acoge a migrantes trans en Cúcuta, o de un grupo de investigación y defensa de especies como la rana arlequín en el Parque Nacional Tatamá, o de los protectores del territorio en Tierralta?

La solidaridad es un acercamiento al otro —con frecuencia desconocido—, con quien nos une una suerte de hermandad que no necesariamente está vinculada a la especie (pensemos en quienes cuidan las aguas, la fauna y la flora, por ejemplo); dicha proximidad crece con la suma de otros y adquiere poder en situaciones adversas. En algún rincón de nuestra memoria reposan las formas de la solidaridad de las que hemos sido parte, beneficiarios o testigos, y todas ellas están relacionadas con la reflexión (entendida como producto del reflejo) y con la exaltación del lugar del otro en el mundo. Acompañar una posición política, una lucha social o una historia de vida es reconocer en cada una de ellas su significado colectivo, una lección para las generaciones venideras.

La palabra latina *soliditas,* raíz de solidaridad, designa algo "físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza". Diversas fuentes bibliográficas la definen como una adhesión circunstancial a la causa o la empresa ajena. En la teología cristiana, la solidaridad *(solidaritas)* está vinculada a la fraternidad entre los seres humanos "que les impulsa a buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos son iguales en dignidad gracias a la filiación divina". Si nos referimos al derecho, se considera solidarios a quienes en una sociedad "son individualmente responsables por la totalidad de las obligaciones". En lo jurídico, implica responsabilidad compartida.

Nos preocupamos mucho —con razón— por la memoria, pero solemos enfatizar en los mecanismos o las razones que conducen a las guerras y no en aquellos que han permitido que las sociedades salgan adelante: "Tradicionalmente se ha hecho hincapié en la importancia de la competencia entre individuos y en la supervivencia del mejor adaptado como una de las características de la evolución [...], hoy sabemos que la cooperación y la solidaridad han sido claves para garantizar el desarrollo de nuestro género el género *homo,* frente a otros competidores directos como los grandes depredadores", escribió Rodrigo Alonso Alcalde, del Museo de la Evolución Humana (España), en el libro *¿Qué nos hace humanos? Un manual para pensarnos en las aulas.*

En el año 2003, en Dmanisi, Georgia, descubrieron una mandíbula humana de 1,8 millones de años. A pesar de que se calcula que vivió hasta los cuarenta o los cincuenta años, su dueño, el llamado *Homo georgicus,* no tenía dientes; expertos coinciden en que la única manera en que ese individuo pudo haber sobrevivido fue gracias a la ayuda de los demás. Se pre-

sume que otros trituraban (masticaban) los vegetales o trozos de carne para que él los pudiera digerir.

Las sociedades primitivas entendieron que la cohesión social, atender a los más débiles, fortalecía sus posibilidades de supervivencia. El ya citado Museo de la Evolución Humana es muestra de ello: "Quizá los *heidelbergensis* fueron los primeros humanos que tuvieron actividad simbólica, es decir, que empezaron a entender o interpretar lo que les pasaba. Y se dieron cuenta de que había que pelearse menos y arrimar más el hombro ante los problemas", escribió la periodista Belén de la Banda en *El País*. Y no, la solidaridad no es un "rasgo distintivo de nuestra especie". Los chimpancés, orangutanes, delfines y pingüinos también son solidarios, según han demostrado estudios científicos.

Ocho cronistas: Mateo Yepes Serna, Karen Parrado Beltrán, Lizet Cuartas Echeverry, Valeria Arias Suárez, María Camila Restrepo Giraldo, Ángela Martin Laiton, Lina Robles Luján y Xiomara Karina Montañez Monsalve, narran la solidaridad, se convierten en exploradores de la condición humana en diversos parajes de la geografía colombiana. Las páginas de este libro son luz cenital sobre vidas que se entregan al cuidado de otros (seres humanos, fauna, flora, tierra, aguas...) y que, en contextos de guerra, significan esperanza.

Así como las tensiones sociales y el conflicto armado sacan lo peor de las personas, tienen también el poder de germinar bondad, los más inusitados mecanismos de protección. A Luz Elena, Valentina, Darling, Juan, Luisa, Nedzib, Nicoll, Suri, Yhoiner, Patricia, Alejandra y Benjamín, Andrés, Mario Alberto, Óscar o Yesid... tal vez, en uno o dos siglos, no se les recordará como "héroes". Ellos, como tantos que no tienen pedestal, son protagonistas de la evolución de la humanidad.

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Los amigos de la rana arlequín

Por Mateo Yepes Serna

Mateo Yepes Serna (1995). Periodista de Medellín, editor y reportero de investigación. Ha trabajado como periodista para medios como *La Patria* y *Cuestión Pública*, y ha sido editor de medios alternativos como *Ciudad Morada*, en Medellín. Ahora trabaja como reportero y redactor independiente en proyectos periodísticos digitales.

Blas Cárdenas, Henry Mosquera y Ányeli Tello son quienes lideran la Asociación Amigos de la Fauna y la Flora, en Santa Cecilia, un corregimiento de Pueblo Rico, Risaralda. Desde hace catorce años trabajan por el medioambiente de su región, que históricamente ha sido foco de traficantes ilegales de especies de fauna. Hoy, con universidades y organizaciones ambientales, tienen como propósito cuidar a una pequeña rana endémica de la zona y trabajar en homenaje a Yolanda Maturana, lideresa de la organización asesinada en febrero del 2018.

Sol, lluvia y neblina

En Santa Cecilia los días transcurren así: sol, lluvia y neblina, en ese orden. En las mañanas, el sol se asoma por los huecos que dejan las montañas de la cordillera Occidental y calienta las calles, las casas y los bosques; después un aguacero cae sobre ese calor sofocante. Cuando la lluvia cesa, normalmente después de horas de golpear duro contra la tierra y el pavimento, una espesa niebla desciende desde las montañas y oscurece el día.

Para llegar desde Pereira, la ciudad más cercana, hay que recorrer unos cien kilómetros por una vía zigzagueante y con taludes que amenazan con venirse abajo como consecuencia de las lluvias. El viaje entre estos dos lugares se siente largo, pesado. Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Es el último centro poblado en la carretera que conecta a Pereira y Quibdó; en adelante, ese camino se adentra en la espesa selva chocoana.

Pueblo Rico y Mistrató son los únicos municipios de Risaralda que forman parte de lo que se conoce como el Chocó biogeográfico: una gran zona en la que confluyen siete departamentos que comparten la riqueza natural y cultural del Pacífico colombiano.

Cuando llegué a Santa Cecilia hacía ese calor sofocante típico de antes del aguacero. En la plaza principal del corregimiento había ruido. Los parlantes, uno en cada esquina, se disputaban por sonar más duro. Los cantos de Diomedes Díaz

se confundían con los de Yeison Jiménez. De vez en cuando un reguetón ganaba protagonismo.

Santa Cecilia siempre está vigilada por imponentes montañas que se levantan hasta los cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar y que conforman el Parque Nacional Tatamá, en donde está la zona de reserva del Alto Amurrupá. Su casco urbano, de apenas cuatro calles, está justo dentro del cañón del río San Juan, un afluente que nace en las montañas de Risaralda, pero que se hace grande en la selva chocoana.

Dentro del Tatamá, de acuerdo con Parques Nacionales, hay un páramo virgen que convierte esa zona en una de las mejores conservadas de Risaralda y del país. Por eso Santa Cecilia es destino de investigadores, docentes y estudiantes de universidades que, junto con la comunidad, trabajan en la conservación del territorio.

Santa Cecilia es también un territorio triétnico, de al menos ocho mil habitantes negros, mestizos e indígenas de dos pueblos: emberá chamí y emberá katío. Los restaurantes ofrecen comidas y bebidas típicas del Pacífico: son una pequeña muestra de la diversidad cultural de esta zona, que sus habitantes y las instituciones intentan conservar. En el 2014 la Corporación Autónoma Regional de Risaralda —Carder—, en alianza con el Instituto de Investigaciones del Pacífico —IIAP— y la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal —Unisarc—, llegó a Santa Cecilia para ejecutar un plan de manejo de los recursos naturales.

Tatiana Margarita Martínez, directora encargada de la Carder desde noviembre del 2020 hasta noviembre del 2021, explicó que en la elaboración de ese plan de recursos querían aprovechar el conocimiento ancestral de las comunidades, hacer un acompañamiento que encaminara a la región hacia el desarrollo sostenible y que las normas que se establecieran

desde la corporación, como autoridad ambiental en Risaralda, estuvieran en armonía con las costumbres y los saberes de los habitantes. Para lograr ese propósito encontraron un aliado en Santa Cecilia: la Asociación Amigos de la Fauna y la Flora —Asoafa—, un colectivo que desde el 2008 defiende el medioambiente y sirve como mediador para ejecutar los proyectos ambientales.

Catorce años contra la corriente: la historia de Asoafa

Ányeli Tello me dio la bienvenida en Santa Cecilia. Al mediodía de ese sábado, llegó con paraguas en mano a la plaza principal del corregimiento. Ella es la presidenta de Asoafa, un colectivo comunitario de Pueblo Rico, Risaralda, que nació gracias a una investigación e inventario forestal que reconoció la presencia de nuevas especies de flora y fauna en el Alto Amurrupá.

De esa investigación surgieron unos folletos hechos por grupos de investigación de la Unisarc, en alianza con líderes ambientales de la comunidad. En el inventario forestal se contabilizaron 19 especies de anfibios, entre ranas, sapos y salamandras; 31 especies de serpientes, 8 venenosas y 23 inofensivas para el ser humano; y 6 tipos de murciélagos, entre insectívoros, vampiros y nectarívoros.

Ese día nos volvimos a encontrar cuando ya acababa la tarde y la neblina empezaba a bajar por las montañas. Eran las cuatro y media, aún no llovía, pero el cielo auguraba uno de esos aguaceros típicos del Chocó biogeográfico y de esa zona de Risaralda. Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales —Ideam— demuestran que en Pueblo Rico y los límites con el Chocó llueve mucho. Mientras en Medellín, Antioquia, caen al año un promedio de 1.685 mi-

límetros de lluvia, en Pueblo Rico se superan los cinco mil milímetros en el mismo periodo.

Caminé hacia el occidente, por la carretera principal, y sentados en una mesa ubicada en el antejardín de una casa, vi a los demás miembros de Asoafa, todos con sus chalecos, que en el pecho llevan el logo de la asociación. Henry Mosquera Gracia, dueño de la casa en donde estábamos, tomó la palabra. Él y Blas Antonio Cárdenas, sentado en la misma mesa, son los únicos cofundadores de Asoafa que aún continúan en la asociación. Otros, por distintos motivos, han dejado de pertenecer.

—Al principio éramos doce o trece personas. La gente se fue retirando y ahora quedamos seis —dice Henry, mientras sostiene una vieja cámara Canon en sus manos, pasando hacia la derecha las fotos que ha tomado en su experiencia como líder comunitario.

Jurídicamente se conformaron en el 2011, explica, mientras hace un recuento de las investigaciones que han logrado, de las especies que han encontrado y de los turistas extranjeros que han guiado por las montañas que rodean Santa Cecilia.

—¿Qué tiene de especial Santa Cecilia? —pregunté.

Blas se movió en su silla. Todos lo miraron. Él es el que más conoce el territorio y quien se dedica casi en un ciento por ciento a las actividades de la asociación. Los demás, como Henry y Ányeli, tienen otros trabajos entre semana que limitan su disponibilidad para las actividades de Asoafa.

—Santa Cecilia tiene un potencial que la gente no entiende y que tampoco les interesa saber. Este corregimiento está virgen en el tema de investigación; a pesar de que se han hecho convenios, no se conoce el potencial de la zona —responde Blas.

Él es crítico. Se ha curtido con los años. Sabe cómo se trabaja por una comunidad, entiende las dinámicas burocráticas

del Estado y no deja de reconocer lo importante que es Asoafa para él: "Para mí es muy importante la asociación porque nosotros hacemos investigación en el territorio. Con apoyo o sin apoyo, la hacemos", sentencia.

La conversación continuaba y entre todos se rotaban el micrófono, ubicado encima de la mesa. A pocos metros de allí, junto a la casa de Henry, que queda en diagonal a la de Blas, está construida la sede de la asociación, en todo el borde de la carretera. Allí, empleados del Invías trabajan para intentar pavimentar lo que más puedan entre el casco urbano de Pueblo Rico y la frontera con Chocó, unos cuarenta kilómetros, aunque el clima casi siempre les juega malas pasadas con derrumbes.

El ruido hacía difícil la conversación. Volquetas, camiones, camionetas, chochos —como se conocen los mototaxis— y buses aprovechaban una de las pocas rectas que tiene ese tramo para acelerar y hacer temblar las casas. El polvo que levantaban se mantenía en el ambiente por minutos, hasta que pasaba otro carro más rápido y se lo llevaba por delante.

Entendí que en Asoafa trabajan con las uñas. Ányeli, Blas y Henry lo hicieron saber. A pesar de que llevan catorce años trabajando por Santa Cecilia, y de tener vínculos con la Carder, la Unisarc y el IIAP, los miembros de la asociación son enfáticos en que no tienen suficientes equipos, botas, chalecos, cámaras ni binoculares, que son esenciales para su trabajo en el campo.

Eso sí que lo sufren cuando salen con los niños de un semillero ambiental al que acompañan. Por no tener binoculares suficientes, deben compartirlos, entonces mientras alguien ve algún pájaro en un árbol con los binoculares, el otro tiene que esperar. Muchas veces vuelan, y los niños se quedan con las ganas.

—¿Qué los motiva a seguir trabajando a pesar de que no tienen la ayuda que esperan? —les pregunté.

—Primero, porque desde Asoafa somos los que conocemos y sabemos qué hay en el Alto Amurrupá. Por eso seguimos luchando para que el mundo entero, a través del semillero y de las publicaciones que hacemos, se dé cuenta de lo que tenemos: animales, flora y fauna —explicó Ányeli.

Ella hablaba con vehemencia, con fuerza y casi con rabia. Su voz la describe como lo que es: una líder que ha sacado adelante sus estudios y a su hijo. Es joven, tiene 32 años y desde el 2019 es la presidenta de Asoafa. Por eso, insistí:

—¿Entonces qué necesita Asoafa para que funcione como lo sueñan?

—Tener la dotación necesaria, como equipos. También un centro investigativo, donde tengamos huellas y plantas para sacarles estudios con equipos especiales —respondió.

Blas asintió mientras Ányeli terminaba de hablar. Comparten esa sensación de que están solos y las mismas ideas en cuanto a las necesidades de Asoafa. Para Blas, lo más importante es que puedan seguir investigando en el territorio con sus aliados, porque esa zona de montañas protegidas tiene plantas y especies poco conocidas, pero ellos no tienen los insumos suficientes para investigarlas. "Necesitamos una cámara, cámaras trampa, recursos, un GPS. Nosotros buscamos con otras instituciones el computador. Necesitamos tomar coordenadas de donde vemos las especies", explicó Blas.

La contratación con entidades públicas también ha impedido que la asociación despegue. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, Asoafa tiene cientos de barreras para acceder a contratos públicos con, por ejemplo, la Carder, por las limitaciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, cuyo objeti-

vo es disminuir la contratación de sociedades sin reconocida idoneidad.

Desde la Carder extienden la misma inquietud. Su directora, Tatiana Martínez, expresa que con ese decreto se presentaron nuevos retos a la hora de contratar con entidades sin ánimo de lucro. Esta norma les exige a las asociaciones, de acuerdo con Martínez, fortalecer sus organizaciones y sus capacidades técnicas. Algunas, por sus condiciones, no lo logran. Por eso la decisión de la corporación ha sido contratar con universidades como la Unisarc y así garantizar que el trabajo en Santa Cecilia no se pierda.

A las voces de Ányeli, Blas y Henry, y a los ruidos de los camiones, buses y chochos se sumó un aguacero que llegó casi a las cinco y media de la tarde. Primero fue suave y después torrencial. Para escucharnos entre los que estábamos reunidos había que gritar. Y esa lluvia llegó justo cuando Blas empezó a hablar del conflicto armado en Santa Cecilia.

La historia que quieren olvidar

El 17 de marzo del 2000, cuando caía la tarde, el frente Aurelio Rodríguez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC— se tomó el casco urbano de Santa Cecilia. "Eran las tres de la tarde cuando sonó el primer *violinazo*", recuerda Blas. "Salí, me monté al colegio y vi a los que estaban *voliando* plomo desde la montaña".

Según informó *El Espectador* en una nota publicada en diciembre del 2018, varios guerrilleros llegaron esa tarde a tomarse la estación de policía, que era un viejo rancho de dos pisos, a un costado de la plaza del corregimiento. En esta toma hubo dos víctimas inmediatas: Édgar Palacio, exconcejal

y carnicero, y Luis Norberto Pérez Ruiz, cabo primero de la policía, a quien secuestraron allí y mataron dos años después en Granada, Antioquia.

En Santa Cecilia recuerdan ese momento con horror. Blas fue quien tuvo que apagar el fuego para que las llamas no llegaran a las casas, construidas de bahareque, un material que al tocar una chispa se enciende sin piedad. Dos días después, de acuerdo con informes de prensa, las FARC reconocieron la autoría de los hechos. Además de la toma, la guerrilla atacó el convoy de apoyo que llegaba de Pueblo Rico, Apía y La Virginia, Risaralda. En dos emboscadas murieron el intendente Raúl Alonso Orozco Osorio y el soldado voluntario Willington Rodríguez Llandú. Cuatro hombres más resultaron heridos.

En una sentencia condenatoria en contra de uno de los involucrados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira reveló detalles del ataque y de las capturas. Cinco casas quedaron destruidas y otras cuarenta sufrieron daños de consideración. La estación de policía, la casa cural y el centro de salud también quedaron en ruinas.

Por los hechos hubo tres condenas, entre ellas la de Pedro Nel Quiceno Rueda, sentenciado a pagar 28 años y diez meses de prisión por ser coautor en los delitos de homicidio, terrorismo y secuestro. Blas, además, contó que lo capturaron injustamente y que alcanzó a estar seis meses y 17 días en prisión.

En total, Santa Cecilia vivió al menos tres años de zozobra a causa del conflicto. Pero esos recuerdos los quieren dejar atrás. No quieren que algo semejante ocurra de nuevo y ya están logrando evitarlo. “No queremos vivir otra vez el conflicto. Eso no deja evolucionar a un pueblo. Si con lo que pasó no hemos podido avanzar, si vuelve a suceder sería catastrófico. Lo que hemos hecho con la asociación quedaría en el olvido”, dice Ányeli, quien también culpa al periodismo de la

mala fama que hasta hace poco tuvo Santa Cecilia y que tanto desean redefinir: “El periodismo nos hunde y cuenta lo peor de acá, no muestra lo mejor, no muestra las enseñanzas ni nada”, concluye.

Yolanda Maturana

La historia de María Yolanda Maturana es también un episodio de los tristes que se recuerdan en Santa Cecilia. A los miembros de Asoafa les duele mucho más. El primero de febrero del 2018, a las siete y media de la noche, un hombre entró a donde vivía María Yolanda, una casa de maderas blancas, a unos pasos de la orilla del río San Juan, y la asesinó mientras comía.

Ella fue una de las que fundó Asoafa años atrás, junto con Henry, Blas y otras personas. María Yolanda participó desde el principio en las actividades, se capacitó y dio comida y techo a los investigadores que llegaban al corregimiento a trabajar.

Luz Elena Muñoz Arroyave, decana de la Facultad de Ciencias Básicas de Unisarc, la recuerda con una anécdota: “Hace unos dos años hubo una Mesa Ambiental en Santa Cecilia, con el director de la Carder de ese entonces. Citaron a toda la comunidad, al cura, al de la policía, a los actores sociales. Estábamos en plena reunión y levantó la mano una señora que se llamaba Yolanda Maturana. Cuando intervino, todo el mundo se quedó callado y a mí se me vinieron las lágrimas de ver el impacto que una actividad académica podía generar en la vida de la gente. Ella se levantó y le dijo al director de la Carder: ‘Doctor, todo lo que ustedes han dicho es muy lindo, la reforestación, la conservación de la comunidad, lo que la Carder ha generado en el territorio de la mano de Unisarc, pero yo solamente quiero decir esto —y habló duro— y es

que yo le quiero dar las gracias por habernos traído a la universidad, porque gracias a que los muchachos están aquí y duermen en mi casa y que yo les puedo hacer de comer, yo he tenido posibilidades de vida aquí en Santa Cecilia'".

Con la voz entrecortada, Luz Elena recordó a su amiga, su valentía, esa que en algún momento le transmitió y que silenciaron los violentos. El 21 de febrero del 2018 el culpable de su muerte, Luis Alfonso Pino Bonilla, llegó al Juzgado Primero Municipal de Dosquebradas, Risaralda, para enfrentarse a las audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos. Aquel día, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Meses después, en la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía le endilgó los mismos cargos que sirvieron de fundamento para que un juez condenara al hombre el 17 de junio del 2019, un año y medio después del crimen.

María Yolanda era una lideresa reconocida en Santa Cecilia y en otros lugares del país. Junto a Blas y a Henry eran los representantes de Asoafa en su territorio. Su muerte, por supuesto, preocupó a defensores de derechos humanos y a líderes ambientalistas. El micrositio digital "La paz en el terreno, una alianza de Rutas del Conflicto con Colombia 2020", de *El Espectador*, detalló en un perfil que Maturana fue líder desde muy joven, en la Junta de Acción Comunal de Pueblo Rico. Su trabajo estuvo enfocado en el cuidado del medioambiente y en contra de la minería ilegal y la contaminación de ríos y quebradas entre Risaralda y Chocó. El informe señaló también que María Yolanda había expresado a algunos compañeros sus temores por posibles ataques contra su integridad.

Una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo del 2 de mayo del 2018 confirmó esas versiones. En el texto, denunciaron:

> [...] la lideresa había sido hostigada y presionada por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en agosto de 2017 [...]. Su esposo había sido asesinado en octubre de 2015. Por estos hechos, la Policía Nacional había incluido a María Yolanda en el programa de Plan Padrino de esa institución, que consiste en mantener contacto con personas en riesgo para garantizar su seguridad, el cual fue retirado el 31 de enero de 2018.

Es decir, un día antes de su homicidio.

En Santa Cecilia y en Asoafa poco se habla del tema. La extrañan, eso sí, y piden que esos hechos violentos nunca se repitan. "Yolanda era incansable. Era muy pilosa. Nos dolió mucho esa situación, no sabíamos la problemática que tenía ella. De un momento a otro fue asesinada. Nosotros solo pedimos que no se repitan esos crímenes contra los líderes sociales", dijo Henry cuando le pregunté por Yolanda. Pero no quiso profundizar en la problemática. Es un tema que tocan con cuidado. Con temor. No quieren que algo así vuelva a ocurrir.

Luz Elena, en su oficina, visiblemente afectada por hablar del tema, explicó lo que ocurrió: "Su muerte fue un tema familiar. Yolanda tenía un hijo de no muy buenas compañías y él tuvo que irse de Santa Cecilia por amenazas. En términos coloquiales, para hacerlo salir y poderle echar mano, pagó Yolanda", reveló Luz Elena. "Nosotros estuvimos en su sepelio. Fueron todos los muchachos, no se sabe quién lloraba más, porque Yolanda los recibió en su casa, les dio de comer", agregó.

De selva para adentro

Los fines de semana es cuando más trabajan en Asoafa. Henry trabaja en Invías, Blas en unas parcelas y Ányeli tiene compromisos académicos y laborales en el centro de salud. Por eso, los sábados y los domingos son los días para salir a caminar en

la selva y continuar con su jornada de conservación. Ese domingo, Henry estaba listo a las 6:50 de la mañana en la puerta de su casa. Tenía puesta una gorra y un chaleco con el logo de Asoafa, unas botas pantaneras y un machete en el cinto. De su cuello colgaban los binoculares que hace tanto quiere cambiar por unos más modernos.

Gracias al trabajo en alianza con la Carder y el IIAP, la asociación y la comunidad en general cuentan, desde hace unos años, con unos senderos ecológicos especiales para el avistamiento de aves. A ellos se llega fácil. A un costado de la carretera principal, unos metros más abajo del casco urbano de Santa Cecilia, hay un letrero que da la bienvenida al Parque Nacional Tatamá. Luego de bajar unos pasos hay un puente colgante desvencijado, construido con unas maderas que se han ido cayendo al río con los años.

El río San Juan traza los límites del corregimiento y lo atraviesa de principio a fin por el costado sur. Su longitud es de 380 kilómetros y nace en el cerro de Caramanta, cerca de Mistrató, Risaralda. Carga tanta agua y su caudal es tan poderoso que el sonido que hace se asemeja al de las peores tormentas. Gracias a él en Santa Cecilia nunca se siente el silencio. La ruta en el sendero de avistamiento es en el sentido contrario al flujo del río. Llevábamos unos cinco minutos caminando cuando Henry se detuvo, aguzó su oído y miró a un costado. En un árbol, escondida entre las ramas, estaba una oropéndola, un ave típica de la región.

Con una mano Henry sostenía los binoculares, y con la otra intentaba señalarme la ubicación del pájaro. Él ya está acostumbrado a buscarlos entre el camuflaje de los árboles: con un sonido suave le bastó para saber que ahí estaba la oropéndola y en un minuto, gracias a los binoculares, pudo ubicarla a lo lejos. Y allá estaba. En un árbol alto se movió ese pájaro de

cuerpo negro, pico largo y cola amarilla que con dos aletazos quedó fuera de nuestra vista.

El sendero continúa por la montaña y bordea gran parte de la orilla del San Juan, que cambia de color con su recorrido. Al pasar Santa Cecilia toma un tono café por la suciedad que recibe, pero antes del casco urbano su color es de un azul casi turquesa, y sirve como balneario para quienes quieran pasar un domingo al borde del río en una caseta que alquila un lugareño. Detrás de una pared reposan cientos de botellas vacías que alguna vez tuvieron un licor que amenizó la fiesta al ritmo del turbulento San Juan.

Regresamos por el mismo sendero que se mantenía transitable, a pesar de las lluvias de los últimos días. Henry contaba de su vida: nació en Bagadó, Chocó, y por culpa del conflicto armado tuvo que desplazarse hasta Santa Cecilia en 1998, en búsqueda de paz. Pero allí también le tocó vivir algo similar con la toma de Santa Cecilia, en el 2000, y migró hacia Pereira. La vida de la ciudad lo impulsó a regresar, nunca se acostumbró a las costumbres citadinas, y no se ha movido desde entonces.

Nos detuvimos. Henry escuchó algo y de inmediato paró. Miró para los lados, identificó qué había alrededor y por fin vio lo que buscaba. Esta vez no fue la oropéndola, sino una rana arlequín, también conocida como la *Oophaga histriónica*, una rana multicolor que es endémica de Santa Cecilia.

De traficantes a protectores

Si algo han hecho bien las entidades que apoyan a Asoafa en Santa Cecilia es convencer a sus integrantes de que trabajen por su tierra y por sus especies. Más tarde, ese mismo domingo, Blas me confesó que antes de pertenecer a Asoafa traficó con mamíferos y anfibios, desde 1980 hasta 1996.

Esa rana que estaba al frente de nosotros, sobre la corteza de un árbol al borde del San Juan, es de las más solicitadas en el mercado ilegal internacional. Por eso, las alianzas entre la Carder, Unisarc, IIAP y la Wildlife Conservation Society —WCS— últimamente han tenido como meta generar conciencia en los habitantes de Santa Cecilia, para que, en vez de vender las ranas en el mercado ilegal, las conserven en su hábitat y las conviertan en un símbolo del lugar. Por eso es que hoy llegan también turistas de todos los lugares del mundo para ver esta pequeña rana, que no supera los cinco centímetros de largo.

La rana arlequín está en peligro crítico de extinción. Su cuerpo negro o marrón es el contraste perfecto para las bolas amarillas, anaranjadas o rojas que tiene sobre la piel. El 13 de abril del 2019, la policía del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá capturó a un hombre que pretendía sacar del país 424 ranas de esa especie y *Oophaga lehmanni*, también conocida como rana venenosa de Lehmanni, ambas en peligro de extinción.

Al hombre lo habría contactado un ciudadano alemán que le pagó los tiquetes desde Bogotá hasta San Pablo, Brasil, para después viajar a Alemania. La orden había sido ocultar a los anfibios en pequeños rollos fotográficos. Esas condiciones hicieron que al menos cuatro de las ranas murieran antes de ser rescatadas por policías ambientales.

Luz Elena Muñoz explica que el tráfico ilegal de fauna es el tercer negocio más lucrativo del mundo, luego de las drogas y las armas. Con lo que les pagaban a los habitantes de Santa Cecilia por las ranas les alcanzaba para comprar la comida de días, por lo que cambiarles el chip fue un desafío para las organizaciones y las universidades que se lo propusieron.

—¿Cómo fue cambiarles la mentalidad a quienes antes traficaban para sacarlos de ese negocio? —le pregunté a Luz Elena.

—Haciendo lo que nosotros estamos haciendo: creando conciencia para que ellos también vean la biodiversidad no como un sitio a donde uno va y saca, porque va a llegar el momento en que ya no habrá para sacar, y mostrándoles que tienen la posibilidad de generar desarrollo a partir de la conservación de la biodiversidad. Y ellos ya lo han visto. ¿Tú cómo crees que Blas se sostiene? Porque va un extranjero que quiere ver el colibrí con la cola roja y le paga cien dólares el día. ¿No es mejor tener el colibrí vivo para que le paguen por ir a verlo que no tenerlo? —me pregunta Luz Elena.

La WCS, en compañía de la Carder y la Unisarc, ha adelantado proyectos en conjunto con la comunidad, con miras a proteger esta especie amenazada. La idea es construir un plan de acción para la conservación de la rana arlequín, que ha reducido su población por culpa de la pérdida del hábitat y el tráfico ilegal de fauna.

Entre las actividades propuestas en el plan de acción están las jornadas de educación ambiental para la sensibilización, el conocimiento y la apropiación de la biodiversidad, entre otros ejercicios, que se hacen con niños y niñas de la Institución Educativa Agroambiental Pío XII de Santa Cecilia.

El Servicio de Información sobre Biodiversidad Mundial (GBIF, por sus siglas en inglés) demuestra que la región del Chocó biogeográfico, donde está Santa Cecilia, es la que más ejemplares de *Oophaga histriónica* ha registrado en el mundo. Las cifras que arroja la base de datos indican que desde que iniciaron los registros el Chocó es el departamento con más avistamientos, con 1.289; le siguen Nariño, con 139; Cauca, con 88; Risaralda, con 69; Valle del Cauca, con 62, y Antioquia, con 13. De los 69 registrados en Risaralda, 28 corresponden a avistamientos efectuados en Santa Cecilia. Sin embargo, del mapa disponible en el sitio web se infiere que los otros 41 también fueron en esa zona de la región.

Las alianzas también se conservan

Todos los actores que trabajan por Santa Cecilia y la conservación de sus especies y tradiciones coinciden en que las alianzas son importantes para sacar adelante su territorio. Luz Elena Muñoz empezó a trabajar con la Unisarc desde finales de la década de los noventa. Inició dando clases de biología y genética en el programa de Zootecnia y luego trabajó para crear el programa de Ciencias Básicas. En Risaralda, hasta ese momento, no había un programa de ese tipo, por lo que le tocó empezar de cero en la consolidación de grupos de investigación y equipos de trabajo.

Hoy, después de varios años, ya existe un grupo de investigación consolidado: el Grupo de Investigación en Biología de la Conservación y la Biotecnología Unisarc, que es Categoría B en Colciencias, y que es el que trabaja de la mano con Asoafa en Santa Cecilia. Luz Elena explica: "Con Unisarc venimos haciendo ese trabajo desde 2012. Empezamos a entrar nuevamente a la zona con iniciativas de trabajo, un poco desarticuladas al principio, con recursos de Carder y de la universidad, e identificamos líderes del territorio. Entre ellos nos encontramos con Blas Antonio Cárdenas, con quien desarrollamos unos procesos de más largo alcance que articulamos con las líneas de trabajo del grupo de investigación".

Para ella, lo más importante que han logrado con Asoafa y con la comunidad en general es que los han hecho apropiarse de su territorio. No es el modelo tradicional de investigación en el que un académico va a una zona y extrae conocimiento, publica su artículo y después a la comunidad no le queda nada, sino que en Unisarc trabajan con miembros de la comunidad y los consideran como coinvestigadores.

Mientras Luz Elena me contaba eso, recordé a Blas cuando estábamos sentados en su casa, luego de la caminata que hice

con Henry. Hablamos en un cuarto pequeño, justo después de la entrada, donde solo había una mesa, dos sillas y un televisor. Fue allí donde me contó de su pasado con el tráfico ilegal de especies. Pero lo que más se le notó en la cara en ese momento fue el orgullo de ver su nombre estampado en los folletos que hacen Unisarc, Carder, IIAP y WCS con las especificaciones de las especies que habitan su territorio.

Hay uno dedicado a los murciélagos de Santa Cecilia, otro a las ranas venenosas y no venenosas, otro sobre las serpientes y otro sobre los monos. En todos hay un párrafo especial de agradecimiento a Asoafa y a Henry y a Blas como coinvestigadores:

> Este trabajo fue posible gracias al convenio entre Carder y Unisarc para el apoyo al monitoreo de fauna y flora en el AME Alto Amurrupá por parte de los compañeros y compañeras de Asoafa. Gracias a todas las personas que participaron durante las jornadas de campo, especialmente a Henry Mosquera y Blas Antonio Cárdenas.

El orgullo también se le nota a Blas cuando, en medio de una charla, saca su celular para mostrar los videos y las fotografías que ha tomado con turistas en las caminatas que guía por el Alto Amurrupá. Su repertorio está lleno de ranas, serpientes, pájaros y murciélagos.

Luz Elena hace énfasis en el respeto que le tienen a la comunidad y cómo eso ha sido una ayuda para que el trabajo en Santa Cecilia funcione: "Uno no puede como investigador ni como ser humano responsable ir a una comunidad, usufructuar el conocimiento y abanderarse de un producto. Esas comunidades, donde hay tantos saberes ancestrales, valiosísimos, donde hay tanta riqueza cultural, gastronómica, biológica, paisajística, merecen que personas que tienen criterio e inteligencia, no solo profesional sino de pertenencia por un

territorio, generen un proceso de desarrollo. No hacerlo es irresponsable desde todo punto de vista".

Lo que obstaculiza la ejecución de los proyectos, dice la decana, es la disponibilidad presupuestal. Muchas actividades están relacionadas con los recursos disponibles, entonces cuando un convenio se acaba, muchas veces se quedan sin ingresos hasta que se firma otro.

La pandemia provocada por la covid-19 también jugó en contra de Asoafa a la hora de celebrar procesos con las entidades de carácter departamental. Fue una época difícil. Ányeli, la presidenta de la asociación, dice que llevan dos años sin celebrar procesos porque con la pandemia no hubo contratación en ninguna entidad y apenas se están recuperando del receso obligatorio. El último contrato que figura en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), celebrado con un miembro de Asoafa es uno que suscribió Blas con la Carder, en el 2019, con el objeto de apoyar a la entidad en la implementación de acciones de conservación de la biodiversidad en Santa Cecilia.

Lo que viene para Santa Cecilia

Más allá del plan de conservación de la rana arlequín, en Santa Cecilia se desarrollan otros proyectos que tienen que ver con la reactivación económica después de la recesión por la pandemia. Moisés Mosquera Blandón, coordinador de la línea productiva del IIAP, explica que las características del Chocó biogeográfico impulsan la dinámica productiva que se disminuyó debido a la emergencia sanitaria. Incluso las comunidades, de acuerdo con Mosquera, promovieron el uso de plantas medicinales para luchar contra los efectos del virus.

Todos esos conocimientos ancestrales llevaron al instituto a pensar en proyectos de emprendimientos sostenibles de la

biodiversidad que tienen que ver con medicinas ancestrales, como el uso de plantas, y otros relacionados con la gastronomía típica de esta región de Colombia. Dice Moisés: "Queremos darles una opción sostenible en lo que conocemos como mercados verdes o sustentables a partir de la información que hemos investigado. Un ejemplo son unas mujeres de Santa Cecilia, conocedoras de la gastronomía ancestral, que capacitamos en diferentes temáticas como una estrategia de rescatar su conocimiento, pero también como una opción económica".

El restaurante El Sabor de Santa Cecilia queda a un costado de la vía principal, cuenta con cuatro mesas y tiene un letrero que sirve de menú. Los platos que ofrecen van desde sancocho trifásico tradicional hasta sudado de pezuña o guiso de yuyo, una hierba comestible típica de la región. También venden el tradicional jugo de borojó, famoso por supuestamente tener virtudes afrodisíacas.

Antes, las tierras de Santa Cecilia eran perfectas para el cultivo de chontaduro. Había siembras extensas y la economía dependía de la venta de ese fruto tradicional del Pacífico colombiano. Pero ese cultivo se acabó, según Luz Elena, por intentar aplicar el modelo productivo convencional: "Ellos cultivaban el chontaduro en medio de sus parcelas, con el rastrojo y todo, pero el modelo productivo convencional llegó a decirles que no, que había que tumbar y sembrar cada dos metros. Ellos lo hicieron y llegó el picudo, un escarabajo considerado como plaga, y se lo llevó todo. Como ellos lo hacían antes, el picudo tenía su controlador biológico (la maleza), así ya no, entonces se acabó el chontaduro".

Ahora, ante la ausencia del chontaduro, tienen varios caminos por explorar. Uno, acompañado por Unisarc, es el cultivo de cacao. La idea de Luz Elena es cultivarlo, producirlo y comercializarlo bajo la marca de la rana arlequín, para con-

tribuir también a la conservación de esa especie amenazada, tal y como sucede en países de África con el orangután. Sin embargo, es consciente de que ese proyecto requiere de la sinergia de las instituciones para salir adelante.

Otro proyecto que también tiene que ver con la gastronomía y los saberes ancestrales es apoyar la producción de la balsámica, una bebida alcohólica hecha a base de viche y que tiene hierbas típicas del bosque. "Comunidad negra que se respete sabe qué es balsámica, se ha criado con ella. A eso le atribuyen una cantidad de bondades para la salud", dice Luz Elena. Una botella de balsámica puede costar hasta trescientos mil pesos.

La última idea que espera impulsar Unisarc en el corto y el mediano plazo entre los habitantes de Santa Cecilia es el turismo científico. Con eso ya había trabajado Moisés, desde el IIAP: "Más allá de promocionar especies del territorio y captura de carbono, aparece fuertemente el tema de turismo ecológico y ambiental. La comunidad es muy propositiva para generar alternativas propias para su desarrollo. Siempre están dispuestos para las convocatorias que hacemos o, por el contrario, nos llaman cuando estamos muy demorados".

Él, como director de la línea productiva del instituto, valora la apropiación de la comunidad con los proyectos que adelantan ellos y otras entidades, como Unisarc y la Carder.

Lo novedoso con el tema del turismo lo aportará Unisarc, en caso de que se apruebe la idea. Luz Elena espera crear un diplomado en turismo científico y turismo de naturaleza. "Ahí podemos hablar de bioprospección a unos niveles mayores de investigación con todos los recursos que se generan allá. Si un investigador juicioso va y hace su trabajo se encontrará siempre con cosas nuevas", puntualiza Luz Elena.

Ideas hay muchas, voluntades también. Las alianzas entre universidades y entidades públicas pueden ayudarles a los

miembros de Asoafa a retomar el camino que se ha ido olvidando desde que inició la pandemia. La figura de los coinvestigadores también puede motivarlos a seguir con los trabajos propuestos por los aliados. Esa labor en conjunto, que se aleja de los métodos tradicionales de la academia, ha hecho que la comunidad de Santa Cecilia se apropie de su territorio y trabaje por la conservación de la fauna y la flora. El nombre de Asoafa tiene su razón de ser y aún tiene mucho por dar, sobre todo para impulsar a Santa Cecilia como un destino turístico y para borrar del todo ese estigma injusto que aún pesa sobre su nombre.

Referencias

Alzate, C. (2018). La sábana blanca de Jesús Castillo. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-sabana-blanca-de-jesus-castillo-article/.

GBIF.org (8 de marzo del 2022). GBIF Occurrence Download. https://doi.org/10.15468/dl.6smb8x.

La Paz en el Terreno (2018). Líderes asesinados documentados desde la firma del acuerdo. María Yolanda Maturana. https://www.lapazenelterreno.com/lider-social/maria-yolanda-maturana.

Parques Naturales de Colombia, Parque Nacional Natural Tatamá (s. f.). https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-tatama/.

Secretaría de Ambiente de Bogotá (2019). Incautadas 424 ranas venenosas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. https://bit.ly/2VUX8LM.

Las crisálidas del Oriente

Por Karen Parrado Beltrán

Karen Parrado Beltrán (1991). Es de Bogotá y estudió Periodismo en Medellín. Ha escrito para *El Tiempo*, *Bocas*, *Latfem*, *De la Urbe* y *Hacemos Memoria*. Actualmente es parte del equipo periodístico de Mutante.org, una plataforma de comunicación dedicada a promover conversaciones digitales.

Patricia Orozco, Alejandra Carmona y Benjamín Rojas son líderes sociales del Oriente antioqueño. Sus historias y liderazgos tienen algo en común: la Corporación Adagio, una organización de la sociedad civil que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con expresiones de género diversas en una de las regiones más conservadoras de Antioquia. Con su trabajo no solo han puesto el tema LGBTI sobre las mesas de las alcaldías y en las plazas de sus pueblos, sino que han tejido una red de solidaridad y activismo con la que han incidido en las políticas públicas de la región en los últimos años.

Benjamín Rojas grita desde el otro lado del puente peatonal rojo, avisando de su llegada. El puente está cruzando la autopista que lleva de Guarne, Antioquia, al aeropuerto internacional José María Córdoba. Allí aguarda en su motocicleta encendida y con las botas de caucho puestas. Detenido, mueve sus brazos como un abanico. Cuando nos desviamos en la moto por la trocha, puente adentro, empieza a señalar al costado izquierdo el límite verdoso de las veredas más lejanas de Guarne. Luego, indica el borde que delimita la suya, la vereda La Mosquita. Pocos minutos después detiene la moto, trajinada por el barro y el invierno, y señala una casa con el cemento de las paredes expuesto, en la mitad de un pequeño potrero. "Llegamos", dice. "Está un poco desordenado", advierte. Desde adentro saluda Lupe, su compañera.

La moto de Patricia Orozco es "normalita". Dice que hace media hora la guardó en el parqueadero del centro comercial y que se cambió la camisa, estropeada por el polvo del viaje. "Ese es mi transporte por toda esta región", afirma. En moto fue cada fin de semana, durante varios años, desde la finca lechera de sus papás, en la vereda La Cabaña, de La Unión, Antioquia, hasta una sede de la Universidad de Antioquia, en Medellín, a setenta kilómetros, para estudiar Gestión Cultural. De otra manera habría sido muy difícil estudiar en la universidad. Viajar en bus "salía muy caro". Y en moto es que ha andado y desandado los pueblos del Oriente antioqueño durante la última década, hasta que llegó y se sentó en ese

café de sillas sintéticas de un centro comercial de Medellín, a esperar.

Alejandra Carmona tiene una moto de alto cilindraje. "Me gusta que me miren cuando voy en ella", dice mientras conduce con los brazos firmes sobre el manubrio, trocha abajo. Su moto es azul rey con blanco; montada en ella se ve invencible. Dice que a su mamá no le gusta mucho porque la hace ver muy masculina. "Supuestamente no es una moto para mujeres", apunta. Al llegar a la carretera pavimentada que conecta la trocha con la entrada de su pueblo, Argelia, también en Antioquia, toma rápidamente las calles que conducen a su casa. Una antigua edificación con un garaje grande y oscuro, y un pequeño establo de cemento al borde de la calle donde está amarrada una vaca negra.

Estas tres mujeres viven en el Oriente, una de las nueve subregiones de Antioquia y la tercera más grande del departamento, donde habitan medio millón de personas, 582.424 según calculó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— en el 2018. Las casas de este territorio conservan aún un aire campesino y el paisaje pasa de frío a cálido rápidamente, con tan solo un par de horas de viaje.

Las gentes del Oriente viven arropadas con la tradición católica y se desgranan en cuatro tipos de realidades geográficas: la zona Bosques; la zona Embalses, famosa por la turística represa de El Peñol; la zona del Valle de San Nicolás, en la que viven Benjamín y Patricia; y la zona Páramo, donde queda la casa de Alejandra.

Argelia, el pueblo de Alejandra, se encuentra en el límite de Antioquia con Caldas. En su zona rural hay casas humildes al borde de la carretera, y otras amplias con antejardines y materas. También paisajes montañosos, sembrados de café y matas de plátano. En la cabecera municipal hay un parque, una esta-

ción de policía, un puesto de salud, un colegio, un cementerio con arbustos podados, algunos hoteles sencillos, la sede de la alcaldía y la iglesia.

La casa de Alejandra queda en una de las calles más alejadas de la iglesia, junto a un caminito desviado y empinado de pequeñas casas, casi claustrofóbicas, que se cuelan altaneras entre una montaña. La de ella es grande y queda sobre la calle. Tiene dos plantas, muros sin pañetar, varias habitaciones, un comedor y un solar con huerta. Y en él un galpón, marraneras, un establo y el garaje donde guarda su moto. Como esa casa hay muchas otras que hacen parte del 91 % que pertenece a los estratos 1, 2 y 3 en el Oriente de Antioquia.

No hay una cifra oficial, pero Alejandra dice que en su pueblo hay solo dos mujeres trans. Ella y "una chica que trabaja en la Casa de la Cultura". Es difícil saber cuántas personas trans viven en Colombia. Tan solo hasta el 2020 el DANE, encargado de las estadísticas oficiales del país, comenzó a usar esa categoría diferencial en sus métodos encuestadores. Un dato de agosto del 2020 sugiere que el 0,05 % de las personas colombianas (que viven en ciudades) se identifica como transgénero. Es decir, aproximadamente unas diez mil.

Pero por fuera de esos límites estadísticos quedan personas como Alejandra y Benjamín, los campesinos, precisa él. La realidad es que hay un gran subregistro. "Una cosa es ser marica de cabecera, otra de vereda", dice Benjamín en un video que está colgado en la página de Facebook de la Corporación Adagio y en el que habla sobre cómo es su vida siendo un disidente de género en un pueblo de sesenta mil habitantes. Él y Lupe, su compañera desde hace cuatro años, dicen que son una "familia diversa": hombre trans, mujer lesbiana, dos perras, tres gatas, ocho pollos y una gallina.

Patricia, Adagio y La Cabaña

Adagio fue primero una disidencia que una corporación. En el 2011 Patricia y un grupo de amigos decidieron crearla para hacerle contrapeso a la gestión "incompetente" de un exescolta, amigo del alcalde, que estaba al frente de la Casa de la Cultura de La Unión, su pueblo. "Dijimos: no critiquemos más, montemos un colectivo y hagamos los eventos nosotros. Y así nació Adagio", cuenta Patricia. En el 2013 comenzaron a presentar sus primeros proyectos a la administración municipal y a hacer las primeras actividades.

Patricia tenía entonces veintiún años y trabajaba de lunes a viernes en la lechería de la finca de sus papás, especialmente ordeñando y cuidando las vacas y sus crías. De viernes a domingo estudiaba Gestión Cultural en la Universidad de Antioquia. "Antes de la colectiva yo era una hétero más, con novio, estudiante y vivía en la finca. Me asumí como lesbiana a los veintitrés años, o sea en el 2013", cuenta.

Uno de los primeros proyectos culturales de Adagio lo lideró Patricia. Se llamaba Cabaña Sonora. Era para los niños de La Cabaña, la vereda donde vivían, y trabajaban ella y su familia. Allá abrió ese grupo de música para enseñar nociones de lectura musical y coro. Los niños la llamaban la profe Patricia.

Además de eso, era la tecladista y vocalista de un grupo de *reggae* que tenía con varios amigos del pueblo, en el que ella componía algunas de las canciones. Tenía un *piercing* en la ceja izquierda y la sensación de que su pueblo necesitaba jóvenes menos ingratos. "No ser ingrata y no olvidarme de que yo aquí nací. Muchos chicos salen del colegio y se van a estudiar a Medellín y nunca más se vuelven a acordar de que nacieron acá, de que hubo un pueblo", dice en un video que le hicieron en el 2012 y que se encuentra en el canal de Teleantioquia en

YouTube. Esa fue una de las primeras veces que expuso públicamente su liderazgo en La Unión.

Varios años después, en el 2017, Adagio se convirtió en una corporación. Muchas personas pasaron por la colectiva, pero Patricia siempre permaneció como cabeza visible. Ese año, ella y sus compañeros decidieron formalizar la colectiva a través de una personería jurídica que les diera la capacidad de administrar recursos y contratar con el Estado. Se convirtieron en una corporación artística y cultural, y comenzaron a tejer lazos con otros grupos de la región que, sin saberlo, estaban trabajando para hacer visibles las luchas de las diversidades sexuales y de género.

El año que salió el arcoíris

En el 2016, la Gobernación de Antioquia, el departamento más poblado de Colombia, no sabía cuántas personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas vivían en su territorio. Uno de los apartados del Plan de Desarrollo *Antioquia piensa en grande 2016-2019* reconoce que "no se cuenta con datos estadísticos que permitan identificar a esta población en Antioquia". Páginas más adelante, el mismo documento señala que en el departamento la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales) "es un grupo poblacional que apenas empieza a ser reconocido como sujeto de derecho y como actor social visible".

Patricia recuerda que ese fue el momento del despertar de muchos colectivos diversos del Oriente antioqueño. Como si se tratara de un *big bang*. "Sale como esa primera apuesta departamental y esa institucionalidad motiva que los municipios creen sus propias mesas y colectivos, así nacieron varios", cuenta.

Guarne Diversa fue uno de ellos. El grupo lo fundaron Benjamín y su amiga, la Rola, una psicóloga llamada Diana Casas, en junio del 2017. "Nos sentamos en Guarne en una tintiada y me dijo: Oiga, marica, ¿y qué vamos a hacer por los maricas de Guarne? Le dije: Pues creemos un grupo", cuenta Benjamín. Después del viaje en moto se le ve relajado, sentado en una silla plástica amarilla de su casa sin la cara cubierta por la camiseta café y vieja.

"Dijimos: creemos un colectivo, pero no solamente para ondear la bandera en junio. Uno que sea educativo", empieza a recordar. Después de esa conversación, Benjamín y Diana organizaron la primera reunión del grupo en el Parque Educativo de Guarne. Difundieron la convocatoria a través de mensajes de WhatsApp. "Fueron muchos maricas, fue gente heterosexual. O sea, ¡fue gente!", dice Benjamín. Ahí decidieron que iban a llamarse Guarne Diversa.

—¿No tenías idea de esa reunión? —le pregunto a Lupe, que está sentada en otra silla amarilla, al lado de Benjamín.

—Ni idea de él tampoco —responde. Y Benjamín suelta una carcajada.

María Guadalupe Sepúlveda Alzate, Lupe, como le dicen de cariño, conoció a Benjamín cuando era niña. Tenía ocho años. "En ese tiempo él se llamaba Andrea y era pareja de una muchacha que vivía más abajo de la casa de mis papás, aquí mismo en la vereda", cuenta. Esa mujer lesbiana de casi veintiséis años le gustó. Nunca la olvidó, aunque dejó de verla trece años. En julio del 2017 la vio de nuevo mientras tomaba ron en El Esquinazo, un bailadero de la vereda donde viven actualmente. Recuerda que fue a saludarla con una pregunta en la boca: "¿Usted no se acuerda de mí?". Como tenía varios tragos encima y "la cabeza caliente", le habló sin pena. "No

me reconoció ni siquiera. Me confundió, incluso, con otra persona", reprocha.

Aburrida, se levantó de la mesa, pero Andrea insistió en que le dijera quién era. "Soy Lupe, la hija de L...", le dijo. Con la memoria activada, Andrea la saludó y le presentó a su esposa. "¡Ja! A mí me dio como un enojo. Le di la mano con pereza y me paré. Después me fui p'al mostrador, pedí una media y la puse en la mesa", cuenta Lupe.

Cuatro años después de esa escena en El Esquinazo, Lupe y Benjamín me reciben en la casa donde viven juntos. Lupe abandonó la idea de irse al convento, para lo que se sentía lista desde hacía años. "Ese encuentro me flaqueó la cabeza", dice. Le contó a la monja que guiaba su proceso que le gustaba una mujer y que así no podría iniciar su noviciado. "Sea lo que usted quiera ser", recuerda que la religiosa le dijo con cariño. Entonces, Lupe agarró sus cosas y se fue a vivir a la casa de paredes de cemento expuesto y sillas amarillas en la que está sentada ahora. Ella y el hombre trans con el que vive hacen activismo en esas montañas de Antioquia.

A los pocos meses de reencontrarse con Benjamín, Lupe se unió a Guarne Diversa. Y en noviembre del 2017, ella, Benjamín y la gente del colectivo alzaron por primera vez una bandera gay en las calles de Guarne. Algo histórico. "Siempre vinieron como unos diez o quince peludos", cuenta Benjamín emocionado. Ocurrió en la Semana del Libro y la Cultura de Guarne de ese año. A esa marcha llegaron personas de otros colectivos de El Peñol, Guatapé, Cocorná, El Carmen de Viboral, todos del Oriente antioqueño. "Esa fue la primera marcha del orgullo gay en Guarne. La hicimos por el mismo lugar por donde iba el desfile cultural de la Alcaldía. ¡Todo el mundo la vio!", cuenta Benjamín.

Aquí estamos los maricas

En el potrero en el que está la casa de Benjamín y Lupe ventea frío. La casa tiene una sala, una cocina grande con un cilindro de gas azul, un cuarto, un baño sin puerta y varias prendas de vestir colgadas en las varillas del techo de la sala, donde están las sillas amarillas. La casa no solo nos recibe a nosotros, también a los pollos, que llegan desde el potrero a la puerta con sus cantos reclamantes para que Lupe los alce y acaricie sus plumas.

"Yo siempre le he temido mucho al activismo y a la política, porque al que no les sirve, lo callan", dice ella. Eso mismo sintió cuando empezó a ver que Benjamín ganaba visibilidad en Guarne por defender los derechos de las personas no heterosexuales. La embargó el miedo. "Sálgase de eso", le pidió. Entonces, Benjamín se retiró de Guarne Diversa por un tiempo. Solo por precaución.

El Oriente de Antioquia también guarda miedos. De hecho, el departamento tiene la mayor cantidad de solicitudes del país de personas no heterosexuales en el Registro Único de Víctimas —RUV—: 439 hasta el 2015, según los reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—. Y es que el conflicto armado que vivió Colombia, al menos desde la mitad del siglo XX hasta la firma del Acuerdo Final de Paz, en el 2016, dejó profundas heridas en la vida de personas como Benjamín y Lupe, que hacen parte de una población especificada en los informes estatales, relacionados con víctimas de la guerra, como los sectores LGBTI.

La firma de la paz entre el Estado colombiano y las FARC, a finales del 2016, dejó un capítulo entero dedicado a las víctimas, entre ellas, además de mujeres y comunidades campesinas, las personas con identidades sexuales y de género no hegemónicas. Una manera, quizás, de reconocer que los ac-

tores armados de la guerra los hicieron blanco de múltiples violencias, más aún si se atrevían a tener algún protagonismo.

"El rol de liderazgo fue un tercer factor que aumentó el riesgo de las personas de sectores LGBT de ser violentadas por los actores armados", afirma el CNMH en su informe *Ser marica en medio del conflicto armado,* publicado en julio del 2019. El documento especifica las violencias que tuvieron que vivir en distintas regiones del país: amenazas, desplazamientos o persecuciones como la "limpieza social", una modalidad de victimización usada por grupos armados como los paramilitares y naturalizada por la gente en pueblos y ciudades de Colombia. Especialmente si las víctimas eran personas no heterosexuales.

Así que el miedo de Lupe frente al liderazgo de Benjamín no era infundado. Ella, fanática lectora de la historia de Gaitán y de Galán, contradictores del *statu quo* en Colombia en sus respectivas épocas, y que fueron víctimas de magnicidio, intuía que hacer visibles a los "maricas" de Guarne podría ser peligroso. Sin embargo, meses después, Benjamín regresó a su liderazgo porque sintió que las condiciones en el pueblo estaban dadas para trabajar con la institucionalidad. Es decir, para hacer activismo LGBTI por medio de la agenda de la Alcaldía de Guarne.

"Entonces al segundo año lo que hicimos fue que trajimos a Vanguardia, una banda musical. Y Vanguardia se nota: hay mujeres trans, hay hombres gais. ¡Es que es superfantástica!", cuenta Benjamín. En noviembre del 2018, y por iniciativa de Lupe, Guarne Diversa contrató a Vanguardia para que fuera parte de su comparsa en la Semana del Libro y la Cultura del municipio. Lupe había visto la banda en la marcha del orgullo en Medellín ese año y no dudó de que esa sería su apuesta para el pueblo.

Llevaron la banda a Guarne. Y no solo eso, la presentaron como el evento principal a petición de la alcaldía, pues la ban-

da musical contratada oficialmente por el municipio canceló a última hora. "Esta banda es marica", decía la gente. "Y, de paso, hicimos el primer *show* de transformismo en el parque", agrega emocionado Benjamín.

La tarima dispuesta por la alcaldía para los eventos estaba en el parque principal. Cuando llegó la hora de anunciar el *show* a cargo de Guarne Diversa, comenzó a llover y la gente se dispersó. Entonces, Diana Casas —la psicóloga que fundó el colectivo con Benjamín— sacó una hoja y se paró frente al micrófono. "Bienvenidos a vivir plenamente la abundancia de diferencias, y a reconocer y aceptar que todos en diferente formato hacemos parte de la diversidad", leyó.

Para cuando terminó de decir eso, la gente, atraída por sus palabras, ya rodeaba la tarima en medio de la lluvia. Apareció Nana Show, una mujer trans, con su *show* de fonomímica en la tarima. "Y la gente era así", dice Benjamín con la boca abierta y una expresión en su voz como de vidrio destemplado. "No fue un espectáculo vulgar, sino una cosa seria, más la banda musical. Y todo el mundo sabía que habíamos sido nosotros", agrega.

Y aunque esa segunda participación en la Semana del Libro y la Cultura fue un éxito y posicionó la colectiva, también implicó su retiro de las actividades organizadas por la alcaldía. "En el informe que sacó la alcaldía sobre esa semana jamás aparecimos en fotografías, y jamás aparecimos en nombre", cuenta indignada Lupe.

No obstante, ya habían encontrado la manera de filtrar sus luchas y de poner su voz diversa en público para incidir en las decisiones de su pueblo. "Y es la estrategia que siempre les digo a los colectivos cuando me llaman: péguense de la municipalidad. Todos los maricas existen en junio en todas partes del mundo, pero llega julio y se pierden", explica Benjamín. Y agre-

ga: "Si la municipalidad hace algo en salud, métanse ahí. En lo de la semana de la cultura, métanse ahí. Eso hicimos nosotros".

Dónde están las mujeres trans

La primera vez que Patricia se preguntó por las experiencias de vida transgénero del Oriente antioqueño fue en el 2019, cuando Adagio presentó un proyecto sobre experiencias de vida LGBTI. "En La Unión yo sabía que había mujeres trans, pero jamás en la vida me había interesado en sus vidas o en sus historias", reconoce mientras se toma un capuchino en el café del centro comercial de Medellín donde nos pusimos cita.

Dos años antes, en el 2017, la corporación había ganado una beca de Lunaria para hacer un trabajo sobre violencias contra las mujeres. Entonces, hicieron una exposición fotográfica. Se llamó *Re-tratadas. La calle también es nuestra.* En ella contaron las historias de diez mujeres de La Unión a través de retratos. Las protagonistas de esas fotos eran víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, acoso escolar, desplazamiento forzado y feminicidio de La Unión.

"*Re-tratadas* fue el comienzo de toda esa línea —de género— y después entró lo LGBTI, más desde el activismo lésbico", explica Patricia. En ese momento, Patricia llevaba una relación abiertamente lesbiana en La Unión, su pueblo natal. Ella y su pareja hacían activismo a través de la Corporación Adagio y evaluaron la posibilidad de abrir una puerta para acercarse a "lo trans". "Entonces presentamos la primera versión del Festival de la Diversidad y nos lo ganamos", cuenta.

Luego Patricia viajó a Bogotá a una reunión de Lunaria, para conocer los demás proyectos ganadores del 2019. "Esa fue la primera vez que tuve contacto real con mujeres trans", dice. Los demás proyectos ganadores eran de organizaciones

y liderazgos transgénero. Su conclusión de aquel encuentro fue que Adagio necesitaba acercarse a esas vivencias trans. Volvió a La Unión con una pregunta: ¿Dónde están?

El primer Festival de la Diversidad fue un esfuerzo por hallar una primera respuesta. Adagio inauguró el festival el 13 de julio del 2019 con cuatro actividades. Un taller de salsa *queer,* un cine-foro, un conversatorio sobre activismo y disidencias sexuales y de género, y un evento central con proyección de cortos, teatro, música, artes circenses y literatura. Allí, el esfuerzo individual de Patricia con Adagio encontró un punto de fuga con otros colectivos.

Para entonces comenzaba a anidarse un grupo de colaboradores que serían muy importantes para lo que haría la Corporación Adagio en los años siguientes. Benjamín y Alejandra estaban allí. Con sus nombres y cuerpos en tránsito, como criaturas en crisálidas que dejan atrás viejos nombres y pieles. Hombre y mujer con experiencias de vida trans.

La nueva identidad

Alejandra es su nombre, pero no siempre fue así. Primero sus papás quisieron ponerle Carlos Mario, porque su hermano ya se llamaba Carlos Alberto. Luego, José. "Yo no sé de dónde salió el Diego Alejandro", dice. El diploma que la acredita como profesional en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia dice Alejandra Morales Carmona.

Nació en 1999 en el seno de una familia campesina, en Argelia, Antioquia, con una madre, un padre, dos hermanas y un hermano. Todos mayores que ella. Sus padres son "muy adultos". Dice eso para referirse al par de viejos callados y trabajadores que la esperan en la casa del pueblo, donde está la vaca negra amarrada junto a la calle.

"Mi papá es más viejo que mi mamá", apunta mientras toma una bebida de soda con mango en un estadero al que llegamos en su moto, después de un trayecto subiendo la montaña. "Mi papá puede ser machista, heteronormado y todo lo que quiera, pero él, en cierta medida, entiende más mi tránsito y mi estilo de vida que mi mamá", continúa.

Cuando era niña, Alejandra compartía muchas más cosas con sus papás que ahora, que tiene veintidós años. Compartía la afición por las procesiones religiosas de Semana Santa. Con su mamá, las labores del campo. "Yo era la ayuda para mi mamá: vaya, tráigame la vaca, vaya, encierre los becerros, vamos a traer pasto, vamos a sembrar, y a mí personalmente me gustaba mucho", recuerda.

También rememora que una vez su papá le regaló un lote para cultivar café. "Me dijo: vea, aquí va a tener un cafetal. Y yo le decía que sí. Pero luego el cafetal quedó abandonado y el lote también, porque nunca me vi ahí", cuenta. Cuando terminó el colegio ya se le notaba "la maricada" y los dos empezaron a tener problemas. "En cierta medida nos empezamos a alejar", dice, mientras vemos que abajo, en el pueblo, empieza a ponerse el sol.

Alejandra es una mujer alta. *"Most Wanted"*, dice la etiqueta en la cintura del *jean* que entalla su cuerpo delgado y alto. "A mí me gusta la ropa más cachezuda", me había dicho horas antes en el pueblo, mientras subíamos una calle empinada por la que avanzaba un cortejo fúnebre. Después, cuando doblamos la esquina, culminando la calle, me hizo entrar al almacén donde a veces compra *jeans* y camisas ombligueras. La mujer que nos saludó también llevaba su silueta ajustada.

"Empecé a hacer uñas más o menos a los trece años", me contó mientras seguíamos la caminata por el pueblo. Las primeras expresiones de su identidad como mujer trans las en-

contró en los esmaltes de colores y las uñas de sus amigas, que luego serían sus clientas. También en los vestidos de mujer que usaba para las obras de teatro del colegio, la Institución Educativa Santa Teresita, el único colegio de Argelia, de donde se graduó en el 2016.

Hacer las uñas fue su primer salto a la autonomía. Así ganaba dinero. Ese trabajo le permitió costear sus estudios en la Universidad de Antioquia y, años después, pagar los medicamentos con los que hace un tránsito hormonal. Hoy, todavía le hace las uñas a casi todo el pueblo; a niñas, señoras, amigas y a algunos policías que trabajan en la única estación de Policía de Argelia.

Caminando llegamos a la casa de Luisa Fernanda, una de sus clientas más antiguas. La mujer, que no aparenta más de treinta años, cuenta que le sugirió que se llamara Diega. Por aquel tiempo, Alejandra estaba decidiendo qué nombre poner en su nueva cédula, era el 2019. Su primera opción era Catleya, el nombre de una orquídea de tierra tropical, pero Luisa le dijo que no. "Le dije que no se pusiera así para que no diera papaya y no se fueran a burlar de ella", dice Luisa, mientras Alejandra le pinta las uñas en el patio de una casa atiborrada de materas con plantas florecidas.

"Yo puedo decir abiertamente que me descubrí en la universidad y que mi tránsito empezó a partir de las historias de las chicas trans que entrevisté y de mi trabajo de grado", cuenta Alejandra. En el 2019, Patricia y ella comenzaron a discutir el tema del trabajo con el que se graduaría como gestora cultural. Lo tituló "¡Aquí estamos! Cuerpos, identidades trans y gestión cultural".

"Me siento ahogado, atrapado y secuestrado en cuatro paredes", escribió en el primer párrafo de su tesis. Con ese proyecto quería indagar cuál era el papel de la gestión cultural en

la pedagogía sobre las experiencias de vida de personas trans en el Oriente antioqueño. "Me siento atado y sometido por este sistema heteronormado, machista, clasista, homófobo y transfóbico, sin esperanza de poder salir", escribió líneas más adelante.

La transformación

"Mi mamá sí me decía que qué miedo. Que acá en Argelia había un hombre y que lo visitaban otros hombres. Y que un día simplemente apareció muerto en la casa. Que se dieron cuenta porque ya estaba putrefacto y por los gallinazos", cuenta Alejandra. Y aunque creció escuchando ese tipo de relatos que contaban las personas mayores, dice que nunca se ha sentido en peligro en su pueblo. Pero sí sola.

"Yo hasta quinto de primaria era una persona supersola. Del colegio a la casa, de la casa al colegio", dice. Pero de repente, el ambiente de esperanza generado por el Acuerdo de Paz, que terminaba de negociarse en La Habana, en el 2016, le abrió las puertas para salir de Argelia y encontrarse con otras personas con experiencias y luchas similares a las suyas.

"Independientemente de lo que pasara por allá —en La Habana—, acá en el colegio sí tocó a punta de lucha y resistencia", recuerda. Desde ese momento comenzó a ganar visibilidad, a encauzar, quizás sin mucha conciencia, su liderazgo. "Porque era un colegio supercatólico", continúa. Entonces, ese año le prohibieron aparecer en los actos culturales vestida de mujer junto a sus otros compañeros. Así aprendió a abrirse camino.

"Conocer a Benjamín y, luego, conocer tan de cerca el proceso de Aleja, fue para mí aprender un montón", cuenta Patricia. Ella y Alejandra se conocieron en la sede de la Uni-

versidad de Antioquia en Sonsón, entre los años 2018 y 2019. A Benjamín lo conoció a inicios del 2020. Alejandra era su estudiante en el pregrado de Gestión Cultural y en ese momento se estaba haciendo muchas preguntas sobre su identidad de género y su experiencia de vida en Argelia, donde siempre había sido "el marica del pueblo".

"Yo puedo ser en este momento la más académica, la más intelectual y todo lo que quiera, pero siento que para personas de mi familia, incluso para personas del pueblo, nunca voy a dejar de ser el marica", dice Alejandra. Aun así, el último año la ha puesto frente a liderazgos que antes no tenía en mente. Hace parte de la mesa de mujeres de su pueblo, también de la mesa de juventud, de la de diversidad, de la territorial. "Yo siento que mi liderazgo es definitivamente para lo que sea necesario", anota. De una u otra manera, define su liderazgo como una forma de resistir. "La resistencia, la resistencia", dice insistente.

Para Patricia, el hecho de que Alejandra sea una mujer trans con formación universitaria ha hecho que su liderazgo social en Argelia y en la región sea más fuerte. Más consciente. Más cercano al feminismo y a la autocrítica. "Hace falta una formación transfeminista que permita que las mujeres trans se desconecten de eso de que tienen que responderle a la sociedad con un tipo de cuerpo, con un tipo de persona, y puedan comprender que su experiencia va más allá de lo físico", explica.

Hoy en día Patricia y Alejandra trabajan juntas en la Corporación Adagio, en un proyecto de caracterización de la población diversa en Guarne. En ese proyecto también trabaja Benjamín. Ahí confluyen sus historias. Cuando Patricia conoció a Benjamín, él era el vocero de un colectivo LGBT de Guarne en un encuentro departamental de colectivos diversos de Antioquia. Fue en febrero del 2020. Ese también fue el escenario donde dimensionó que en el Oriente había una gran

fuerza diversa trabajando por ganar cada vez más incidencia política en los municipios. Benjamín representaba el proceso de Guarne Diversa.

"Porque casi toda la plata de la Gobernación y de las cosas de diversidad se queda en Medellín. Pero ¿dónde está la periferia? ¿Dónde están los municipios? ¡¿Dónde están?!", recuerda Benjamín sobre su lucha en ese momento. Por entonces le inquietaba que los colectivos diversos del Oriente se organizaran mejor. Que tuvieran una mayor representación en las partidas presupuestales que las políticas públicas asignaban para la población diversa. Y con ello más proyectos para sus municipios, más visibilidad, más participación. Fue en estos procesos que Benjamín y Patricia salieron convertidos en aliados. Las crisálidas comenzaron a abrirse.

Brazos juntos

En marzo del 2020, Colombia entró en la ola de la pandemia. Y Adagio y Guarne Diversa muy pronto comenzaron a actuar ante la parálisis institucional que pareció invadirlo todo durante los primeros meses de la crisis sanitaria causada por la covid-19. "Patricia nos convocó", cuenta Benjamín, y agrega que fue ella la que les propuso participar en un proyecto que había ganado Adagio con el Fondo Lunaria para repartir mercados.

"¡Hágale!", dijeron sin dudarlo Benjamín y los integrantes de Guarne Diversa. Esa vez invirtieron diez millones de pesos en mercados que repartieron entre las personas gais, lesbianas, bisexuales y trans de los municipios del Oriente antioqueño. Tardaron quince días organizando la logística. Y entregaron doscientos en Sonsón, La Unión, Argelia, San Luis, Cocorná, El Carmen de Viboral, Rionegro, El Peñol y Guarne.

Después de eso siguieron dos nuevos proyectos en los que trabajaron juntando brazos y esfuerzos. Familias Diversas fue el primero. Con unos nuevos dineros obtenidos a través del Fondo Lunaria, Adagio y Guarne Diversa hicieron una serie documental para retratar a cuatro familias diversas de Guarne. Uno de los capítulos está dedicado a la familia que conforman Benjamín, Lupe, sus dos perras, tres gatas, ocho pollos y una gallina.

El otro proyecto fue el segundo Festival de la Diversidad. Adagio lo organizó para el 18 y el 19 de junio del 2021 en Sonsón y allí estuvieron Benjamín y Alejandra. Esa segunda versión consolidó el trabajo de Adagio en el Oriente antioqueño, así como sus alianzas con otros colectivos diversos de la región. Hubo música, teatro, *performances*, conversatorios, exposiciones fotográficas y un espacio para el lanzamiento de los cortos documentales de Familias Diversas. También para la presentación de la tesis de grado de Alejandra, sobre experiencias de mujeres trans y gestión cultural.

"Al segundo Festival de la Diversidad en Sonsón el municipio le puso plata también y eso fue a punta de incidencia. Yo creo que pueden salir muchas más cosas en ese sentido", explica Patricia. Y no solo eso, ahora el logo de la Corporación Adagio acompaña los logos oficiales de muchas de las actividades del municipio de Guarne relacionadas con la diversidad sexual y de género. "Tenemos un montón de aliados. Mira que logramos un contrato interesante en Guarne, a punta de incidencia en ese sentido, porque eso no fue un contrato político", cuenta Patricia emocionada. Este nuevo contrato consiste en la caracterización de la población diversa en Guarne. Es el mismo en el que Benjamín y Alejandra son contratistas, talleristas y líderes en pleno trabajo de incidencia.

"A mí no me interesa que la alcaldía saque la bandera gay. A mí me interesa que nosotros nos conectemos en los colegios

para la educación. Eso me interesa como colectiva, no que saquen la bandera en junio", dice Benjamín. "Y mira que se logró el proyecto de la caracterización", agrega orgulloso.

Despedidas

Benjamín camina adelante. Dejó la moto parqueada frente a la casa porque, dice, ya no la necesitamos. Lupe y los gallos nos ven irnos. Benjamín comienza a internarse por un angosto sendero del potrero hacia la avenida principal, donde pasan los buses intermunicipales. "Es un atajo", dice. Junto a él van Teresa y Cucha, sus dos perras. Fieles, no le pierden el paso. A los pocos minutos vemos el borde cobaltoso de la autopista, que se insinúa a lo lejos.

Benjamín se despide. Dice que deja el camino ahí para evitar que sus dos perras se acerquen mucho a la avenida. Camino unos cuantos pasos y vuelvo la mirada. Los veo alejarse con el paso del que reconoce el camino a casa. Al frente pasan los buses a gran velocidad, rumbo a Medellín.

Patricia ya no tiene café en su vaso de icopor. A nuestro lado pasa bulloso el tren infantil en el que los niños recorren el centro comercial. Además de su trabajo en Adagio, ella continúa en la Junta de Acción Comunal de la vereda donde creció. Actualmente es la presidenta de esa junta comunitaria. "La corpo lo que hace es generar puentes o espacios para que otros participen", dice para redondear nuestra conversación sobre el liderazgo de Adagio en el Oriente antioqueño. Se levanta y nos despedimos. Regresará a La Unión en la moto. El vínculo con su pueblo parece eterno.

Alejandra y yo nos despedimos en la angosta puerta del hotel donde me hospedo. "A mí definitivamente me da rabia la injusticia, la hipocresía. Me da rabia el oportunismo", había

dicho en la tarde, mientras conversábamos en el estadero. Era de noche cuando bajamos de allí y ella guardó la moto azul rey con blanco en el garaje de su casa. Después, nos metimos cuadra adentro hacia el parque, en la oscuridad amarillosa de las calles. A las nueve de la noche el pueblo ya está desierto. Solo en los bordes de la plazoleta hay gente, un par de esquinas luminosas y ruido de bares. "Esos cuatro son la zona rosa de Argelia", dice Alejandra desprevenida. Llegamos al hotel. El sonido de la puerta del hotel cerrándose acompaña su solitario regreso a casa.

Referencias

Arango, N. (2020). *Resistencias y re-existencias maricas*. LF Editora.

Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH— (2019). *Ser marica en medio del conflicto armado memorias de sectores LGBT en el Magdalena Medio*. https://centrodememoriahistorica.gov.co/ser-marica-en-medio-del-conflicto-armado/.

___ (2015). *Limpieza social: una violencia mal nombrada*. https://centrodememoriahistorica.gov.co/limpieza-social-una-violencia-malnombrada/

Colombia Diversa (2020). *Nada que celebrar. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en Colombia 2020*. Colombia Diversa. https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/06/Nada_que_celebrar_cifras-asesinatos_personas_-LGBT_2020.pdf.

Gobernación de Antioquia (2016). Plan de desarrollo 'Antioquia piensa en grande' 2016-2019. Medellín.

Morales Carmona, A. (2021). "¡Aquí estamos! Cuerpos, Identidades Trans y Gestión Cultural Reflexión en torno al papel de la Gestión Cultural en la Pedagogía Social alrededor las Identidades y Cuerpos de cuatro mujeres trans en el oriente antioqueño". Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/22441/6/MoralesAlejandra_2021_AquiEstamosCuerpos.pdf.

Entre el conflicto social y la paz territorial en Córdoba

Por Lizet Cuartas Echeverry

Lizet Cuartas Echeverry nació en Barbosa, Antioquia, en 1992. Es periodista de la Universidad de Antioquia y escritora en noches de insomnio. Ha trabajado en organizaciones sociales y con jóvenes en el norte de Antioquia, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, lo que le ha permitido acumular vivencias para creer en las transformaciones sociales y en el amor al territorio y la cultura colombiana.

La Fundación Social Córdoba Controversial —Cordoberxia— es una organización que promueve los derechos humanos, la defensa del territorio y la protección de los líderes sociales en el departamento de Córdoba, a través del empoderamiento de los ciudadanos frente a sus derechos y la prevención de la violencia. Su director es Andrés Chica Durango, un tierraltense, hijo de una madre maestra y sindicalista que le enseñó que las luchas son colectivas, como la defensa de miles de campesinos desplazados y la protección de la población civil ante las arbitrariedades de las autoridades en los proyectos de megaminería. Sus acciones lo llevaron a ser finalista en el 2020 del Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría Defensor del Año.

Andrés Chica: una cara visible, un líder amenazado

Andrés Chica Durango es el director de la Fundación Social Cordoberxia. Su rostro y sus convicciones son bastante conocidos en el departamento de Córdoba debido a su labor como defensor de los derechos humanos. Hoy, 13 de agosto del 2021, estaciona la camioneta azul blindada que le entregó la Unidad Nacional de Protección —UNP—, a un costado del parque Santiago Canabal, en el municipio de Tierralta, Córdoba, justo en frente del palacio municipal. En el auto, Andrés se resguarda del sofocante calor y de esa humedad del aire que evita que el sudor se evapore, que se adhiere a cada rincón de la piel y perpetúa una sensación pegajosa en el cuerpo.

Antes de bajarse de la camioneta, agudiza sus sentidos. Espera, analiza y se cuestiona: un ritual tedioso, interiorizado e irónicamente salvador, que practica desde hace más de ocho años, cuando se desplazó por primera vez de este municipio del alto Sinú.

No lleva chaleco antibalas, aunque hace parte de las recomendaciones para su esquema de seguridad. A la vista sobresalen dos tatuajes en sus manos, luce un *jean* azul y una camiseta blanca con algunos logos, entre ellos el de Cordoberxia, la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra —Redepaz— y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Su atuendo se complementa con unos tenis, una gorra y un tapabocas del Premio Nacional de Dere-

chos Humanos en Colombia. Camina pausadamente hacia una de las bancas del solitario parque, donde una brigada de salud toma muestras para diagnosticar covid-19:

—¿Vamos a hablar aquí? Hay oídos en todas partes —cuestiona.

Cuenta que en una ocasión se reunieron, de manera confidencial, representantes de la institucionalidad y de organizaciones no gubernamentales para hablar sobre el riesgo inminente de los líderes en el departamento. La información, sin embargo, se filtró, lo que pudo poner en peligro la integridad de algunas personas.

Es un tipo sencillo. Su carcajada espontánea dispersa cualquier sospecha de arrogancia. Contactarlo es una odisea —casi molesta—, pero cuando se le encuentra conversa con fluidez. Cuenta sin titubeos, sin rastros de miedo, los hechos de violencia que suceden en su región y señala a los perpetradores, a pesar de que sabe que a muchas personas las han asesinado por menos.

—Como dijo la compañera Cristina Bautista, gobernadora indígena del Cauca: si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Entonces que nos maten hablando —comenta Andrés.

Nació en Tierralta, municipio donde se convive con la muerte desde la infancia. Su madre, maestra y sindicalista, defendía diferentes "causas sociales, en el aula y en la calle"; por eso, a corta edad se vio en las marchas cantando arengas junto a ella, de quien aprendió que "las luchas son colectivas" y que el silencio no debe ser una opción. Luego, sus estudios en sociología reforzaron esos ideales.

En septiembre del 2017 y del 2018, mes mundial de la paz, se resaltó la labor de Cordoberxia en el evento Exaltación Poética y Musical por la Paz Honrando Nuestros Líderes, rea-

lizado por las directivas de la Asociación de Comunicadores Sociales y Periodistas de Córdoba, por ser una de las organizaciones constructoras de paz en la región.

Estos primeros reconocimientos hicieron eco más allá de las fronteras regionales, pues en el 2020 Andrés Chica fue postulado, junto con otras quince personas, al Premio Nacional de Derechos Humanos, en la categoría Defensor del Año. Luego quedó como finalista junto con Leyner Palacios, ganador del concurso, quien ha trabajado con las comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto en el Pacífico, y Héctor Carabalí, líder social y comunitario del norte del Cauca. Sus declaraciones lo han llevado a un trágico escenario de once desplazamientos, y a tener que vivir con escoltas, con cámaras de seguridad y un botón de pánico.

—No renunciaremos a los procesos ni saldremos del territorio —afirma.

Lo que dice o denuncia Cordoberxia sobre defender el territorio, los asesinatos de líderes sociales o la vulneración de derechos en Córdoba incomoda la autoridad de unos y la clandestinidad de otros. Sus planteamientos les han permitido construir legitimidad con actores populares de la región a partir del conocimiento del territorio, del diálogo con el otro y lo que ellos llaman una visión de paz compartida.

Sus raíces como organización están hundidas en una historia de resistencia y de alma campesina. En el 2010 —cuando se conmemoró el bicentenario de la Independencia de Colombia— emergió el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, del cual algunos de los miembros de Cordoberxia hicieron parte. La creación de este movimiento afiebró los espíritus de la lucha para conquistar causas comunes.

En medio de esa coyuntura, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) de Puerto Libertador y la Aso-

ciación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS) de Tierralta soñaron con la creación de una organización que recogiera el sentir de la urbe, formara a las personas en los barrios de Montería sobre el conflicto y lo que significaría la posible firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno. Tal ilusión se consolidó el miércoles 8 de abril del 2015, día en que Cordoberxia adquirió personería jurídica.

Desde entonces, su trabajo se expande: desarrollan proyectos sociales y productivos en esta región, que por tener una salida al mar por el río Sinú y conectar la región Caribe con el interior del país ha sido disputada por diferentes actores armados, quienes con sus acciones bélicas han manchado con sangre los atardeceres sabaneros.

Córdoba: un territorio sometido

El departamento de Córdoba, en especial sus cinco municipios del sur, ha sido considerado un fortín paramilitar. Entre 1997 y el 2006, auge de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC—, era común que Salvatore Mancuso, uno de sus máximos comandantes, paseara por las calles de Tierralta.

De hecho, en la vereda Santa Fe de Ralito de ese municipio se llevaron a cabo los diálogos entre este grupo armado y el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que finalizó con un acuerdo para la desmovilización de sus integrantes el 15 de julio del 2003. Mancuso y los líderes paramilitares ponían alcaldes y funcionarios públicos a su amaño, como quien mueve piezas de ajedrez; entre ellos, Sigifredo Senior, alcalde entre el 2001 y el 2004, Humberto Santos Negrete, del 2004 al 2007, y Aníbal Ortiz, del 2007 al 2011, condenados hoy por el delito de concierto para delinquir agravado. Todos ellos se vieron comprometidos en el escándalo conocido en el país como parapolítica.

Este vínculo entre el paramilitarismo y el poder político en el departamento se conoció como el Pacto de San José de Ralito, en el que también se vieron implicados los senadores liberales Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella y la representante a la Cámara Eleonora Pineda. En el país, hasta el 2018, 258 políticos fueron condenados por sus relaciones con los grupos paramilitares, de los cuales 59 ocuparon curules en el Congreso de la República.

En esa época, paramilitares, sectores políticos y de élites económicas consolidaron en Córdoba un poder regional que sometió mediante las armas a la población, que sintió con cada hecho victimizante cómo el miedo se filtraba por las rendijas de sus ventanas. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1995 y el 2005, periodo en el que estuvo activo el Bloque Córdoba de las AUC,

> 2.503 personas fueron víctimas de asesinato selectivo en Córdoba, la mayoría de ellas civiles (2.485); se cometieron 53 masacres con 389 víctimas (388 civiles), 35 de esas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares [...]; se reportaron 1.189 casos de desaparición forzada con 1.429 víctimas (1.394 civiles), 558 de esas desapariciones forzadas fueron cometidas por grupos paramilitares.

Reclamar derechos territoriales: una tarea peligrosa

La operación de los grupos armados en Córdoba obstaculiza los procesos organizativos como los que lidera Cordoberxia. Según los últimos informes de Somos Defensores, entre el 24 de noviembre del 2016, día en que el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final de Paz, y finales de diciembre del 2021 asesina-

ron en el departamento de Córdoba a 20 líderes sociales y defensoras de derechos humanos; 14 de estas víctimas, durante el gobierno del presidente Iván Duque.

¿Pero por qué ser defensores de derechos causaría tanta controversia? ¿En qué radica esa molestia a los ojos de algunos? El hecho de trabajar unidos y hacer propias las batallas de otros, ubicándolas en la esfera pública, ha afectado los intereses del *statu quo*, razón por la cual los pone en la mira de un arma de fuego, son amenazados, intimidados, vigilados, estigmatizados y sufren violencia sexual y de género.

Una de esas luchas que los hace vulnerables tiene que ver con el apoyo a los campesinos para el acceso a la tierra y el reconocimiento de su territorialidad. La Ley 1448 de 2011 reconoció la restitución de tierras como el derecho que tiene una persona que ha sido víctima de despojo.

Según las estadísticas de la Unidad de Restitución de Tierras, hasta el 26 de enero del 2022 en Córdoba se han recibido 4.575 solicitudes de restitución, que corresponden a 378.347 hectáreas. Del total de solicitudes, solo se ha resuelto el 23 %, es decir, 1.095 demandas que deben aclarar la situación jurídica de 365.782 hectáreas. Panorama que se agrava si se tiene en cuenta que muchas de las personas que lideran estos procesos han sido asesinadas, como lo menciona el politólogo Ariel Ávila en su libro *¿Por qué los matan?*, donde revela que en Colombia entre el 2005 y el 2012 fueron asesinadas 78 personas que lideraban procesos de reclamación; nueve de estos casos ocurrieron en el departamento de Córdoba.

La reforma rural integral, uno de los puntos que acordaron el Gobierno y las FARC en La Habana, en el 2016, abrió otra ventana para distribuir equitativamente la propiedad de la tierra. Sin embargo, este es el punto del Acuerdo Final de Paz que menos avance presenta. En los primeros cuatro años de

su implementación se ha entregado el 1 % de las tierras que se pretende distribuir, y solo el 5 % de las familias campesinas han recibido recursos para desarrollar proyectos productivos, según información de María Angélica Vásquez, miembro de la Comisión de Verificación de la ONU en Colombia.

Esta situación se agudiza en municipios cordobeses como Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, y antioqueños como Ituango, Dabeiba y Peque, donde muchos de los reclamantes tienen sus tierras en el Parque Nacional Natural Paramillo, un área protegida que no puede ser adjudicada y en la que están prohibidas actividades económicas como la ganadería, la minería y la agricultura, incluso los cultivos de pancoger, como lo indica el Acuerdo 0024 del 2 de mayo de 1977 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —Inderena, disuelto en 1993—, el cual riñe con el derecho fundamental que tienen las víctimas a la restitución de tierras que les fueron despojadas durante los años de la guerra.

"El primer punto del Acuerdo de Paz contempla la implementación de proyectos productivos, pero ¿cómo lo vamos a hacer, si más de cuarenta y cinco veredas de Tierralta están dentro del Parque Nacional Natural Paramillo o en zonas de Ley Segunda de 1959 (reserva forestal)? Es por eso que aquí la implementación no avanza", afirma Luis Carlos Suárez, integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú —Asodeca—.

Según algunos líderes sociales de la región, este marco normativo ambiental, con el que se imponen restricciones al uso del suelo, obedece más a un discurso burocrático que a uno de conservación, que se cumple con los campesinos, pero que se flexibiliza con las élites económicas. Situación que se evidencia, por ejemplo, con la adjudicación de títulos mineros y en

la construcción de la represa Urrá I en predios pertenecientes al Parque Nacional Natural Paramillo.

"Aquí a los campesinos en zona amortiguadora del Parque no se les reconoce ni el título de propiedad, los tratan como ilegales porque ponen a producir la tierra. Pero lo que sí se puede hacer es inundar las tierras como lo hicieron con Hidroituango y Urrá I o darles concesión minera a Cerro Matoso, Gecelca o Minerales de Córdoba, para que exploten y le hagan daño a nuestra agua y terminen desplazándonos", explica Andrés Chica, con voz exaltada, en el parque Santiago Canabal de Tierralta.

En cuanto a la minería, es importante mencionar que hasta el 2015 el departamento de Córdoba tenía 25 títulos mineros vigentes para la explotación de oro y otros minerales. De estos títulos, en Puerto Libertador tres se superponen con zonas de protección ambiental, uno de ellos con el Parque Nacional Natural Paramillo —título de Minerales Córdoba—, los otros dos títulos se superponen con las llamadas zonas de importancia ambiental, que por lo general son áreas de protección regional.

En el proyecto Urrá I se estableció inicialmente que se inundarían 7.400 hectáreas en la cuenca alta del Sinú, pero luego, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010), se aprobó la licencia ambiental para el Proyecto Río Sinú, con la cual se concedieron otras 53 mil hectáreas, que comprometieron áreas del Parque Nacional Natural Paramillo, además de alterar los complejos cenagosos del medio y el bajo Sinú, y del río San Jorge.

A esto se suman las alarmantes cifras que presenta Oxfam Internacional, que revelan que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración en la tenencia de tierra, donde el 1 % de las fincas tienen en su poder el 81 % de la

tierra, mientras que el 19 % de tierra restante se reparte entre el 99 % de las fincas.

"En los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hicimos la propuesta de las Zonas de Reservas Campesinas, pero el Gobierno siempre dice que no. Quieren que firmemos un contrato por diez años, en unas tierras donde solo se pueden hacer cosas para el cuidado del medioambiente. Nosotros les dijimos a los campesinos que no firmaran, porque eso era un despojo, pues a los diez años les quitan la tierra y ya no tienen derecho a nada. De esa manera hemos venido haciendo resistencia", cuenta Luis Carlos Suárez.

Pasado de desarmes y pactos de paz

El sur de Córdoba, por otro lado, ha sido escenario de importantes momentos en la historia del país. El 29 de enero de 1991 en el corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador, el Gobierno de César Gaviria y el Ejército Popular de Liberación —EPL— firmaron un pacto que hace parte del acuerdo de paz que se formalizó el primero de marzo de ese mismo año. Meses después en la plaza de ese corregimiento, según un artículo periodístico de *El Tiempo* publicado en 1996, se concentraron 1.066 guerrilleros, quienes entregaron sus armas.

Recientemente, con la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre del 2016, se instaló en la vereda Gallo de Tierralta un Punto Transitorio de Normalización —PTN— que agrupó a los miembros de los frentes 5 y 58 de las FARC, el cual fue abandonado debido a las demoras del Gobierno en la implementación de los planes de reinserción y la imposibilidad de desarrollar allí sus proyectos productivos.

A la deriva quedaron ciento veinte excombatientes del grupo insurgente, quienes, al ver que allí no podían desarrollar

su proyecto político y colectivo, dejaron las casas prefabricadas y los espacios deportivos de la vereda construidos por el Gobierno nacional en el posacuerdo. Ellos juntaron sus recursos para comprar una finca en la vereda San José de Leones, municipio de Mutatá, Antioquia, y reiniciar por su cuenta el proceso de reincorporación. A ese anhelo de paz se había sumado Cordoberxia en el 2012, cuando empezó un ejercicio de pedagogía con las comunidades para explicarles la importancia de poner fin al conflicto armado y el reto que traería la implementación de los acuerdos.

Una pedagogía de paz

Los integrantes de Cordoberxia y de organizaciones aliadas, bajo una ruta de trabajo, recorrieron desde el 2012, vereda por vereda, los cinco municipios del sur de Córdoba: Tierralta, Valencia, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. Atravesaron montañas espesas y coquetearon con los relieves de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, para llegar a los territorios de mayor incidencia de las FARC y aportar a una pedagogía de paz.

Pese a las difíciles condiciones de acceso a algunas veredas, no abandonaron sus misiones. Algunas veces viajaron en caravana y a lomo de mulas que cargaban enormes cajas: llevaban equipos de sonido, proyectores, documentos y motores para producir energía, porque en algunas zonas de la región no hay servicio de electricidad. A veces llegaban a los recónditos lugares destilando agua, luego de haber caído del Johnson, un vehículo que facilita el desplazamiento fluvial, a las frías aguas del río Verde.

"No solo llegamos a las comunidades, sino también a los mismos milicianos o civiles que cooperaban con este grupo,

explicando la importancia de cesar el conflicto armado. Decir eso hoy suena muy sencillo, pero fue muy difícil, teniendo en cuenta que había otro actor armado en el territorio, que nunca se ha ido y es el paramilitarismo, quienes en muchas ocasiones intentaron coaccionar este ejercicio", afirma Andrés Chica.

A medida que avanzaban las conversaciones de paz y salían borradores del acuerdo, desde las bases sociales y con representación de todos los sectores, se construían propuestas y se discutían los puntos acordados. Sugerencias que se transmitieron a la Mesa de Diálogo y Negociación de La Habana.

El proyecto lo emprendieron al ver que las comunidades rurales desconocían lo que se estaba negociando, a pesar de que debían ser consultadas, pues lo que se acordara en La Habana impactaría directamente a estos territorios, ya que durante décadas los pobladores de la región fueron testigos y víctimas de una guerra que los atrincheró.

En el 2014, este mismo proceso se trasladó a Montería. En la capital de Córdoba crearon la Caseta Popular por la Paz con Justicia Social, una estrategia para trasladar las discusiones a la calle, al parque, con la gente de a pie, a través de conversaciones y actividades artísticas de grupos locales.

Con el triunfo del "No" en el plebiscito el 2 de octubre del 2016, más de doscientas personas se tomaron el parque Simón Bolívar, en el centro de Montería, e instalaron cincuenta carpas a la sombra de árboles frutales. Tenían el propósito de respaldar el Acuerdo de Paz.

Ni los treinta y dos grados Celsius de temperatura los hicieron desistir de su tarea. Más o menos el mismo calor que hace hoy en Tierralta y que se siente aún bajo las bongas y los laureles, sembrados en el parque Santiago Canabal por el sacerdote jesuita Sergio Restrepo, quien fue asesinado presuntamente por paramilitares hace tres décadas. Andrés Chica,

director de Cordoberxia, afina su garganta para enfatizar que ellos ganaron en el plebiscito.

"La tarea de sensibilizar a campesinos y campesinas que salieron a votar fue muy acertada, pues en los municipios del sur de Córdoba ganó el 'Sí'. Fue en las ciudades donde faltó pedagogía y la gente votó por el 'No'", argumenta Andrés, con un vaivén en sus manos, y añade: "Votaron con miedo y desconocimiento".

Durante treinta y ocho días el busto del Libertador custodió el Campamento por la Paz. Hicieron conversatorios, tertulias y presentaciones musicales y culturales a las que asistieron jóvenes, organizaciones sociales, mujeres, víctimas del conflicto armado, exmilitantes del EPL e integrantes de la población LGBTI.

"Nos movilizamos para que no se suspendiera el cese bilateral del fuego que se había acordado, pues esto exponía a muchas personas nuevamente a hechos victimizantes y era una forma de demostrar que en Córdoba se respaldaban los acuerdos y su implementación", expresa Andrés.

El Campamento, que también se instaló de manera simultánea en ciudades como Bogotá, Cali, Santa Marta, Cartagena y Tumaco, se suspendió en Montería debido a una llamada en la que amenazaron a Elena María Mercado, integrante de Cordoberxia y del movimiento Marcha Patriótica. De esta manera se silenciaron los cantos y se levantaron las carpas.

"En la llamada me decían que el campamento por la paz era un nido de guerrilleros escudados en el temita de la paz, que conocían todos mis pasos. Me dijeron que no me hiciera matar como otras personas que han hecho caso omiso a este tipo de advertencias y que la próxima vez que durmiera iba a ser en un cementerio", contó la lideresa en una entrevista para el periódico *El Heraldo*.

Este tipo de amenazas contra los líderes de Cordoberxia han sido frecuentes. A Andrés Chica, por ejemplo, le han hecho montajes judiciales para incriminarlo, lo han señalado de comunista e ideólogo del Frente 18 de las FARC para estigmatizar su labor. A pesar de ello, continúa en su trabajo para tejer una Colombia en paz, donde primen los derechos igualitarios y la integridad de las personas. "Bajar las banderas del proceso social ya no es una opción", explica Andrés en el parque Santiago Canabal.

Una red para protegerse

En el 2017, sobre los campos del sur de Córdoba, la Fundación Cordoberxia extendió una red de solidaridad que cobija a más de 136 organizaciones sociales y productivas. Las juntanzas les permiten hablar, denunciar y actuar colectivamente para proteger los derechos humanos en la región.

El ejercicio organizativo se fortaleció con el Decreto 660 del Ministerio del Interior, en el que se reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, lo que les permitió acceder a unos recursos que les sirven para poner en marcha su plan de acción, que contempla proyectos productivos, capacitaciones en medidas de autoprotección y en rutas de protección.

En la vereda Quebrada Honda, a 6,4 kilómetros del municipio de Tierralta, desarrollan un proyecto productivo de gallinas ponedoras, pollos de engorde y cultivo de cachama que beneficia a unas veintitrés familias, como la de Lina Marcela Murillo. La idea se les ocurrió a unos campesinos que no tenían tierra y se juntaron en una parcela prestada, en la cual construyeron los galpones y los estanques para el levantamiento y el engorde. "Para nosotros es una oportunidad importante, porque estos tiempos están muy difíciles, no es fácil conseguir empleo, pero

esta es una fuente de ingreso para nuestras familias, nuestros hijos y a la vez es un aprendizaje para uno. Entonces, la idea es seguir creciendo y generando empleo para otras personas que también necesitan ayuda", expresa Lina.

Además de proyectos como el de la vereda Quebrada Honda, Cordoberxia participó en la formulación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos para el departamento en el 2018. Hoy en día, por pedido del gobernador Orlando Benítez, trabaja en su implementación.

Igualmente, la fundación apoyó la creación del Consejo Departamental de Paz y de cinco consejos municipales de paz, instituciones que actualmente acompañan a las entidades gubernamentales en el cumplimiento de los compromisos que tienen con la implementación del Acuerdo Final de Paz. A través de esta labor, logran que las víctimas establezcan diálogos con diferentes actores del conflicto armado, como la Policía, el Ejército y antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC que operaron en la zona, como Jhoverman Sánchez, alias *Manteco*. "Conversan sobre reconciliación, convivencia y no estigmatización", explica Andrés Chica.

También se crearon las plataformas municipales y departamentales de Derechos Humanos y la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, espacios desde los que hacen control político, denuncian y dan a conocer alertas tempranas. "Estos mecanismos de participación son muy necesarios para todos y todas, porque no opacan la autonomía de las organizaciones que hacemos parte; por el contrario, nos encontramos y se tocan temas álgidos que tenemos en común, se debaten y se toman acciones dentro de un ejercicio democrático", explica Enyer Nieves Pinto, presidente de la Red de Veeduría de Derechos Humanos por el departamento de Córdoba e integrante de Organizaciones sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias de San José de Uré (ROSMUCSANJUR).

Una iniciativa que surgió en medio de estas articulaciones es la campaña *La palabra es nuestra única arma*. A través de ella Cordoberxia capacita a los defensores y las defensoras de derechos humanos en rutas de protección, para que sepan a quién acudir en caso de vulneración. Según Andrés, esta labor es importante porque "el desconocimiento de la información nos vuelve cómplices mudos frente a los asesinatos de los líderes y lideresas".

Según el protocolo, cuando un líder es amenazado, primero se le ayuda a salir a una zona segura y luego se traslada a través de una ruta de protección colectiva, en la que los integrantes de la red prestan sus esquemas de seguridad para poner a salvo a la persona. Después se le entregan, por medio de la fundación y con el apoyo de entidades aliadas, unos recursos económicos por tres meses, mientras se adelantan trámites para garantizar su seguridad.

"Después de una denuncia, se hace un pronunciamiento de manera colectiva para que no figure nadie y nos podamos proteger entre nosotros, y se le va haciendo seguimiento a través de las secretarías técnicas en cada municipio, de la mano de Cordoberxia", afirma Enyer.

Además, con la asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, un instrumento de registro, sistematización, seguimiento y evaluación del comportamiento y las dinámicas en materia de derechos humanos que publica sus informes anuales y da cuenta de la situación de violencia que se presenta en la región.

Mina El Alacrán

La noche no terminaba de caer sobre la serranía de San Jerónimo cuando el silencio de la comunidad de la mina El Ala-

crán, en Puerto Libertador, Córdoba, se interrumpió por el aleteo de tres helicópteros de la policía y los agitados pasos de quince escuadrones de Carabineros y del Escuadrón Móvil Antidisturbios —ESMAD—, que llegaron a cumplir con la operación San Gabriel.

En un parpadeo, los doscientos cincuenta efectivos de la fuerza pública controlaron todas las entradas del poblado; mientras tanto, los habitantes se agolparon en la cancha de arena. Ese domingo 14 de marzo del 2021, el hálito era de miedo e incertidumbre, pero rápidamente se fue transformando en ira, más allá de los límites posibles, al ser testigos de la destrucción de los entables mineros que durante años habían sido el sustento de más de trescientas veinte familias, y que eran incinerados ante la mirada de niños y mujeres suplicantes, pues según la policía estaban al servicio del Clan del Golfo.

Los mineros llegaron al corregimiento San Juan con sus picas y sus barras para triturar la piedra hace más de cincuenta años. Desde entonces extraen minerales en cuatrocientas hectáreas, las mismas que se han peleado con grandes multinacionales, entre ellas la compañía canadiense Minerales Córdoba, que desde el 2017 tiene un título en El Alacrán que le permite la explotación de minerales durante treinta años en aproximadamente veintidós mil hectáreas.

Según el Centro de Investigación y Educación Popular, del Programa por la Paz —CINEP/PPP—, el proyecto San Matías, nombrado así por la compañía, cuenta con una producción estimada de 417.300 toneladas de cobre, 724.500 onzas de oro y 5.930.000 onzas de plata.

A pesar de que la empresa extranjera ha ofrecido la reubicación y la inversión social, las negociaciones con los líderes han sido infructuosas, debido al incumplimiento de lo pactado, según cuenta la comunidad. Por lo tanto, se creó, a finales

del 2020, una mesa de diálogo en donde el 5 de marzo del 2021 la multinacional se comprometió a pasar una propuesta de indemnización, que sería entregada para el viernes 12, pero que nunca llegó.

Tres días antes de la incursión policial, El Alacrán respiraba agitado. Los carros y la maquinaria de la compañía empezaron a evacuar el lugar. La comunidad atónita vio cómo dejaban atrás el puente sobre el río San Pedro y se perdían en el horizonte. El personal fue enviado a una capacitación en protocolos de bioseguridad contra la covid-19, al municipio de Caucasia, Antioquia.

Cuentan testigos del operativo policial que las camionetas de Minerales Córdoba llegaron escoltando la caravana de la policía, que llevaba una orden impartida por un juez de Bucaramanga, con la cual se autorizó el desalojo de una comunidad que ha buscado, desde 1995, ser reconocida como población minera tradicional, pero a cambio de eso ha encontrado la estigmatización.

"Antes, el Gobierno nacional no nos miraba ni para escupirnos. Éramos autosuficientes. Arreglábamos las carreteras con nuestros propios medios, hicimos el mantenimiento de las redes eléctricas durante muchos años y compramos nuestros propios transformadores. Con la llegada de estas empresas, nos hicimos visibles para las autoridades ambientales y mineras, para que nos sancionen, y la policía y el ejército, para que nos hostiguen", afirma Farli Eliécer Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Alacrán.

Ese día, fueron obligados a escuchar el rugir de las motosierras y el crepitar del fuego, a lo largo de las cinco horas que duró el operativo y en las que estuvieron retenidos en contra de su voluntad. En medio de los hechos, una mujer con delicado estado de salud se sobresaltó y se enfermó gravemente.

Solicitaron el traslado o el permiso para salir, pero fue rechazado: "De aquí no sale nadie", dijo un uniformado.

Los líderes tuvieron que controlar a algunas personas enardecidas que querían luchar, porque no solo era renunciar a su trabajo, sino a su hogar: en las faldas de la montaña se alza un asentamiento de mil doscientos habitantes, donde la tierra colorada impregna los techos de zinc, las casas de tablas, los molinos, las uñas de los mineros, todo.

Los caminos son angostos y empozados. A su alrededor se ven montículos de piedra y tierra, arrumados con metros inacabables de manguera que van y vienen. Las calles promulgan el abandono estatal. No hay acueducto ni alcantarillado. La infraestructura educativa y deportiva no cuenta con las condiciones adecuadas. Para cursar el bachillerato, los niños deben caminar cinco kilómetros, a una temperatura que puede alcanzar los treinta y dos grados centígrados, hasta llegar al colegio más cercano; no tienen trasporte ni tampoco alimentación escolar.

Brenda Bohórquez y El Alacrán

Brenda Bohórquez creció en el asentamiento El Alacrán. Es de la tercera generación de mineros tradicionales. Gracias a este oficio, pudo estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Manizales. También ha sido formada por Cordoberxia en temas como la construcción de paz, los derechos humanos y la participación ciudadana, y ahora pone estos conocimientos al servicio de la comunidad.

Desde niña aprendió de su abuelo —aún trabajador de la mina— y de su padre, Eliécer, a barequear, a buscar entre pilas de arena pepitas brillantes. "Me gustaba empantanarme y le fui cogiendo amor al oro. Ya hace tiempo que no lo hago, pero de niña eso era como un juego para mí", expresa Brenda.

Con el paso del tiempo, la labor artesanal del barequeo se fue tecnificando; esto contribuyó a la creación de la Asociación de Mineros El Alacrán —Asominal— en 1995, y con ella llegaron los molinos de pisón tipo californianos, de bolas y remoledores, que aplastan la roca a golpeteos luego de ser extraída de grandes socavones —que llegan a los doscientos metros de profundidad— y llevada hasta los entables, algunos de ellos construidos dentro de sus viviendas.

El material resultante de la molienda pasa a un cajón inclinado con una malla que deja correr el agua, mientras en la base se concentran las partículas de oro a las que se les adiciona mercurio, con el fin de separar las impurezas. Los residuos de esta actividad causan impactos ambientales, razón por la cual la asociación fue sancionada en el 2019 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge —CVS—, con una multa económica y la orden del cierre definitivo al no contar con un plan de manejo ambiental.

"Hemos pedido a la CVS que nos capacite en estos temas. De todas maneras, hemos intentado convivir equilibradamente con el ecosistema, porque también somos agricultores y pescadores, y necesitamos suelos y tierras fértiles. Además, son muy ágiles para sancionar las actividades del pequeño minero, pero lo que hace la multinacional no lo ven, porque la justicia colombiana actúa, dependiendo de qué lado haya más plata", explica Brenda.

Esta sanción, según las comunidades indígenas (emberá katío y zenú), campesinas, afrodescendientes y hace poco de venezolanos que han llegado a El Alacrán, es una de las estrategias del Gobierno para desplazarlos y despejar la zona. "Lastimosamente, no le convenimos al Estado colombiano en este momento, porque según ellos le estamos obstruyendo el

desarrollo al país. Pero si ese desarrollo va a estar a costa del sufrimiento de la población más vulnerable, prefiero que sigamos así", dice Brenda. Luego del operativo del 14 de marzo del 2021, el comandante de policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, aseguró en un comunicado oficial que

> [...] se logró la destrucción de dieciocho motores e inhabilitación de dieciséis entables mineros de los que se extraían alrededor de cien gramos de oro diarios con la utilización de mercurio; de esta manera, se ven afectadas las rentas criminales, y se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

Debido a estas declaraciones, los líderes se han visto más amenazados. A pesar de ello, el sábado 20 de marzo del 2021 realizaron una caravana humanitaria desde el parque Simón Bolívar de Montería hasta la vereda El Alacrán, y un plantón el 6 de abril frente a las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería (sede Medellín), exigiendo prontas soluciones.

"Ya estamos en negociaciones con la multinacional, claro que no en muy buenas condiciones; mientras la comunidad trata de llegar a una solución, la institucionalidad se cruza de brazos, pues se parte de la buena voluntad del titular minero y ellos ¿qué buena voluntad van a tener? Ellos nos dicen que deben terminar los estudios de exploración y que se debe hacer el levantamiento de la línea base, entonces en este momento estamos socializando esa línea base con la empresa", cuenta Brenda.

También se ha abierto una mesa de diálogo con el cabildo indígena San Pedro, que se encuentra adscrito al resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, ya que el Ministerio del Interior determinó que ellos tienen derecho a un proceso de consulta previa.

"Desde abril de 2021, se reactivaron los espacios de negociación con la empresa, que se habían iniciado en noviembre del año pasado, donde se identificaron 96 impactos por su presencia en el territorio. Ahora estamos en la etapa de los acuerdos, mirando las compensaciones que ellos deben hacernos a nivel económico, social y cultural, pues ellos sacan sus recursos y se van, pero la comunidad queda", afirma Rafael Antonio Quintero, integrante del cabildo San Pedro.

Además, el mismo Ministerio del Interior indica que este proceder no debería limitarse solo a este cabildo, sino a todas las comunidades étnicas presentes, incluyendo a los miembros del pueblo indígena emberá katío, pues este es un derecho fundamental que tienen las comunidades que se autorreconocen como grupos étnicos.

Pero la problemática se volvió visible e inquietante para la opinión pública cuando la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, en cabeza de la Fundación Social Cordoberxia, declaró a la vereda Mina El Alacrán como refugio humanitario un día después de la operación San Gabriel. Situación especial, amparada bajo el derecho internacional humanitario, y con la cual se busca proteger a la comunidad dentro de su mismo territorio, rechazando el uso de las armas y la presencia de actores armados dentro del campamento, sean de un grupo legal o ilegal.

"Cordoberxia y las demás instituciones, como la Defensoría del Pueblo, nos asistieron mucho, porque cuando uno está así desorientado cualquier ayuda es fundamental. Además, la situación nos permitió estar más unidos como pueblo, como una gran familia, porque a todos nos duele lo mismo, todos sentimos lo mismo", indica Brenda Bohórquez, lideresa, con voz esperanzadora.

Desde entonces, banderas blancas ondean en el balcón de una pequeña capilla, una de las pocas edificaciones de mate-

rial de la zona. El apoyo de las otras organizaciones los hizo permanecer firmes en su tarea de "defender la vida, el derecho a la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio", concluye Eliécer.

Brenda Bohórquez, de la mina El Alacrán, ha hecho parte de estos procesos. Ahora no solo busca reivindicar a su comunidad, sino también aportar a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pues junto a Cordoberxia y la Comisión de la Verdad están ayudando a encontrar las fosas que dejó la guerrilla de las FARC en el territorio. A esas víctimas que quedaron de las diferentes masacres, como la del río Manso en mayo del 2001 en Tierralta, o la masacre en el corregimiento Juan José, municipio de Puerto Libertador, en 1999, una oportunidad para recabar la verdad y empezar a sanar las heridas del conflicto.

Referencias

Ávila, A. (2020). *¿Por qué los matan?* Bogotá: Planeta.

Centro de Memoria Histórica (s. f.). *Recordar para dignificar.* http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/me-levante-contigo-en-la-cabeza/recordar-para-dignificar.html.

Defensoría del Pueblo (octubre del 2015). *Minería sin control: Un enfoque desde la vulneración de los derechos humanos.* https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/InformedeMinerIa2016.pdf.

El Tiempo (30 de enero de 1991). EPL firmó acuerdo de paz con el Gobierno. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-17298.

___ (20 de octubre de 1996). Se entregaron 110 del EPL en Córdoba. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-549080.

Fundación Paz y Reconciliación —Pares— (17 de marzo del 2016). Memorias de paz con el EPL. https://www.pares.com.co/post/memorias-de-paz-con-el-epl.

García, E. (5 de noviembre del 2016). Levantan campamento por la paz en Montería por amenazas. *El Heraldo*. https://www.elheraldo.co/

cordoba/levantan-campamento-por-la-paz-en-monteria-por-amenazas-299940.

Medina, J., Cuencas, T., Serrano, C., y Carrillo, L. (2019). *Minería de oro y comunidades locales del sur de Córdoba en Colombia, el caso de la mina El Alacrán*. https://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/documentos/ALBOAN-MineriaColombia-es.pdf.

Oxfam Colombia (s. f.). *Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia*. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf.

Red Jurista (s. f.). Resolución Ejecutiva 163 de 1977. https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_163_de_1977.aspx.

Semana (18 de enero del 2007). Texto del "acuerdo de Ralito". https://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3/.

Verdad abierta (13 de abril del 2016). El Paramillo, un nudo difícil de deshacer. https://verdadabierta.com/el-paramillo-un-nudo-dificil-de-deshacer/.

Una lucha juvenil por la paz en los bordes de Bogotá

Por Valeria Arias Suárez

Valeria Arias Suárez (1999), periodista manizaleña radicada en Bogotá. Trabaja en *Publimetro Colombia* y es colaboradora en *Rutas del Conflicto* y la Unidad de Investigación Periodística de la UIP. Ha ganado reconocimientos como el Premio ¡Investiga! 2019, el Premio Corte Final 2020 y la Mención Honorífica a la Excelencia Periodística 2020 otorgada por la Sociedad Interamericana de Prensa —SIP—.

Gestores de Paz Potosí es una organización que nació como iniciativa de la ONG internacional World Vision, pero que se sostiene gracias al trabajo autogestionado de sus mentores y mentoras, quienes son jóvenes de la comunidad. Valentina, Darling, Juan, Luisa, Nedzib, Nicoll, Suri y Yhoiner son algunos de ellos y ellas. Trabajan con niños, niñas y jóvenes en el barrio Potosí, parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Ocupan su tiempo libre con actividades pedagógicas, lúdicas, artísticas y deportivas; les enseñan a pensarse como personas con derechos y como parte de una ciudad que históricamente los ha marginado.

Bajo la penumbra, a punto de caer la tarde, en una calle angosta y entre casas populares y pintadas multicolor, se ve caminar la silueta de una adolescente. Es Valentina Torres, transita sobre una calle que más adelante se vuelve de gravilla, hace trucos para esquivar una caída, luego retoma la vía pavimentada y llega a una parada de bus, lo toma y se baja unas cuadras después. Habla con la elocuencia de una joven de veinticinco años, pero su apariencia revela que tiene muchos menos. A sus quince es un ejemplo a seguir en Gestores de Paz, y desde los trece se convirtió en mentora de esta organización juvenil del sur de Bogotá.

"Aquí es donde traemos a los niños y niñas a que vean películas, luego hablamos y discutimos los temas que hay en ellas", dice con su voz relajada, mientras señala la esquina de una calle empinada, donde se ve el muro de una tienda, unas sillas pequeñas en un terreno sin pavimentar y una mesa sobre la que reposa un *videobeam*. En la pared está colgada una tela blanca, en donde se proyecta la imagen a gran escala.

Después de un rato llegan niños que se sientan en las sillas, algunos vienen solos y otros con la compañía de su mamá o su papá. La película del día fue *Lilo y Stitch,* que cuenta la historia de Lilo, una niña que perdió a sus padres en un accidente y vive con su hermana, quien tiene que trabajar y la deja sola casi todo el día. En el salón una bolsa de crispetas gigante circula de mano en mano, se escuchan risas y conversaciones pequeñas entre las escenas.

Valentina también pone atención a la proyección, a su lado está Darling Molina, una de sus compañeras. Tiene veintitrés años y fue una de las creadoras de Cine Montaña, escenario en el que se proyecta la película. La iniciativa surgió el Día del Niño del 2017, como una apuesta por propiciar un espacio dinámico para los niños y las niñas, que permitiera dialogar y asociar los temas de las películas con la realidad de este territorio, del que se habla constantemente a raíz de mitos urbanos, que para muchos bogotanos es lejano e inhabitable, pero que se ha convertido en el punto de encuentro de los Gestores de Paz, en Ciudad Bolívar.

***

En la capital de Colombia, más allá de la última calle plana de la ciudad, se forman caminos empinados hacia la ciudad marginada o de los bordes. Un sector que, debido a las noticias, las historias de libros o los rumores de la calle, muchos evitan visitar. El contexto de esa pequeña ciudad, conformada por familias que llegaron mayoritariamente en condición de desplazamiento en los años cuarenta y cincuenta, en el sur de Bogotá, ha configurado un ambiente de fragilidad económica y situaciones complejas para la seguridad de sus habitantes.

Darling y Valentina hacen parte de una apuesta por la vida, la esperanza y el buen vivir del barrio Potosí, en las partes más altas de esta localidad de la capital. Junto a varios jóvenes como ellas, desarrollan cada sábado actividades que brindan a los niños, niñas y adolescentes del sector la oportunidad de divertirse, aprender y reconocerse como personas con derechos.

Cine Montaña es casi el final de un agotador sábado, que antes de que llegara la pandemia a Colombia sucedía con la ritualidad de una misa, y que ahora ha ido retornando a la nor-

malidad. En la mañana, los niños y las niñas esperan en sus casas a que alguno de los mentores de Gestores de Paz los recoja para iniciar un recorrido hacia el colegio Ices. Al llegar, juegan mientras los jóvenes mentores se reúnen y hablan del orden del día.

Valentina, Darling, Juan, Nedzib, Lisa, Luisa, Nicole y Yhoiner, los mentores, charlan sobre lo que se ha planeado para ese día y se organizan para desarrollarlo. Talleres de fotografía, escritura, dibujo y actividades lúdicas se llevan a cabo toda la mañana entre el relajo y las risas que naturalmente provienen de los salones llenos de niños.

Gestores de Paz es una organización que, en gran medida, se autogestiona gracias a los mentores que la conforman, pero que nació en el vientre de la organización internacional World Vision en 1997. Cuando llegaron al territorio para trabajar con la comunidad y para iniciar sus labores cuestionaron a niños, niñas y jóvenes de Potosí sobre el derecho que consideraban más importante. Por medio de unas votaciones, se determinó que el derecho más importante era la paz.

"Las votaciones hicieron que World Vision tuviera la idea, junto con los niños que estuvieran interesados, de conformar un movimiento a nivel nacional, aprovechando los lugares en donde hacía presencia la organización, para iniciar con cierta movilización con los niños, donde ellos fueran los protagonistas y quienes tuvieran voz", cuenta Nedzib Sastoque en frente de una tienda en una calle angosta y mirando el amplio paisaje de casas que se asoman en la parte baja de la ladera.

El arte, la música, el fútbol, el juego y las formas lúdicas han servido de canal para que los gestores de paz puedan enseñarles a los niños cuáles son sus derechos y formas de vida diferentes a las que presencian día a día en el complejo contexto que habitan. Dentro de las problemáticas más latentes está la venta

de drogas en el barrio, pues es un negocio por medio del cual muchos niños, a tempranas edades, encuentran una forma de subsistencia, fuera de la educación y el mercado laboral.

En la localidad y en el barrio en que se desarrollan, propuestas como las de Gestores de Paz se sienten incómodas para quienes decidieron apostarle a la vida ilegal. A pesar de ser conscientes de eso, Darling y sus *compas,* como los llama, no se cansan de reclamar lo que consideran que su comunidad merece: una juventud que piense en que primero es la educación, a pesar de las dificultades que implica ser joven en Potosí, un sector que cuenta con colegios cerca, pero está bastante lejos del centro universitario de Bogotá.

***

Las dinámicas de violencia de Ciudad Bolívar han generado en los jóvenes de Gestores de Paz una sensación de miedo, que admiten sentir, pero que Darling, por ejemplo, asume como un motor para trabajar mucho más por su comunidad. "Creo que todos sentimos lo mismo; uno se motiva más porque se da cuenta de que en realidad hay que cambiar esto. Cuando las cosas más difíciles están es porque hay más que hacer", comenta de pie junto a La Glorieta, sector donde se lleva a cabo Cine Montaña.

Allí mismo, desde donde habla gesticulando ampliamente, con sus ojos almendrados, cafés oscuros bien abiertos y un discurso sólido, cuenta que en el 2015 una mujer de la comunidad falleció al ser atropellada por una volqueta. Según una investigación de Vanessa Fernanda Rodríguez Vargas, publicada en el 2021 en la Universidad Javeriana, el vehículo que estaba cargado con arena pertenecía a Canteras Unidas La Esperanza, una empresa que extraía material en una de las montañas que rodean la localidad de Ciudad Bolívar.

La conmoción que causó la muerte de doña Jineth Herrera, el 4 de abril del 2015, fue el impulso que muchos necesitaron en la comunidad para unirse y comenzar a exigir que no hubiera más explotación minera en la montaña y que, en cambio, se consolidara el Parque Ecológico Cerro Seco. Los colectivos que se unieron para hacer estas exigencias conformaron la mesa ambiental "No le saque la piedra a la montaña", que finalmente logró que se detuviera la actividad de extracción y que retiraran del lugar todos los implementos para esta.

Con este avance en el territorio, las organizaciones sociales y ambientales se han organizado para que las autoridades competentes inicien la construcción y la consolidación de un parque ecológico en ese territorio, que sirva como un lugar de esparcimiento para la comunidad, para fomentar el deporte y la educación popular de Ciudad Bolívar y en general del sur de Bogotá. Actualmente, este lugar se conoce como el Parque Arborizadora Alta, que comprende 148,14 hectáreas de área protegida, declaradas por la Resolución 1197 de 2013 con administración del Distrito.

En este territorio se han encontrado aves como el cantor sabanero y la alondra cornuda, las cuales se encuentran en vía de extinción y se han vuelto insignias para las organizaciones sociales que exigen ser escuchadas por el Distrito, para que este parque sea objeto de conservación y no se ceda ante intereses de explotación minera, que degradarían el ecosistema y seguirían impactando negativamente a las comunidades que habitan alrededor.

***

Los mentores de la organización finalizan las actividades en el colegio antes de que caiga la tarde del sábado y proceden a

llevar a los niños y las niñas nuevamente a sus casas. Cada uno tiene un grupo asignado y con lista en mente comienzan un recorrido puerta a puerta. Algunos se quedan con ellos, pues seguirán su camino hacia La Glorieta para ver la película que se proyecta ese día en Cine Montaña.

Tras el agotador pero fructífero sábado, Darling y Valentina, a veces con alguna otra compañía, caminan bajo la caída del sol rumbo al cine club. Llevan el *videobeam* y los bafles para desarrollar la actividad. Al llegar organizan las sillas, alistan la película y se disponen a esperar.

El deseo de ver lo que parecería ser una simple película atrae a un grupo de por lo menos veinte niños que han encontrado una actividad de sábado por la noche que para muchos es habitual, cuando van a algún gran cinema de centro comercial, pero que ahora está muy cerca de las casas de los niños y las niñas de Potosí, en Ciudad Bolívar, y no a una hora de recorrido.

Cine Montaña ha dado justo en el momento y el día perfectos para que los niños y las niñas se sientan parte de una ciudad y salgan a vivirla, no en las calles que se apoderan de ellos para aumentar la criminalidad, sino en las que se disfruta con el arte audiovisual, que llega a la esquina de una tienda y que refleja en una pared blanca una realidad diferente.

"Justo ahora estamos en el ciclo de los sueños", cuenta Darling mientras mueve las manos. Explica que los ciclos periódicamente cambian, de acuerdo a las temáticas que se trabajan. Los contenidos audiovisuales que se proyectan en el cine club buscan conectarse y aterrizarse a las realidades de los niños y las niñas del territorio.

Con bastante propiedad, Darling narra cómo surgió Cine Montaña, luego de un encuentro audiovisual que tuvieron con una amiga cineasta que les mostró la magia del cine. "Nos

enseñó y nos motivó. Nos dimos cuenta del potencial pedagógico y transformador que tiene el tema audiovisual y para un día del niño, en el 2017, hicimos la primera proyección", cuenta entusiasmada y luego procede a decir que ha sido un espacio en el que niños y niñas ven *pelis* y al mismo tiempo aprenden a discutir sobre el territorio en el que viven.

Así, cada sábado para el barrio Potosí es una jornada empapada de acciones que le dan motor a su comunidad y con las que brindan una alternativa para alejarse de las dinámicas del microtráfico y las bandas delincuenciales, las mismas que han hecho parte del complejo contexto que se configura en medio de las casas pintadas que maquillan esa compleja realidad, en donde el simple hecho de ser joven significa luchar diariamente por la vida.

***

Según la última Encuesta Multipropósito 2017, realizada por la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— y la Gobernación de Cundinamarca, "la mayoría de la pobreza multidimensional se acumula en el sur de la ciudad". La misma medición expone que Usme y Ciudad Bolívar abarcan la mayor parte de este indicador y, además, tienen la mayor presencia de estratos 1 y 2 de la ciudad.

A la escasez económica de estas localidades de Bogotá, se suma el impacto de un conflicto armado de más de cincuenta años. Desde diversas zonas del país, víctimas de la guerra han buscado evadir la muerte desplazándose e intentando rehacer sus vidas en los barrios periféricos del sur de la capital.

Según el Informe del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, publicado el 9 de abril del 2020, hay

340.376 víctimas reconocidas ante el Registro Único de Víctimas —RUV— que viven en Bogotá, la segunda ciudad con mayor número de víctimas residentes en su territorio, después de Medellín. Y en Bogotá, la localidad con mayor concentración de víctimas del conflicto armado es Ciudad Bolívar, con 38.859 personas.

Además, la violencia en la localidad es tan focalizada que la Fiscalía General de la Nación anunció una mayor concentración de su trabajo con fiscales de las estructuras de apoyo, pues es uno de los territorios de la ciudad con mayor número de homicidios, registrando 133 de los 754 homicidios que ocurrieron en la capital, desde enero hasta agosto del año 2021, por encima de Kennedy (122) y Bosa (81), según reportaron las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Al particular contexto de pobreza y violencia, Gestores de Paz le pone la cara y el pecho con acciones colectivas que desde lo más esencial les quitan mano de obra a las bandas delincuenciales. Muchos de los niños y las niñas que asisten a las actividades cada sábado podrían estar en las esquinas de la localidad al servicio de organizaciones criminales. En cambio, toman una cámara y aprenden a tomar fotos, o dibujan con colores lo que proyectan en el futuro para su localidad.

La vida no solo ha cambiado para los niños y las niñas, sino también para los mentores de Gestores de Paz, quienes han decidido, desde muy jóvenes, trabajar para que la vida en la montaña sea un poco más llevadera. Valentina, quien recién empezó su carrera de Trabajo Social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, cuenta que asiste desde que tenía un año y medio a los talleres y ahora es mentora, por lo que se le nota muy decidida al afirmar que la organización le dio un vuelco total a su vida.

Su mamá la llevaba junto a su hermano todos los fines de semana a los talleres de la organización, y ella misma admite que asistía, de manera inconsciente, por los refrigerios que le daban. "Mi hermano me cuenta que yo siempre me ponía feliz cuando ya estaban alistando la comida", cuenta risueña Valentina al recordar sus inicios en la organización.

Además de sus acercamientos a organizaciones como Gestores de Paz, Valentina observaba atentamente la labor que su mamá hacía como madre comunitaria. Siempre ha sido una mujer muy dispuesta a ayudar y trabajó con World Vision en esa labor que implicaba amadrinar a varios niños de la comunidad para ayudarles con los recursos que le brindaba la organización internacional.

"Mi mamá tomó su inspiración para ser madre comunitaria porque ella viene del campo, de un pueblo que se llama La Palma, en Cundinamarca. De allí tuvo que salir por el conflicto armado cuando tenía quince años; en esa época estaban los paramilitares y las Águilas Negras acosándolos. En búsqueda de más oportunidades se vino a Bogotá y nunca pudo terminar sus estudios; llegó hasta noveno. La escuelita que estaba en su pueblo ofrecía seguir estudiando, pero solo se podía ser docente, y ella quería ser profesora, pero hacer esa labor en Bogotá se le dificultó. Cuando llegó la organización al territorio mi mamá dijo 'no pude ser profesora, pero puedo ayudar', y por eso se volvió madre comunitaria", cuenta la mentora con orgullo, pues dice que hasta el sol de hoy su mamá es una de sus grandes inspiraciones para servir a la comunidad.

Sin embargo, con una voz risueña, Valentina recuerda que de pequeña percibía extraño el hecho de que su mamá tuviera más "hijos" aparte de ella. Cuando hacía ollas gigantes de arroz con leche y llegaban decenas de niños a pedir su porción, ella se abrumaba y también reclamaba su parte con

asomos de enojo. Además, narra que un día en su infancia, World Vision dio pequeñas tortas a los niños para celebrar el cumpleaños de la organización en Ciudad Bolívar. "¿Por qué les da a tantos niños y no me da otra a mí? Yo quiero otra", fueron las palabras inocentes que la pequeña Valentina dirigió en ese entonces a su mamá. La respuesta fue algo que la marcó de por vida: "Hay que compartir, cuando la comunidad y los niños lo necesitan hay que ayudar".

Desde pequeña, Valentina observó el servicio a la comunidad como algo natural y eso la llevó a configurar su gusto por el trabajo social y la inspiró a estudiar esa carrera en una universidad pública de la ciudad, a dos horas de su casa. Recuerda vívidamente que a los cinco años le pusieron un chaleco de Gestores de Paz y le encargaron la tarea de cuidar a otros niños más pequeños. Ese lo describe como un momento crucial. Se sintió orgullosa, supo desde entonces que su lugar estaba en esa organización, y creció junto a otros integrantes para convertirse en una de las lideresas que un día se enamoraron del proceso que se gesta en Potosí.

"Cuando el movimiento cumple siete años, World Vision se va del territorio, pero los jóvenes decidimos seguir con el proceso de transformación con niños, niñas y jóvenes. Ahí fue cuando me integré a la parte de los mentores de la organización", cuenta entusiasmada sobre sus inicios como una de las lideresas de Gestores de Paz.

"Aprendía cosas todos los sábados. También me escapaba de muchas realidades que me dolían en mi casa. Entonces yo me enamoré de Gestores y durante muchos años he seguido enamorándome. Gestores es mi familia, ahí es donde he aprendido y me he fortalecido emocional y físicamente. Veo que los niños también se enamoran de lo mismo. Mi vida cam-

bió tanto emocionalmente como todo en mí ha cambiado", complementa Valentina.

Por su parte, Darling también reconoce el poder transformador que ha tenido la organización en ella misma: "Eso direccionó mi proyecto de vida, por esto decidí qué estudiar y todas esas cosas. Y también direcciona muchas prácticas de los *pelaos* en los colegios, en ese sentido muy cotidiano", cuenta mientras gesticula una sonrisa con signos de satisfacción.

Más allá del proceso organizativo y de las actividades de todos los sábados, los mentores han forjado una relación de *parcería* y complicidad incomparable. Sus conversaciones no solo giran en torno a las actividades de Gestores de Paz, sino que se cuentan los acontecimientos de sus vidas y se apoyan, como amigos con un interés colectivo que finalmente los hace simpatizar profundamente y alinear los rumbos de sus vidas. Esta relación termina reflejando a la comunidad la unidad que se necesita para brindar confianza en su proceso social.

"La comunidad piensa en Gestores de Paz y piensa en los chicos que ayudan, los chicos jóvenes, los chicos chéveres", dice Valentina, de lentes con marco negro y una amplia sonrisa, que se acentúa al hablar de la organización que la vio crecer y que ahora la motiva diariamente a trabajar por su comunidad, especialmente por los niños y las niñas, que representan el futuro de Potosí y de Ciudad Bolívar.

Las garantías para ser líder social juvenil en Bogotá son pocas. Sobrevivir en los barrios de la ciudad de más allá es una apuesta retadora para cualquiera de sus habitantes. El deseo de gozar de una vida digna está en constante tensión en las comunidades de la periferia de la capital, que se enfrentan a una constante carencia o a la deficiencia de los servicios públicos, la fragilidad del sistema educativo y una economía infor-

mal para la mayoría, como se aprecia en las fichas locales de la Veeduría Distrital.

Además de que en los medios de comunicación y en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se registra con regularidad la presencia de grupos paramilitares, existen actores sin identificar que protegen intereses particulares. En este caso se han registrado situaciones en el marco de la disputa territorial que la comunidad tiene por el Parque Ecológico Cerro Seco.

***

Justo al lado de donde comienza la montaña de Cerro Seco, que conduce a la zona en donde antes se llevaba a cabo la explotación minera, los niños y las niñas gritan en medio de un partido de fútbol, en una cancha de pavimento desde donde se divisa un barrio con casas pintorescas, tiendas y carnicerías. A pocos metros está el Árbol de la Vida o el Palo del Ahorcado, como muchos en la comunidad lo llaman. Tiene toda una historia detrás y se han construido mitos urbanos en torno a las razones por las que tiene ese nombre algo perturbador.

Los niños y las niñas juegan un partido que se programó por el cumpleaños número tres de la Escuela de Fútbol Popular de Potosí. Más temprano se hizo un sancocho comunitario en una caldera gigante, que alimentó a los asistentes al evento, y para hidratar a los niños, las niñas y los jóvenes que juegan en la cancha de fútbol, hay una limonada hecha en un balde, a la cual van llegando quienes quieren tomar, para llenar sus vasos directamente del recipiente.

En las dos gradas de un extremo de la cancha, se encuentran varias de las mamás de los niños y las niñas que observan cómo se desarrolla el partido y a la vez charlan entre sí sobre su barrio y sus vidas. Muchas de ellas manifiestan su agradecimiento

con el proyecto de Gestores de Paz, que llevó a la creación de la escuela de fútbol popular. "Doy gracias a Dios porque sin nosotras aportar un peso aquí, los profesores de la escuela de fútbol y Gestores de Paz nos han ayudado y han acompañado a nuestros hijos. Aquí hacemos fútbol en paz, los conflictos se solucionan dialogando y esa enseñanza les queda a los niños y niñas", expresa con serenidad Nidia Ruiz, quien tiene 51 años y es madre de una de las niñas que asisten a la escuela.

A su lado, la señora Luz Ramírez reconoce que la apuesta deportiva de la escuela de fútbol ha servido para que los niños, las niñas y los jóvenes se alejen de las dinámicas de drogadicción y le apuesten al fútbol en sus tiempos libres. "Es chévere porque aquí vienen de otras escuelas de fútbol en otros sectores y también van a otras escuelas a jugar. La escuela de fútbol es importante porque evita la drogadicción y esos malos comportamientos. Los niños vienen es a jugar fútbol y eso los aleja de otros problemas", cuenta Luz.

Para otra de las mamás de uno de los niños que participa en la escuela el impacto en el barrio y en la localidad es muy positivo. "Los niños juegan, se divierten y comparten todo lo que traen. Es muy bueno porque así no están en otras cosas, pensando en drogas y todo eso", concluye con voz determinada.

Un rato después todos se disponen a jugar un bingo. Darling, que lleva puesta una gorra echada para atrás y un camibuso de la Escuela de Fútbol Popular, saca las balotas, grita las letras y las cifras a todo pulmón y decenas de personas van tapando sus números en los tableros de papel que compraron horas atrás para apoyar económicamente a Gestores de Paz y a la escuela de fútbol.

Yhoiner Nieto, uno de los mentores de Gestores de Paz de Potosí y director de la escuela, cuenta sobre una experiencia cotidiana que ilustra lo que se ha publicado en los infor-

mes institucionales y las denuncias de los habitantes. Un día, mientras llevaba a cabo una actividad con niños en lo alto de la montaña del Parque Ecológico Cerro Seco, los sorprendió la presencia de una persona encapuchada: "Llega armada y amedrentando con perros para hacernos salir y quitar los arcos —de fútbol—. Efectivamente ponemos nuestro frente, nos paramos muy duro por nuestra montaña y lo que creemos. Finalmente, intento siempre mediar. Toda la situación se sale un poco de control. Llega la persona encargada del parque, muy grosera, y realiza una amenaza directa en contra mía, delante de todas las personas alrededor".

A pesar de este tipo de amenazas, Gestores de Paz es una organización que ha permanecido ya más de veinte años en el territorio y que ha sobrevivido al clima tenso, a las deserciones de algunos de sus mentores, y ahora incluso ha superado el drama y el caos que impuso la pandemia mundial por la covid-19.

***

Cuando la covid-19 llegó a Colombia, los mentores de Gestores de Paz se vieron confrontados con una nueva realidad que afectó el proceso presencial que venían realizando hasta marzo del 2020. Las actividades de los sábados tuvieron que desaparecer fortuitamente y los niños y las niñas cuestionaban a los mentores sobre cuándo volverían a tener las actividades sabatinas.

Los niños preguntaban: "Profe, ¿cuándo nos vamos a reunir?". "Cuando nos quiten la cuarentena", respondían los gestores. Pero el encierro duró cinco meses, en los cuales la nostalgia entraba en juego cuando los mentores pensaban en volver a enseñar, comunicarse y jugar con los niños.

A pesar de que no podían ver a los niños y las niñas, y hacían actividades presencialmente, tuvieron que buscar la ma-

nera de comunicarse con cada uno de ellos. En medio de una labor ardua, intentaron estar siempre pendientes de todos durante los meses más difíciles, cuando las familias se enfrentaban a la angustia por no poder salir, al miedo por contagiarse con el virus, en un contexto como el de Ciudad Bolívar, donde las necesidades superaban sus capacidades.

Las fachadas de las casas de la localidad se llenaron de trapos rojos, una seña terrible que simbolizaba que en esas viviendas sus habitantes no tenían qué comer, en parte porque el sustento económico de muchas personas de esta zona de la capital proviene de las calles que ya no podían habitar. La angustia de muchos niños, niñas y mujeres se disparó por cuenta del aumento de la violencia intrafamiliar, una de las grandes preocupaciones de los mentores, que desde diferentes actividades trataron de ayudar con el bienestar de su localidad. El aumento del uso de sustancias psicoactivas fue otra problemática que se hizo aún más evidente en los jóvenes del sector.

Gestores de Paz, por ejemplo, se unió con la comunidad para reunir mercados o ayudas de cualquier tipo destinadas a las familias que la estaban pasando mal por cuenta del confinamiento. “Estando en sus casas entran en mucho más estrés de no poder salir, de que la policía está molestando, de muchas problemáticas que terminan aumentando el consumo”, expone Juan Ortega, también mentor de Gestores de Paz, que ha estado desde el inicio de la organización.

Las actividades que hacían con los niños y las niñas cada sábado, por evidentes razones, tuvieron que quedar en un segundo plano, pero las labores de Gestores de Paz siguieron enfocándose en la comunidad y en ayudar a muchos a salir adelante en medio de semejante adversidad. Las afectaciones a los mentores han sido claras, pues las relaciones que se han

tejido en la comunidad con la organización se construyen desde los lazos de amor y la familiaridad.

Sin embargo, y a pesar de la pandemia, Gestores de Paz sigue con el pie firme resistiendo a los obstáculos que esta impuso en el planeta entero. Han tenido que adaptarse, como todos los demás, a la nueva normalidad, y las actividades se han podido volver a realizar en la presencialidad, al ritmo de las regulaciones del Gobierno nacional.

Mientras estaban confinados, los mentores estuvieron convencidos de que tarde o temprano volverían a sus actividades, y repetían una y otra vez que nunca paraban de soñar. Como para muchos sectores, el momento de su reactivación se tardó un poco en llegar, pues las medidas no fueron flexibles hasta que se cumplió un año de haberse decretado en el país la emergencia sanitaria.

"Cuando fueron quitando las restricciones, intentamos hacer un proceso. Recuerdo que hicimos unos talleres en la casa cultural, pero la convocatoria fue muy mala. Seguimos buscando el medio, la forma de llamar la atención de los niños y niñas y sus familias, pero fue muy complicado. En el 2021 terminamos con un grupo de 45 niños y niñas, nada mal, pero en comparación con el alcance que teníamos es muy bajo. Yo sola llegué a tener un grupo de veinte niños a mi cargo", cuenta Valentina.

Las causas de la inasistencia de los niños y las niñas fueron, entre otras, el apego a la virtualidad, según explicó la joven mentora: "Los niños ya están más apegados a la virtualidad. Entonces un niño que con ocho años estaba acostumbrado a salir todos los fines de semana a un parque, ahorita cambia eso mil veces porque lo dejen jugar Xbox o que le presten el celular, y a veces hasta prefieren quedarse en casa viendo Netflix".

Poco a poco los sancochos comunitarios, las novenas navideñas y las proyecciones audiovisuales han vuelto a la comuni-

dad. La organización ha encontrado la forma de volver a hacer actividades en la presencialidad. Evidentemente, la cuarentena provocó, de cierta manera, una desarticulación del proceso, lo que ha hecho que la organización deba volver a convocar a los niños, las niñas y los jóvenes para que retomen las labores de Gestores de Paz y que quienes no conocían el proceso lo conozcan y se vinculen. En los últimos meses, se han reactivado en la presencialidad comenzando con una primera reunión, nuevamente los sábados, para hacer un proceso de socialización mediante el cual explican nuevamente a los niños y las niñas qué es Gestores de Paz y qué hace en Potosí.

Como parte de este proceso, Valentina cuenta que han pensado en aliarse otra vez con la organización World Vision, para mejorar la convocatoria y crear una correlación en la que Gestores de Paz colabore junto a la organización internacional para avanzar en la reactivación social, cultural y pedagógica de los mentores en el barrio.

La vida en la montaña no deja de ser compleja, pero cuenta con una comunidad convencida de que incluso en las mayores adversidades están para apoyarse unos a otros, y organizaciones como Gestores de Paz acompañarán ese camino. A pesar de las pocas garantías que hay en el contexto de la ciudad más allá de la ciudad, Valentina, Darling, Juan, Nicole, Nedzib, Luisa y Lisa siguen levantándose cada sábado a coordinar acciones que sigan ayudando a sus habitantes, con el férreo deseo de construir generaciones más pensantes, conscientes y con la convicción intacta de que sus niños aprenden, se divierten y forman sus mentes para tejer la tan anhelada generación del cambio.

Cuando se les preguntó a los gestores por las garantías que tienen en un barrio como Potosí, en Ciudad Bolívar, afirmaron que no las tenían claras, pues ellos y ellas no se detienen a pensar en esos asuntos, sino que están ocupados simplemente

en ser líderes. Como si fuera una convención mundial, responden diciendo que hay pocas garantías, pero las que hay provienen de su comunidad y el ímpetu propio de construir una ciudad para aquellos a quienes la capital se les ha negado. "La comunidad nos ha guardado un amor, una comprensión, que nos apoya en movilizaciones, en caminatas. Nos ven a nosotros con el logo, con pancartas, con muchas cosas y saben: 'Ahí van los muchachos, sigan el ejemplo de ellos'. Entonces a uno lo motiva que la comunidad lo acompañe en esas cosas", dice, con una voz que emana orgullo, Valentina, la más joven de las mentoras de Gestores de Paz Potosí.

Además, Valentina es enfática en que las pequeñas labores que ha adelantado Gestores de Paz en Potosí han conformado una gran realidad de cambio en el barrio y en la localidad, que ha terminado llenando el corazón de quienes integran el movimiento y combatiendo constantemente la sensación de estancamiento. "Uno se apega mucho a las cosas y a las personas. El hecho de que hagas un sancocho comunitario y un niño que no había desayunado ni almorzado el día anterior te diga muchas gracias a mí me parte el corazón, pero me da mucha alegría lo mucho o poco que le pudimos ofrecer", dice.

Potosí es un barrio de tantos de la capital de Colombia y de muchas otras partes del país que se enfrentan a realidades pesadas para quienes los habitan. Los niños y las niñas, que apenas descubren el mundo, se enfrentan a la infamia del maltrato intrafamiliar y las dinámicas de violencia entre bandas delincuenciales. Gestores de Paz no se ha configurado como una organización que pretenda cambiar esas dinámicas que tanto han oscurecido el panorama, pero sí se ha embarcado en el propósito de acoger a los niños y las niñas para que se conviertan en tejedores de paz para sus hogares y su localidad, acercándose con cada pequeña acción a ese gran

futuro. El futuro llevadero, alegre y garantista que todos y todas anhelan.

Referencias

Rodríguez, V. (2021). *Saberes ambientales de Cerro Seco: la construcción de una comunidad socialmente justa y ecológicamente sustentable. Sistematización de experiencia*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/26288/RodriguezVargasVanessaFernanda2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— y la Gobernación de Cundinamarca (2019). *Encuesta multipropósito 2017*. https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudios-macro/encuesta-multiproposito/encuesta-multiproposito-2017.

Donde el miedo agoniza

Por María Camila Restrepo Giraldo

María Camila Restrepo Giraldo (Herveo, Tolima, 1993). Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Trabajó en la revista *Semana* en temas de derechos humanos, orden público y cubriendo la negociación de paz entre el Estado y las FARC-EP. Actualmente presta sus servicios a la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— en la elaboración de contenidos periodísticos. En el 2019 recibió el Premio Simón Bolívar por su trabajo *El verde palidece*.

En Icononzo, el primer firmante del Acuerdo de Paz que triunfó en las urnas trabaja para ampliar los senderos por donde transitará el Partido Comunes después del 2026. Asegurar una representación política que se sostenga con el voto popular es la misión que aceptó Mario Alberto Montiel. Con su gestión, el concejal ha logrado levantar la imagen negativa que las FARC-EP dejaron durante la guerra. No ha sido fácil. Ni para la comunidad que llevaba décadas llenándose de razones para tener miedo, ni para los hombres y mujeres de la extinta guerrilla que pagan un precio social y moral por haber pertenecido al grupo insurgente.

Para hombres como Mario Montiel, hasta hace unos años la única forma de figurar entre los titulares de prensa habría sido estando muertos. A él nunca se le ocurrió pensar que un día los colombianos murmurarían su nombre y lo reconocerían como el primer servidor público elegido por voto popular, con el aval de las FARC. El nombramiento se dio en la primera contienda regional en la que debutó el extinto grupo guerrillero después de dejar las armas. Y, aunque a oídos de los más incrédulos esto pueda sonar embustero, su mayor contradictora le hizo campaña.

"¡Como que no me las creía!", responde Johnson cuando le pregunto qué pasó el 31 de octubre del 2019.

Mario o Johnson, le da igual. El primero le sirve para votar y el otro es como su nombre artístico. Por las calles de Icononzo en el Tolima, sin embargo, voltea cada vez que alguien lo llama: "¡Concejal!".

La noticia lo dejó perplejo, pero su historia le dio un comienzo a las FARC como partido. Esa semana en la que, ante 14.020 hombres y mujeres en proceso de reincorporación, se desinflaba el legado del autoproclamado Ejército del Pueblo, a 116 kilómetros de Bogotá, un hombre de 36 años que se levantó en las entrañas de la guerra desde los trece —queriéndolo o no— se alistaba para darle otro rumbo a su vida y, con ello, asegurar que las balas nunca más se impusieran sobre la palabra.

Desde que aterrizó en la política, Mario vive con el tiempo medido. Siempre —dice— tiene una llamada que contestar, un mensaje que responder, un documento que radicar o la necesidad de contactar a los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo —UTL— de los congresistas del Partido Comunes, como se renombró el partido FARC, para que le ayuden a resolver algún embrollo legal que él todavía no entiende.

El 5 de agosto del 2021 se presentó a la sesión como de costumbre. Se sentó en la silla de plástico y la arrastró hasta descargar sus codos en el escritorio de madera. De un fólder negro, en el que guarda papeles importantes desde cuando se enteró que tendría que soltar la danza y el teatro para encarrilarse en la política, sacó tres documentos. Justo enfrente de él, al lado opuesto de la entrada del salón, una mujer terminaba de llamar a lista y de revisar el cuórum para iniciar la sesión dándole la palabra.

—¡Gracias, presidenta! Radiqué esta proposición para que sea discutida y aprobada en pleno.

Mario leyó prevenido su primer proyecto. No esperaba nada distinto a lo que había sucedido el día anterior con el concejal más votado en el municipio: Juan Carlos Robayo. Al representante por el Partido de la U, quien además pertenece al mismo movimiento político de la alcaldesa, las seis iniciativas que presentó ese miércoles, se las hundieron una a una.

Ese resultado fue el que condujo a Mario a creer que su destino ya estaba cantado. Mientras la oposición alega que no puede hacer control político, quienes hacen parte del partido de gobierno dicen que no los dejan trabajar. Pero él tenía otra historia por contar. Una con la que corroboró una máxima de la democracia nacional contemporánea: la política es dinámica.

—¡Aprobada por unanimidad! —se escuchó en el recinto.

Los once cabildantes estaban de acuerdo con la propuesta del Partido Comunes de citar al secretario de Planeación de Icononzo para que informara cómo se ejecutó el presupuesto destinado a mitigar el impacto de la temporada invernal en las vías del municipio. Mario no se dejó aturdir por la emoción. Les dio un compás de espera, se acomodó la cachucha roja y continuó. Estaba leyendo las preguntas que tenía para citar al mismo funcionario, pero esta vez por otro tema, cuando un concejal del Partido Liberal lo interrumpió.

—Espere un momento —le dijo José Orlando Barbosa—. Por el tipo de contrato, no se debe solicitar informe de interventoría, sino del supervisor del contrato —le corrigió.

Mario incluyó el ajuste. La propuesta tenía un error de interpretación legal que no alteraba el resultado. Sabe que las imprecisiones en la política se pagan caro. Pero también es consciente de que esa equivocación que notó el concejal Barbosa, quien lleva más de diecisiete años ocupando el cargo, es parte normal de un proceso que recién empezó, y de que podrá afinar sus habilidades con el tiempo, la experiencia y con ayuda de la beca que se ganó para estudiar su pregrado de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP—.

"Cuando llegué a Icononzo yo era un raso. No llegué pensando en alimentar esa vena política ni ser representativo dentro de la comunidad, sino que venía a hacer mi proceso después de haber dejado la guerra. Cuando arranqué de las Sabanas del Yarí en Caquetá dije: termino la escuela y estudio administración de empresas", relata.

En el Concejo, la sesión continuó una vez superaron el debate técnico. La corrección no impidió que citaran nuevamente al secretario de Planeación para que explicara cómo se

invirtieron los 1.208 millones de pesos asignados para hacerles mantenimiento a las vías terciarias del municipio.

Todos los cabildantes respaldaron una vez más la solicitud. En cuestión de horas el vocero del Partido Comunes tenía el quórum a su favor. Pero esa capacidad de movilización tenía una razón de ser. A Robayo le cobraron haberse ido con la oposición. La estruendosa derrota que presenciaron veinticuatro horas antes era el resultado de una jugada política de la que Mario salió invicto y con un reconocimiento que no se había dado en año y medio.

—La propuesta muestra interés por el estado de las vías y lo que pasa en el municipio. Es importante que el funcionario informe qué se está haciendo. Felicitaciones, concejal —le reconoció una representante del Partido de la U.

Mario no digirió la escena hasta el día siguiente, cuando se encontró en un café con Laura Vega, la coordinadora política del Partido Comunes en Tolima y, sobre todo, su mentora.

"Sí. ¡Eso fue lo que me dijo Sandra Gallo!", exclamó asombrado, después de reconstruirle con efusividad todos los pormenores de una sesión histórica en su prematura carrera política. Tenía argumentos suficientes para creer que era así y no precisamente por las palabras de reconocimiento que le escuchó a su opositora. De fondo, había otra razón más importante: ese día le aprobaron el primer paquete de proposiciones desde que asumió el cargo.

La cifra es minúscula pero significativa. Es una victoria que desnuda la realidad a la que se enfrenta el Partido Comunes, que tiene hasta el 2026 para construir su electorado y asegurar una representación política que se sostenga por voto popular. Y para lograrlo, el camino más largo pero más efectivo parecen ser los senderos por donde transita el concejal. No hay que llamarse a engaños. Tras el debut de Rodrigo Londoño

en las elecciones presidenciales del 2018, comprendieron que hay heridas profundas que no sanan de la noche a la mañana. Ese es el origen del mensaje más revelador que quedó tras la contienda: para ganarse la confianza de los colombianos les toca ir acumulando poder de abajo hacia arriba.

Basta hacer un balance de su incursión en el Congreso para entender la proporcionalidad del triunfo. En tres años los cinco senadores y cinco representantes del Partido Comunes han apoyado cien proyectos y han presentado treinta. Ninguno de estos, sin embargo, ha visto la luz. De modo que lo que ha hecho Mario en Icononzo es abonar terreno con su gestión. Y ese jueves la solicitud que hizo para conocer cómo se invirtieron los 176 millones de pesos asignados para reparar algunas de las sedes educativas de Icononzo también pasó.

***

—De verdad, Mario, yo a usted le tengo miedo.

Así: directa, franca y concreta fue la primera conversación que Adriana Salcedo sostuvo con Mario. Se despachó, se despojó de lo que sentía y le preguntó todo lo que se le ocurrió. Él no se lo tomó a mal y encaró todas las preguntas que pudo. Se trataba de acusaciones serias y alarmantes, pero eso no le preocupó. Sabía que para eso se había firmado en el 2016 el Acuerdo de Paz.

—Sí, eso no lo puedo negar —le respondió para tranquilizarla—. No tuvo por qué haber pasado. Estuve muchos años, pero no vengo con esa idea, sino con la de acabar la guerra y juntarnos para construir un mejor país.

Ese día, recuerda ahora, estaban sentados en una de las mesas de la panadería que el esposo de Adriana tiene en el parque. Hasta allí llegaron después de que él la abordara y

ella, ante los insistentes esfuerzos que le notó por sostener la conversación, le ofreciera acercarlo en su moto al pueblo. Venían de las afueras del municipio, donde trabajaban con Plataforma Juvenil, una iniciativa de la Alcaldía de Icononzo a la que ambos pertenecían.

"Me acerqué y la saludé. Ella se quedó mirándome y le dije: 'La invito a que nos tomemos un tinto para que usted conozca mi vida y yo la suya. Más allá de lo que fui, esa es una línea que ya está agotada y estoy dejando atrás'". Mario puso sobre la mesa todas las cartas que tenía. Ese fue el propósito que se trazó cuando le contaron cómo reaccionó ella al enterarse de quién era él.

—¿Qué hace aquí? —le preguntó Adriana a la directora de la Plataforma Juvenil. Ella quería saber más sobre el hombre que les propuso montar una emisora comunitaria.

—Es un excombatiente —le respondieron.

—Ah, no, yo me salgo —reaccionó ella con apatía, sin pensarlo dos veces—. ¡Qué mamera! —añadió con desdén.

Mario no se tomó sus palabras al pie de la letra. Por el contrario, se propuso abordarla y hablar con ella, tal y como ocurrió ese día en el parque. En la panadería, el tinto que le ofreció para romper el hielo se convirtió en una pila de pocillos que se fueron acumulando sobre la mesa. Entre sorbo y sorbo, esa tarde empezaron a instalar las bases de su amistad. Eso sí, lo hicieron sobre un interrogatorio.

"Yo tenía muchas preguntas y se las hice todas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Por qué se metió a las FARC? Cuando la amistad empezó yo indagaba mucho", admite Adriana, estaba a la defensiva.

Cada charla la condujo por los rieles de una montaña rusa. Fue una larga temporada en la que se la pasó de allá para acá. Escuchaba a Mario y la explicación que tenía para cada cosa

que le preguntaba. El problema, sin embargo, es que a ella la confianza le duraba lo que tardaba en pisar de nuevo la casa de su mamá. "Usted está loca. Ya vio todo lo de esa Corporación Rosa Blanca. Todas esas mujeres violadas por los comandantes", contó que su mamá le dijo una vez, muy preocupada. "Claro. Yo me volvía a voltear y me iba contra Mario. ¿Eso qué? ¿Por qué?", le reclamaba con insistencia.

Adriana estaba llena de dudas y miedos que venía alimentando desde los cinco años. En ese entonces, siendo apenas una niña, le tocó salir corriendo a buscar dónde esconderse. ¿La razón?: la guerrilla se había tomado el pueblo. De modo que empezar a confiar requería más de acciones que de palabras. "Cuando ellos llegaron, para mí fue fatal. Yo estaba muy asustada. Pensaba: ¿en qué momento esta gente se alborota?", relata ahora.

La desconfianza en el pueblo era casi generalizada. Fue a través de los medios de comunicación que muchos se enteraron de que ya no era Villarrica, sino Icononzo, una de las veinticuatro zonas dispuestas en el país para la dejación de armas. El sentimiento se exacerbó cuando se dieron cuenta de que el predio que inicialmente contempló el Estado entró en sucesión y los nuevos propietarios no lo quisieron alquilar.

—Pensamos que iba a ser malo. Teníamos un frente (de las FARC-EP) y ahora nos íbamos a encontrar gente de todos los frentes. Todos teníamos la mentalidad de que iba a ser más negativo que positivo, pero al final no fue así. Fue más positivo —dice Alexandra Clavijo, una comerciante que regresó al pueblo seducida por la transformación que prometió el Acuerdo de Paz.

Como todo inicio, no fue fácil. Ni para la comunidad que llevaba décadas acumulando razones para tener miedo, ni para los hombres y mujeres de las FARC-EP, que pagaban un precio social y moral por haber pertenecido a la guerrilla.

—¿Cuándo empezó a desaparecer esa prevención que tenían con los firmantes del Acuerdo de Paz? —le pregunté a Alexandra mientras conversábamos en su oficina.

—Al año —respondió.

El cálculo de la empresaria, que logró consolidar su negocio familiar al tiempo que las FARC-EP cumplían con los plazos fijados para la dejación de armas, coincide con las fechas del concejal Robayo y el relato de Adriana. Al final, en Icononzo nadie fue ciego frente a los cambios políticos, ni sordo ante la propuesta de conciliación.

Para el líder del Partido de la U hay un punto de quiebre en ese proceso y son los carros cargados con camas, colchones, espejos, armarios y sillas, que empezaron a salir de la cabecera municipal rumbo a la vereda La Fila. Allá, arriba en la montaña, desde donde se observan Chinauta y Fusagasugá en las noches iluminadas, los excombatientes de las FARC empezaron a amoblar sus casas. Hoy cada una de ellas conforma una ciudadela con cuatro barrios: Brisas de Paz, Carbonell, 27 de Mayo y 22 de Septiembre. Es la herencia que quedó después de peinar la montaña.

Fue esa decisión de abandonar la vida nómada para asentarse en Icononzo lo que dinamizó la economía y marginó las diferencias. Los trasteos variaron proporcionalmente con los avances que el país iba conociendo sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Esa sincronía se mantiene hoy. No quieren *engallar* más sus casas hasta que les definan dónde van a vivir y les espanten el miedo de un desalojo.

Mientras los dirigentes del Partido Comunes y el Estado resuelven ese pulso en Bogotá, por las calles destapadas que conducen al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —ETCR— Antonio Nariño, como ellos mismos lo bautizaron, se ve pasar a los excombatientes en motos o

en el carro de turno, subiendo desde el pueblo en costales y bolsas sus remesas.

"Ellos empezaron a comprarles a los comerciantes, a generar empleo, a abrir negocios y a vender más", fue uno de los cambios que empezó a notar el concejal Robayo.

Con una mirada más serena hacia el pasado, en Icononzo hoy creen que las escenas de los Jeeps los llenaron de esperanza y les devolvieron el alivio. Fue a través de ese reconocimiento de la cotidianidad, precisamente, que se impuso una realidad a la que nadie se pudo negar: la presencia de los excombatientes transformó sus vidas, pero también sus bolsillos. Adriana está convencida de que fue así: "Mi esposo les vendía el pan y yo le decía: ¡claro!, usted es amigo de ellos es porque le hacen la compra".

Aunque le aterraba la idea de poner un pie en las reuniones a las que la invitaban, todos estos detalles ambientaron la posibilidad de que dos acérrimos contradictores escogieran derrumbar la mentalidad de guerra que se impuso durante más de cincuenta años. Mario alardea de que Adriana es su mejor amiga. Ella, a su vez, lo ve y lo trata como a un hermano. Uno frente a quien se para sin tapujos, a resolver las dudas que todavía le despiertan los horrores de la violencia. En esos ires y venires, el concejal venció el miedo que le producía empezar de nuevo en otro lado: "La mamá era reuribista, y mire ahora", Mario se emociona cada vez que cuenta cómo la familia de Adriana se la jugó por él en las elecciones.

Esa nueva realidad se la debe a una parte de sí que no se tomó personal cada cosa que le decían. Otro factor clave fue la franqueza con la que siempre les habló. No les ahorró detalle cuando les reveló que apenas en el 2016, gracias al Acuerdo de Paz, conoció a sus padres, o que, con apenas dos años, su joven madre lo abandonó, y que al hombre que lo adoptó un día se le ocurrió castigarlo poniéndolo a raspar coca.

"Ella le tiraba indirectazos duros. Pero fue así como entre recocha y recocha se terminó volviendo amigo de toda la familia", explica Adriana sobre cómo se fueron dando las cosas.

***

Mario no tiene linderos políticos. Simpatiza con la idea de que se puede codear con todos los partidos, conservando su esencia. Por eso, no es extraño verlo conversando con el Partido de la U, saliendo a tomarse un tinto con el del Partido Liberal mientras evalúan cómo va la sesión o, incluso, buscando alianzas.

Llegar hasta este punto le ha costado más que noches de desvelo. Cuando se presentó al Concejo, prácticamente llegó con una mano adelante y otra atrás. Era como un niño en su primer día de clase. Para él, esta descripción explica por qué al inicio limitó su participación a analizar a sus compañeros, observar qué hacían e identificar sus posiciones.

"Realmente yo no sabía nada. Yo pensaba que ser concejal no más era llegar a mirar que las platas se gastaran en lo que es y ya. Pero vaya usted y corrobore eso. Necesita estudiar, revisar documentos; si no, va a quedar en lo mismo", se cuestiona.

Acomplejado. Así se sintió Mario los primeros meses. Se dejó deslumbrar por el conocimiento que mostraron los otros diez cabildantes en las sesiones. Se asustó por la experiencia que tenían y lo abrumaron las leyes, las normas y los estatutos que se debía aprender para conseguir una participación notable y rigurosa. En una casa abandonada en lo más alto de La Fila, enciende un cigarrillo y aspira con fuerza.

"El primer día llegué y me senté. Nos dicen: 'Concejales, inauguramos la sesión'. Nos tomaron la foto. Al final, me preguntaron: '¿Usted es de gobierno, independiente o de la opo-

sición?'. Y yo: '¡Me voy de oposición!'", relata Mario que afirmó con convicción.

Cuando le pregunto cómo se define, me dice que es de pocas palabras, que no le gusta andar con rodeos y es bueno aprendiendo a partir de la observación. Pero esa posición ya no se mantiene. Perdió el miedo a hablar en público, no se avergüenza de expresar su opinión y defiende a rajatabla sus ideas. De modo que cuando le pregunto cuál sería el rumbo que marcaría la participación de las extintas FARC-EP en el Concejo, se remite a las mismas palabras que ese día pronunció ante la plenaria: "No será una oposición radical a todo, sino una sana. Mientras veamos que los proyectos son beneficiosos para la comunidad, diremos que sí".

En el municipio estaban convencidos de que, por la inexperiencia, no iba a dudar en alinearse con la administración. Pero la sorpresa no solo se la llevaron los habitantes de Icononzo cuando se enteraron de cómo quedaron las fuerzas en el Concejo, sino también el partido.

"Con el tiempo nos dieron la razón", dice con orgullo de la decisión que defendió de los cuestionamientos.

Ese fue un signo alentador. Tomó un riesgo que amarró a los indicios que notó en las primeras sesiones. No es una rueda suelta, pero es autónomo. Ya entendió el tejemaneje de los proyectos que llegan al recinto y de todos los hilos que se mueven detrás de ellos. El título de opositor lo comparte con cuatro concejales más. Ellos, por su parte, sienten que solo hacen control político.

La lectura de la administración evidentemente no es la misma, e incluso coincide con la de sus aliados en la corporación, que insisten en que sus proyectos no tienen futuro. Esa impresión se incubó desde cuando cuestionaron a la alcaldesa Margoth Morales por destinar un dinero del presupuesto que

no estaba aprobado para celebrar las fiestas del retorno, y la terminaron de ratificar en junio del 2021, cuando les tumbaron un paquete de proyectos bandera. De entrada, hay un truco que Mario todavía no entiende. Si son iniciativas importantes, ¿por qué las pasan cuando ya se va a terminar el periodo de sesiones ordinarias?, se pregunta.

Ese fue el caso de las propuestas que naufragaron y que le daban facultades a la administración para 1) concesionar el alumbrado público por veinte años a un particular, 2) adoptar tarifas para el impuesto del alumbrado y 3) adquirir un préstamo para financiar la actualización catastral. Los tres trámites les resultaron desconcertantes, inexplicables y sospechosos. La alerta la lanzaron los cinco y casi que, por primera vez desde que llegaron al recinto, se pusieron a prueba la articulación y la confianza que se tenían como oposición, tal como lo confirma el concejal Robayo: "Solicité una marcha y Mario la convocó con los demás compañeros. Nosotros somos cinco, pero el pueblo hace el sexto y el séptimo".

Bajo la consigna *No a la privatización del alumbrado público de Icononzo,* decenas de ciudadanos salieron a marchar. Ese es el choque más directo que han sostenido con la administración y el triunfo más significativo que han conquistado como coalición.

En ocasiones como esta, Mario lleva las riendas solo. Es él quien toma las decisiones. Actúa con cautela porque ya sabe cómo se mueven las fichas en el Concejo. Se asesora y se comunica constantemente con quienes rodean al senador Carlos Antonio Lozada o al representante a la Cámara Sergio Marín. Ambos son cuotas del Partido Comunes en el Congreso, que se distanciaron de quienes traicionaron el Acuerdo y retomaron el camino de la lucha armada.

"Uno pensaba que las FARC eran solo armas, pero me encontré con que no. Ellos defendían su línea política y uno pen-

saba, ¿cuál línea política?, si se la pasan echando bala. Pero cuando se desligan de las armas, se ve que sí estudiaban. Mario gana la elección y hay toda una articulación para ayudarlo y no dejarlo solo", ha observado el concejal Robayo.

En algo tiene razón: que las FARC abandonaran las viejas formas de lucha no significaba que iban a adoptar las mismas de los partidos tradicionales. El problema, sin embargo, es que esa decisión los puso frente a un dilema. El tiempo que tienen para cultivar un electorado empata a la fuerza con la propuesta de imponer una agenda transformista que descontamine la política de los cuestionables métodos con los que muchos casi siempre ganan.

Todo esto se hizo evidente en la campaña electoral en la que trabajó Mario. El último día de esa maratón histórica la realidad los golpeó con una lección tras otra. Primero, haber recorrido todos los rincones del municipio haciendo pedagogía y buscando adeptos no era garantía de nada. Ese 27 de octubre tenían que cuidar los votos para que el abstencionismo, que se incuba con la dificultad que tienen muchos colombianos para participar en la jornada electoral, no pusiera en jaque el resultado. Dejar las mesas a su suerte, sin testigos electorales de confianza que dieran fe de una jornada limpia, fue el otro riesgo que comprendieron tarde. Pero a esas alturas lo que más les preocupaba era que a los firmantes del Acuerdo de Paz que bajaron de la vereda La Fila no los dejaban votar.

La suya es una carrera contra el reloj. Y esos son algunos de los errores que no se pueden dar el lujo de repetir. De eso están convencidos tanto Laura como Mario. Ella como su mentora y él en su rol de aprendiz. Con la cantidad de requisitos que les pidieron casi se quedan sin inscribir candidatos. Por el lado de las coaliciones tampoco les fue bien. Cometieron muchos errores de digitación que los desgastaron en el pape-

leo. Y de la convergencia departamental los sacaron con una simple explicación: las FARC no suman, sino que restan votos.

"Sacamos 4.200 votos para la Asamblea. Es un número significativo porque el último que pasó lo consiguió como con cinco mil. Nos faltó poco. Si ellos no nos hubieran sacado de la lista, habríamos sumado y seguramente tendríamos diputado", les recrimina hoy Laura.

En cierto modo, fue un debut memorable. La campaña les ofreció una oportunidad para iniciar su consolidación como partido y levantar la imagen negativa que acumularon durante la guerra. Pagaron la primiparada por no haber estado sintonizados con la letra pequeña de la arquitectura electoral, pero el precio no fue tan alto. El golpe lo amortiguó la decisión que tomaron de centralizar los procesos legales para los dos candidatos a la gobernación, 16 a las alcaldías, 12 a las asambleas y 57 a los concejos municipales, que aparecieron en los tarjetones del país.

Coyaima fue el lugar donde se definió la hoja de ruta de la campaña para el departamento: Tolima Digno, que cimentaron sobre cuatro pilares: 1) "un pueblo gobernando es un pueblo transformando"; 2) "construyendo humanidad resistimos por la paz"; 3) agua, territorio y equidad; y 4) economía solidaria, solidaridad alimentaria.

Mario fue uno de los doce candidatos que Icononzo Digno presentó al Concejo y a la Alcaldía en coalición entre Comunes, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. De ellos, apenas tres eran firmantes del Acuerdo de Paz y todos los demás eran líderes de las veredas cercanas al ETCR. El Triunfo, Balconcitos, La Fila, Mesón y Guamitos son algunos de los atajos por donde pasaron haciendo campaña, explicando el Acuerdo de Paz, aclarando que ya no secuestraban, enseñando a votar y pregonando una misma consigna: *El que paga para llegar llega para robar*.

***

A Icononzo no solo llegaron los firmantes del Acuerdo de Paz. Tan pronto sus habitantes confirmaron que no era cierto el rumor de que el municipio se iba a vandalizar con su presencia, detrás de ellos fueron llegando la institucionalidad en todas sus formas, la confianza que se había perdido en la guerra y un agente dinamizador de la economía; también regresaron al lugar del que nunca se debieron haber ido las víctimas que salieron de sus tierras huyendo del conflicto.

"Renuncié a la empresa donde llevaba diecisiete años trabajando y decidí volver. Quería invertir aquí", confiesa Alexandra Clavijo. Ella se define como cien por ciento iconozuna, aunque desde los once años salió con su mamá en busca de un mejor futuro en la ciudad. "Teníamos dos caminos —recuerda sobre la violencia de esos años—: quedarnos y hacer parte de la guerrilla que nos podía reclutar o salir huyendo del municipio".

El suyo fue un destino similar al que enfrentó Mario, casi desde esa misma edad. Tras haber tocado fondo con el castigo que le impusieron durante un año en Güérima (Vichada), optó por acercarse a los hombres armados que veía pasar y con los que en el 2010 terminó combatiendo día y noche durante un mes. Esto, después de haber estado a cuatro kilómetros del campamento de Jorge Briceño, al que las Fuerzas Militares le descargaron siete toneladas de trinitrotolueno.

Pero lo que vivió Alexandra dista de todos estos sucesos. Se cumplieron cinco años desde que retornó y no se arrepiente. Hoy es la dueña de la distribuidora mayorista más grande que existe en Icononzo. Cuando menos pensó, el proyecto agroturístico que montó en la misma vereda donde su abuelo había sido asesinado por miembros del Frente 25 de las FARC-EP se

volvió un éxito. "Nosotros pensábamos que Rancho Campo iba a ser algo pequeño, pero no. El turismo cogió un *boom* importante. Esa fue una de las ventajas del Acuerdo de Paz".

En el "balcón del oriente del Tolima", como se conoce popularmente este municipio, sus pobladores coinciden en que hay un antes y un después. A pesar de que Icononzo fue una de las últimas zonas que el Estado definió para llevar a cabo el proceso de dejación de armas, hoy es el proceso de mostrar. No solo por el número de proyectos productivos que se están desarrollando y por la elección de Mario, sino también por las condiciones que ofrece para quienes allí llevan a cabo su reincorporación.

Con ojos turísticos, académicos, laborales, pedagógicos y culturales, comenzó el tránsito de cientos de colombianos y extranjeros por esta subregión del páramo de Sumapaz. Venían de todos los rincones del mundo a ver cómo se construye la historia frente a sus ojos. Con la avalancha de instituciones, entidades y programas que llegaron, se tendió un puente sobre las diferencias por donde hoy transitan tanto los firmantes del Acuerdo de Paz como la comunidad. Alexandra fue una de las primeras que lo cruzó: "En plena entrega de armas fui a La Fila. Como me metí en todo el tema de turismo, dije: hay que aprovechar todo lo que a ellos les dan. Entonces, se crea el Comité Turístico del que hago parte y empezamos a aprovechar las visitas de Fontur y el ministerio".

Aunque la vocación del municipio sigue siendo fiel a sus tradiciones agrícolas, entre los sembradíos se abrieron camino nuevos mercados. Parado frente a ese mar de posibilidades, Mario admite que tiene una espinita atravesada entre pecho y espalda. Le fastidia a él, pero la sienten casi todos en el Concejo: "¿Por qué somos el único municipio con un ETCR que está por fuera de los programas de desarrollo con enfoque territorial?", ironiza.

Miopía o falta de voluntad, cada quien tiene una respuesta. Eso sí, todos coinciden en que se habrían podido beneficiar más. Tienen varias razones para creerlo. Solo con lo que han experimentado, Icononzo salió del anonimato. Varios factores influyeron para que esto fuera así: 1) es el ETCR más cercano a una ciudad principal, 2) está apenas a cuatro horas de Bogotá y 3) es la zona menos convulsionada para hacer el tránsito a la vida civil.

Una cifra respalda esa última característica. Al menos cincuenta firmantes del Acuerdo de Paz llegaron a este municipio después de haberse visto obligados a renunciar a lo que construyeron desde cuando empezó la reincorporación. Caquetá, Putumayo y Antioquia son algunos de esos departamentos de donde han salido huyendo de las mismas balas que mataron a 337 excombatientes desde el 2016, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Por esa travesía pasa el único candidato con el que el Partido Comunes se la jugó por un cupo en la Asamblea Departamental del Tolima: Gustavo Bocanegra Ortegón. Un abismo separa su relato del proceso por el que pasa Mario. El origen de esas diferencias se incuba en el rol que cada uno tuvo en la guerra.

De la vereda El Oso, en el corregimiento de Gaitania en Planadas, *Donald Ferreira* (seudónimo con el que lo persiguió el Ejército Nacional) salió huyendo después de que una bomba se activara en la casa de uno de los miembros del consejo político del Partido Comunes: Hugo Perdomo.

Tras varios intentos infructuosos por abrirse un lugar en la política, el exmiembro del Comando Conjunto Central Adán Izquierdo de las FARC-EP desistió de sus aspiraciones y se refugió en la cooperativa Economías Sociales del Común que conforman los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

"Desde Icononzo he estado liderando un proceso como gerente aprendiz del nuevo centro que se conformó. Fui contratado por Ecomún para liderar un proyecto de piscicultura en la región". Con esta nueva misión, apoya más de cuarenta asociaciones. De ellas, dieciocho están en el Tolima y ocho en Icononzo. Antes de salir rumbo al parque donde expondrán los productos que han desarrollado, se toma un tinto y las enumera. Entre ellas menciona a Tejiendo Paz. Gonzalo Beltrán es el gerente de la cooperativa textil que asocia a veintidós familias.

En la lista también está el proyecto de Mario que marcó su carrera como líder y que llevó a Semillas de Reconciliación a convertirse en una fundación en la que participan 65 niños que lanzaron su primer disco. También está su apuesta más reciente: la Asociación Productora Audiovisual (Aspavl), que lidera con Jhon Jairo Urrego y que conformaron con varios habitantes de la vereda La Fila.

Pero entre las propuestas de economía social y solidaria que han surgido en el marco del proceso de reincorporación, La Roja es una de las más representativas. Esta cerveza artesanal se convirtió en la carta de presentación en su tránsito a la vida civil. Los icononzunos la sienten como propia. La comercializan en tiendas y mercados, y la distribuyen en Bogotá. Sin embargo, volver el municipio epicentro de producción no fue posible. El emprendimiento y el uso del suelo no son compatibles y enredaron los papeles que necesitaban.

***

—¡Juan Carlos Robayo del Partido de la U! ¡José Orlando Barbosa del Partido Liberal! ¡Víctor Manuel Márquez del Partido Alianza Social Independiente!

En el polideportivo del pueblo, el funcionario de la Registraduría citó a los habitantes del municipio para informarles cuál era el veredicto oficial de la contienda del 27 de octubre del 2019. Uno a uno, leyó los nombres de los concejales electos. Había pasado casi una semana desde que se conocieron los resultados preliminares, y con 354 votos los miembros de Icononzo Digno eran conscientes de que las cifras no alcanzaban para reclamar curul, pese a haber logrado remontar a Cambio Radical y el Centro Democrático en las urnas.

—¡Mario Alberto Montiel del *partido de la rosa!* —se escuchó en el recinto. Era el concejal número once que nombraban, el último que iba a clasificar.

Un corrillo que se había formado estalló de júbilo. Los asistentes se volvieron hacia Mario. Él estaba petrificado. Había pasado tres noches revisando los votos. Las sumas no le daban en la cabeza.

"¿Me nombraron a mí? ¿Por qué clasifiqué yo?", se preguntaba mientras revivía las largas jornadas de reconteos. "No sé cómo pasó. Yo mismo me sorprendí y de una vez hice una llamada: 'Laura, acaban de dar el veredicto y quedé como concejal'".

A Mario no solo le intrigaba haber coronado una curul, sino también que su nombramiento estuviera por encima del de Jorge Antonio Ortega, el candidato de El Triunfo que encabezaba la lista con más votos que él.

"Me fui a hablar con el personero y le dije: 'Hay una persona por encima de mí, ¿qué hago?'", le señaló preocupado. "¿Se van a poner a pelear por la curul?", fue lo que obtuvo como respuesta.

Se negaba a aceptar los designios así no más, pero tomó una decisión cuando Laura le habló con franqueza: "No pelee más, porque si no, vamos a perder la curul y nos quedamos sin montar a ningún candidato".

Mario acató la instrucción. Nunca terminó de armar las piezas del rompecabezas y la única sospecha que maneja recae sobre el principal contrincante de la alcaldesa. "Yo pienso que estoy ahí por Hugo Nelson Jiménez. Él renunció a la curul que tenía asignada por haber quedado de segundo. Él se quita y sigo yo".

Fuera del aspecto netamente anecdótico de la situación, hay una explicación para casi todo. A pesar de que los formularios E-24 indican que él sacó 71 votos y Jorge, 75, en los E-26 que se expiden posteriormente la cifra se invirtió con 79 y 75, respectivamente. Eso mismo pasó con los concejales electos en Putumayo y Antioquia. Es decir, los tres firmantes del Acuerdo de Paz pasaron en el reconteo.

Allí estaba otra vez Mario, con esa sensación de vacío. En la misma situación en que lo puso Valentina Beltrán cuando le soltó la dirección de la fundación Semillas de Reconciliación o cuando le dijo que lo iban a postular como candidato al Concejo. Un vértigo que hoy disfruta, pero que sintió por primera vez siendo un niño, cuando lo botaron a los cultivos de coca.

"No fue para que me educara, sino para que me descompusiera", reconoce sin rencor. En ese punto del relato, Mario sintió que no resistía un segundo más la necesidad de encender un cigarro; sacó de nuevo la candela y añadió: "Me cayó como un baldado de agua fría. Me tiraron al ruedo sin nada".

Con todo lo que ha experimentado, al concejal no le cabe duda de que se ha transformado desde que llegó a Icononzo y que cada vez está más lejos del que se metió a las FARC. En diecinueve años que Mario se la pasó de un frente a otro recorriendo más de medio país con el Bloque Oriental, nunca le habían soltado tanto poder como el que tiene ahora. Prácticamente, se mantuvo en la misma cadena del eslabón a la que llegó de niño, cuando se enlistó en las FARC sin dimensionar

qué era la guerra, sin saber de la existencia de los paramilitares, el ELN, el EPL y todavía muy lejos de entender que con fusil en mano había tomado partido en una guerra que apenas empezaría a defender como suya.

Así mismo, Mario todavía no se reconoce como un líder. Siente que cumple con la misión que se le encomendó. Pero ni Laura ni Valentina creen que se trata solo de eso. Dicen que tiene el espíritu que necesitan para alentar el tránsito de los firmantes del Acuerdo de Paz a la vida civil y política. Por eso, desde que se cruzaron en Icononzo, cada uno ha puesto de su parte para impulsarlo. En el 2023, habrá que ver a qué historia desconocida lo lanzan.

"Ah, juemadre, ¡dónde nos embarcamos!", responderá él.

Referencias

Agencia para la Reincorporación y la Normalización —ARN— (2022). *ARN en cifras*. https://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/ARN-en-cifras.aspx

Ecos del Cobeima (27 de mayo de 2021). "No es cierto que vayamos a privatizar el alumbrado público": Margoth Morales. https://www.ecosdelcombeima.com/tolima/nota-172623-no-es-cierto-que-vayamos-privatizar-el-alumbrado-publico-margoth-morales.

Ondas de Ibagué (13 de febrero de 2020). Insólito: a 3 días de haberse posesionado, alcaldesa de Icononzo hizo polémico contrato. https://www.ondasdeibague.com/noticias/principales/59-destacadas/26578-insolito-a-3-dias-de-haberse-posesionado-alcaldesa-de-icononzo-hizo-polemico-contrato.

Devenir trans, bajo todos los fuegos

Por Ángela Martin Laiton

Ángela Martin Laiton (1989). Periodista bogotana. Escribe desde hace más de ocho años para distintos medios de comunicación, como *El Espectador, Revista Arcadia, HJCK, Cromos* y Hacemos Memoria, entre otros. Durante un año fue la editora de *Pacificultor,* primer periódico del Catatumbo.

Asotransnor lleva más de seis años trabajando por los derechos de las personas trans en Norte de Santander. Dentro de esta organización convergen historias, como las de Daniela, Paola y Greicy, atravesadas por el fragor de la guerra y la dinámica de la frontera entre Colombia y Venezuela, una de las más vivas del continente. Esta es una historia de lucha y resistencia, en este caso por conquistar y hacer respetar los derechos de la población trans que habita en la región.

"Tuve una vida de calle, era de las que salía de trabajar y cargaba con mi cuchillo de lado a lado. Las chicas, más que respeto, me tenían miedo. Me tomaba mi media de aguardiente los sábados y, como era la que mandaba en la zona, si usted se quería parar a trabajar tenía que garantizar que lo haría de lunes a lunes, nada de que llegan solo los viernes y hasta el otro fin de semana; cuando hacían eso las sacaba corriendo a cuchillo. Si querían pararse ahí, tenían que cumplir los días y llevarme mi media de aguardiente; son dinámicas que se dan en las calles. La vida en la calle es una ruleta". Han pasado diez años desde entonces, narra Daniela Meneses con la voz serena, pero sin mirarme, mientras tomamos un café en el centro de Cúcuta.

Daniela tiene 37 años, y habla con seriedad, un rasgo marcado por el acento santandereano; sin embargo, cuando le pregunto la edad, se aventura a bromear: "Tiene que colocar ahí en la entrevista: 37 años, soltera, en busca de un amor verdadero y puro". Lo dice exagerando el movimiento de la boca y meneando el cabello de lado a lado ; una risa estridente inunda el café. Ella es la representante legal de Asotransnor, una fundación que trabaja con hombres y mujeres trans en Cúcuta, Norte de Santander, cuyo objeto social es la articulación de esta población para la gestión de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas trans.

No fue fácil para ellas iniciar un colectivo trans en una frontera como la cucuteña, surcada por la discriminación, el

empobrecimiento, la guerra, la violencia policial y el narcotráfico. Un coctel que se revolvía cada noche en el centro de la ciudad, en las calles marcadas para la prostitución. La noche del viernes 24 de junio del 2016, cuando presentaron la asociación en Cúcuta, la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero se llenó de mujeres trans vestidas de trajes largos y tacones. Un mar de brillantina y globos de colores: azul, rosa y blanco, formaron la bandera del orgullo trans, exhibida en una ciudad señalada por años de conflicto armado y presencia paramilitar. Y aunque Asotransnor ya tenía una historia de luchas y dolores en Norte de Santander, ese día empezaba a existir legalmente para la ciudad. La valentía tiene muchas formas, y esa noche aproximadamente cien mujeres eligieron la fiesta para reafirmar valientemente la diversidad frente a la guerra.

Una red de apoyo para volver a empezar

Daniela narra de memoria la historia de la Asociación de Chicas Trans de Norte de Santander (Asotransnor), que se creó en abril del 2013 y que en el 2018 se convirtió en fundación, buscando ampliar su capacidad de gestión e incidencia. Mientras lo hace le da vueltas a una malteada de café que fuimos a buscar después del almuerzo. El calor cucuteño estaba por los treinta y seis grados. Dos horas antes habíamos decidido almorzar para encontrarnos con otra de sus compañeras, Paola Cerpa, una de las lideresas de la fundación, quien asesora a las personas que llegan en temas de matrimonio igualitario y reasignación de sexo.

Paola mide más de un metro ochenta, tiene un cuerpo curvilíneo, el cabello teñido de morado y los labios pintados del mismo color. Lleva puesta una ombliguera y *jeans* con sandalias. Juntas atravesamos parques del centro de la ciudad que

en la noche se convierten en las esquinas de trabajo de muchas de sus conocidas. Mientras caminamos, los ojos de varias personas se fijan en nosotras de manera incesante, parecería que no esperaban ver a estas dos chicas trans a plena luz del día. Me sorprende que una zona que ha normalizado actos atroces de la guerra todavía se escandalice con mujeres trans que habitan el espacio público en actividades distintas a la prostitución. "Es normal, amiga, no los mire", me dice Daniela con naturalidad y continúa: "A veces pienso que prefieren vernos muertas".

Las fulminantes palabras de Daniela me hacen pensar en que esta es una situación común en un país en el que, según el informe 74 del 2021 de la Defensoría del Pueblo, entre el 2020 y el 2021 fueron asesinadas 98 personas con identidad de género diversa. Por otro lado, el informe *La mala hora* del programa Somos Defensores para el 2020 reveló que, de las 924 personas agredidas por su liderazgo social en Colombia, 18 pertenecían a colectivos LGBTI, lo que muestra un aumento del 260 % frente a las agresiones del año anterior. Desde esa perspectiva, el informe agrega:

> Sorprende el incremento en los ataques contra el liderazgo LGBTI, lo que indica un alto grado de homofobia, incrementado en la pandemia, pero también pone en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran frente a un Estado que no avanza en políticas de garantías específicas para estas personas.

Es en medio de ese contexto que durante nueve años Asotransnor ha realizado su trabajo en Norte de Santander, región donde a la violencia del conflicto armado, la cultura machista y la violencia de género se suman los conflictos propios de una frontera, lo que representa diversos desafíos para esta población. Daniela, como lideresa, lo ha sufrido en carne

propia; como trabajadora sexual fue hostigada hace seis años por la fuerza pública, y seis años antes fue amenazada por grupos paramilitares que delinquían en Cúcuta: "De todo este proceso lo peor es la discriminación, sentirse señalada, rechazada. El tema de la violencia policial lo sigo sufriendo. Nos tienen estigmatizadas. Lo más duro es que cuando me amenazaron de muerte por todo el proceso de liderazgo que llevo, me dijeron que olía a formol, que en cualquier momento me iban a dar en la cabeza. Ahí empieza la persecución, yo digo que estoy viva es de chiripa porque cuando me iban a hacer algo me fueron a buscar a la alcaldía (el lugar de mi trabajo), eso fue en el 2016, pero yo no trabajaba en el Palacio Municipal, yo trabajaba en una dependencia en la biblioteca pública, entonces me buscaron en el edificio que no era. Sin embargo, siempre estaba la zozobra de que yo veía caminar detrás de mí dos o tres hombres y me entraba el pánico, no sabía qué hacer, me metía en algún lado".

La mayoría de las personas trans que se acercan a Asotransnor vienen de sufrir algún tipo de violencia, por lo que, cansadas de la estigmatización tanto de sus familias como de la sociedad en general, buscan ayuda.

Para Paola este proceso fue muy traumático al principio; relata: "Nací en Valledupar, Cesar. Llegué a Cúcuta para encontrar una segunda opción, dado que donde nací y me formé no pude ser quien yo quería. Por eso, mi casa actualmente es Cúcuta, ya tengo como unos veintiún años de estar radicada aquí. Tengo 39 años. Mi infancia fue muy dura, pero aquí me di cuenta de que esto nos pasó casi a todas, cada vez que llega alguien nuevo escuchamos nuestra propia historia en otra persona. Este país es muy machista. Todo empezó con mi papá, que fue muy violento cuando más necesité su acompañamiento para que me explicara por qué yo sentía atracción por los

hombres o, por ejemplo, cuando empecé a usar cosas de niña, como la ropa. Nunca andaba sin camisa en la casa para que no se me vieran las teticas, mandaba a ceñir mi ropa, me colocaba la ropa interior de mis hermanas para que me quedara apretadita... cuando él se daba cuenta, era un *show.* También me le colocaba la ropa a mi mamá a escondidas".

Daniela se ríe mientras la escucha; con los años que tiene en esta lucha, tiene identificados los puntos cero de la búsqueda de la identidad: "Ponerse la ropa de la mamá es cosa que vivimos todas. Aunque hay una particularidad entre nosotras dos; yo soy una mujer transgénero y Paola es una mujer transexual. Hay una diferencia abismal porque, aunque somos de la misma población, tenemos sentires y pensares diferentes, en el sentido de que las mujeres transgénero pasan más por lo sexual y lo erótico, es decir que nuestra identidad de género no concuerda con la genitalidad. Las mujeres transexuales no tienen esa misma visión porque el cerebro de ellas no concuerda con los genitales, entonces para ellas es más complejo asumirse como mujeres teniendo pene. El tema de la transexualidad va enfocado en el tema de la reasignación sexual. Es importante aclarar que todas las mujeres trans somos diferentes. La palabra trans encierra muchas cosas, o tiene varios hijitos, por así decirlo: travestis, transformistas, transgénero, transexuales, también hacen parte los *drags queer,* todo eso nos agrupa como población".

Aunque para todas ellas la primera ropa transformista estuvo guardada en el armario de la mamá, cada historia implica distintas particularidades: algunas son migrantes, otras fueron echadas de la casa por su familia; muchas de ellas son personas amenazadas, que no pueden acceder a servicios de salud o que han sido discriminadas laboralmente por su identidad. Ante esta diversidad de violencias, contextos y necesidades, el

trabajo de Asotransnor siempre es el de recuperar a estas personas que llegan tan lastimadas y desorientadas. Por eso la organización ha creado distintas aristas para el trabajo colectivo, lo que ha llevado a sus integrantes a tener diferentes roles de incidencia: un equipo acompaña el acceso a la salud física y psicológica; otro acompaña procesos jurídicos, como el cambio de identidad en los documentos públicos; y otro, el acceso a la educación superior y la vinculación laboral.

Paola, por ejemplo, se dedica a asesorar a mujeres trans que quieren casarse o acceder a la cirugía para el cambio de sexo: "Me gusta trabajar con las otras mujeres aquí. Yo misma busqué quién me diera la mano cuando llegué en el año 2000, no tenía ni un peso, fue un trauma muy fuerte porque me tocó dormir en los parques. El primer parque en el que dormí fue en Las Palomas...". En este punto del relato pausa la voz y llora. Retoma la compostura y continúa: "También en el parque La Cuenca Luminosa, allá vi cuando robaban a otras personas y yo le pedía a Dios que no me pasara nada. Siempre me opuse a prostituirme, llegué a pedir monedas, la gente me regalaba y con eso algo comía. Después de ese proceso conocí a una chica transgénero que me apoyó muchísimo, ella fue mi red de apoyo en un momento en el que yo no sabía ni qué era. Ella me hizo respetar de las otras chicas trans, me trató de enseñar cómo era la vida en la calle, yo no sabía maquillarme ni nada de eso y ella me enseñó".

Paola pasó esos primeros ocho años en Cúcuta sin mantener ningún contacto familiar, rebuscando trabajos donde la contrataran, sufriendo varias veces abuso sexual, pero luego, en el 2017, conoció a Adriana Montes en una capacitación y entonces cambió su visión de la vida: "Cuando ella entró, yo no me imaginé que era una chica trans. Después ella habló, contó sobre su trabajo, fue un momento muy inspirador ver-

la tan preparada, tan empoderada en sus cosas. Ella es un referente para todas las personas trans que la conocen. De Daniela yo ya había escuchado, me habían hablado muchas cosas muy lindas, pero yo le guardaba miedo por todo lo que también decían de ella en la calle, y yo no sabía que Daniela y Adriana eran compañeras y trabajaban desde el mismo lugar. Fue como una casualidad".

Adriana Montes es una de las lideresas con más experiencia dentro de Asotransnor. Es un referente para las mujeres trans en la frontera colombovenezolana. Ella es la asesora técnica de la fundación y quien lleva todos los procesos de salud, uno de los temas que se trabajan con más fuerza. Cuando Daniela no puede tomar decisiones, Adriana es quien lo hace. "Es tanto el apoyo, la confianza y el trabajo mutuo que más que amigas somos hermanas", explica Daniela.

"Ella nos ha abierto muchos espacios con otras organizaciones, es muy buena articulando cosas de carácter nacional hacia lo regional. Hay dos chicas que están estudiando donde yo hice la técnica; una se vuelve una referencia entre todas las personas que se vinculan a Asotransnor. Adriana, por ejemplo, actualmente, es estudiante de psicología —así, ha inspirado a varias personas de la fundación que han iniciado la misma carrera—. Para ella y para mí son muy importantes la participación y la formación de todas las demás, porque esta fundación no es de dos personas, es de todas y todas debemos estar lo mejor articuladas que podamos", agrega.

Después de que Paola conoció a Adriana, en aquella reunión del 2017, se vinculó a Asotransnor, primero como persona orientada y acompañada, ahora como lideresa que acompaña a personas trans en asuntos como el cambio de identidad o el asesoramiento para que parejas diversas se puedan casar, pues ella misma fue una de las primeras que accedió al matrimo-

nio igualitario en Cúcuta. Cuando le pregunto a Paola por su matrimonio, tanto ella como Daniela se ríen: "No, amiga, eso no prosperó, la demora fue que me casara para divorciarme: llevábamos viviendo cinco años, nos casamos y nos divorciamos a los cinco meses". Paola se casó en la notaría segunda de Cúcuta en el 2018; me cuenta que tuvo la fortuna de que las personas que trabajaban allí eran mujeres, a quienes siente más empáticas con sus derechos y su identidad. No hubo trabas ni obstáculos para acceder al matrimonio.

Procesos y liderazgos como los que han vivido Paola y otras mujeres y hombres trans de Norte de Santander ahora son posibles porque, como ella misma dice, en Asotransnor "he tenido una red de apoyo que no tuve jamás, aprender a prepararme para vivir, a llevar mi proceso hormonal. Supe que tenía derechos, los he defendido junto a las demás y acompaño a otras que llegan y no saben cómo hacerlo".

Todo empieza con *el giro*

"Empecé a los catorce años en la prostitución. Durante diecisiete años la ejercí aquí en Cúcuta, pero también en Bucaramanga, Bogotá, Arauca, Cartagena y Medellín. Todas pasamos por ese tránsito entre ciudades; le decimos el giro", lo pronuncia "yiro", como en italiano. "En ese contexto, en el 2011 inició en Cúcuta un proyecto de VIH Fondo Mundial que empezó a captar a las lideresas de la población clave[1] que ellos manejaban. Ahí empecé un proceso de capacitación y

1 Según ONUSIDA, el concepto de *población clave* se refiere al enfoque en cinco poblaciones con las que se trabaja la prevención del VIH desde el Sistema de Naciones Unidas y la OMS; corresponden a "los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas y las personas en prisión o bajo reclusión de otra clase".

liderazgo que cambió todo; cambié el rumbo de mi vida", recordó Daniela.

En el 2011 Daniela empezó a estudiar la técnica en Trabajo Social y Consultoría de Familia en el Instituto de Formación Técnica Sistematizado (Intesis) de Cúcuta. Estudiaba de lunes a viernes desde las 6:15 hasta las 9:45 de la noche. Quince minutos después de terminar la jornada, todos los días, salía a la esquina donde siempre trabajó para poder pagar sus estudios y mantenerse. Luego entró a trabajar en la Cruz Roja como lideresa par y al tiempo la ascendieron y fue ganando reconocimiento dentro de la población diversa de la ciudad. Para graduarse de la carrera técnica en el 2013, hizo las prácticas en la Alcaldía de Cúcuta y empezó a trabajar con la Red de Mujeres Trans. Ese fue el punto de partida de su incidencia. Actualmente, Daniela está a punto de graduarse como trabajadora social de la Universidad Francisco de Paula Santander.

"Empezamos un liderazgo fuerte con Angélica Vargas, ella ahora está en Europa porque fue amenazada entre el 2011 y el 2013, se fue de Cúcuta y me quedé sola *frenteando* todo el proceso". Es en ese contexto que nace Asotransnor, desde la necesidad de mujeres trans en ejercicio de prostitución. Para crear esta organización invitaron a las chicas trans que habían conocido en esos años de calle para que se sumaran e intentaran construir un espacio para las políticas diversas en la frontera. Al principio muchas de ellas se sumaron, pero los tiempos que exige el trabajo sexual, el ritmo de vida que se lleva en las calles y los problemas que cada una debía afrontar hicieron imposible trabajar en esa convergencia.

Fueron años muy difíciles, en los que lucharon para consolidar un proyecto en el que se desmarcara la vida de las personas trans de los estigmas impuestos por la sociedad, incluida la falta de vinculación laboral y el trabajo sexual como único

destino; años en los que se enfrentaron a amenazas y a la indiferencia de las instituciones del Estado.

Cuenta Daniela: "El tema del activismo viene con toda la lucha que empezamos a dar con Angélica, donde algunas instituciones empiezan a abrirnos los espacios. Todo el proceso de reclamar los derechos de las personas trans en una ciudad como Cúcuta. Hicimos un proyecto con Poder Paz, con Marcha Patriótica en su momento. Al principio estuvimos como activistas independientes y luego nos aliamos en una plataforma. También hicimos parte de los diálogos de paz en el tema de la construcción de la política pública nacional para la población diversa, que está ahí engavetada, pero bueno, ya veremos. Hicimos un trabajo muy importante con ONU Mujeres como defensoras de derechos humanos, el cual nos abrió muchos caminos de encuentros, de concertación, de diálogo".

"Estamos ahí para ser escritas. Para ser eternas"[2]

La noche del primero de enero del 2017, Karla Torres, una lideresa trans de Cúcuta que sufrió dos atentados, fue asesinada por dos sicarios mientras ejercía como trabajadora sexual en una calle del barrio Latino. El transfeminicidio continúa en la impunidad.

"Aquí a las chicas que hacen procesos de liderazgo las llamamos madres porque son quienes nos acompañan en todo cuando empezamos en el trabajo sexual, nos ayudan a aprender a maquillarnos mejor, nos enseñan cómo ponernos una peluca, a ellas les contamos si tenemos problemas. Eso hacía Karla", cuenta Karen Ruiz, lideresa trans de Cúcuta, en un video con-

2 El título de este apartado es un fragmento de la novela *Las malas,* de Camila Sosa Villada.

memorativo realizado por Asotransnor después del transfeminicidio de Karla.

"Él hacía respetar la cuadra donde trabajaba, era un muchacho con temperamento, pero era un buen hijo, me ayudó mucho siempre. Antes que mi hijo creo que era mi amigo. Siempre estaba pendiente de las personas que trabajaban ahí con él, esa calle era respetada por lo que él hacía, pero vea hasta dónde llegó, y cuando eso sucedió nadie lo ayudó. Yo quisiera que hubiese habido alguien que lo hubiera empujado, así lo hirieran en una pata, pero que no me lo hubieran quitado", comenta llorando Yamile Torres, la mamá de Karla, quien todavía le menciona con su nombre de cuna: Carlos Jesús Báez Torres, el mismo nombre que registró la Fiscalía tras el asesinato.

La violencia contra las personas trans en Norte de Santander está atravesada por el conflicto armado que el departamento ha vivido desde hace varias décadas. La presencia de distintos grupos armados, como el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, por la disputa de las rutas del narcotráfico y el control de los territorios, ha sido una constante. Como resultado de los enfrentamientos entre estos grupos armados, tanto legales como ilegales, ocurren amenazas y asesinatos contra líderes sociales, el despojo de tierras y otros crímenes con una naturalidad pasmosa. Esto ha hecho que, según el *Informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en la subregión del Catatumbo*, presentado por la organización Caribe Afirmativo en el 2020, "las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas tengan prohibido moverse por algunas zonas del Catatumbo de acuerdo con órdenes de grupos armados que controlan el territorio". A esto se suma la ausencia de registro en las instituciones de la zona correspondiente al asesinato de líderes LGBTI y violencias basadas en el género entre la población.

Una de las personas vinculadas a Asotransnor que más ha sufrido esta violencia es Greicy, una mujer trans de tez morena, sonrisa ancha y un cabello negro que el día de nuestra entrevista llevaba enrulado y agarrado con una hebilla amarilla en la parte alta de la cabeza. Durante nuestra conversación habló de forma pausada, con una voz tranquila que me recordó a un personaje de Roberto Bolaño en *Estrella distante,* es decir, con la voz de un hombre que sabe que la vida siempre acaba mal y no vale la pena exaltarse.

"Desde que yo era un niño anhelaba vestirme de mujer, quería verme como una mujer. Pero usted se imaginará que en el tiempo en que yo me crie, y más en el campo, todo era más difícil. Toda la vida he vivido aquí", relata Greicy, quien es habitante del corregimiento Buena Esperanza, en una vereda llamada Puerto Lleras, en la vía que de Cúcuta conduce a Puerto Santander. Esta es una zona controlada por grupos paramilitares desde hace varios años, a la que es complicado llegar para cualquier persona de afuera, por lo que ser una mujer trans y vivir allí es un desafío que requiere de mucho coraje.

Buena Esperanza ha vivido el conflicto armado directamente y, como la mayoría de las zonas rurales de Colombia, no ha sido atendida con equipamientos básicos que garanticen los derechos fundamentales de sus habitantes; una prueba de ello es que se anunció la llegada del agua potable apenas para diciembre del 2021. La guerra entre los grupos armados ha hecho que los habitantes de Buena Esperanza vivan en la zozobra.

"A mi papá lo mataron cuando yo iba a cumplir un año y nueve meses, de mi papá sé solamente lo que la gente me contó. Me tocó una vida difícil, me pone muy sentimental hablar de esto. Me tocó una vida difícil con mi mamá, en ocasiones aguantábamos hambre", cuenta Greicy, quien se detiene en este punto de la conversación para llorar.

Un momento después, retoma el relato: "En mis cosas soy muy reservadita, no me gustan los vicios, no me gusta fumar cigarrillo, nunca he probado la marihuana, el perico; aquí uno conoce todas las drogas, las conoce porque este es un mundo muy pesado. Vivimos en una parte donde hay muchos grupos armados y debemos cuidarnos; por ejemplo, aquí llegaban amigos míos y me decían: '¡Ay!, pero usted por qué le pone tanto cuidado a la gente'. Y yo les respondía: 'No es la gente. Es que si a mí me ven fumando marihuana con los muchachos ¿sabe qué va a decir la gente? Como ella es trans, ella es la que los daña. Y yo no me voy a ganar una matada, si ni un cigarrillo me fumo'. Ahorita por donde vivo está superpeligroso. Aquí la presencia paramilitar es amplia, también hay guerrilla, hay delincuencia común, esto es un desorden".

Este contexto de guerra pone en el centro de las agresiones a personas históricamente discriminadas y vulneradas, como mujeres, pueblos indígenas y población diversa. Solo en el 2020 el asesinato de personas LGBTI aumentó en un 40 % en el país respecto al año anterior, según reveló Caribe Afirmativo citando cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación. Los asesinatos, indica esta organización, están directamente relacionados con la orientación de género y los procesos de liderazgo que llevaban en sus territorios. Dos aspectos peligrosos se encuentran para estas violencias: una tradición conservadora en los campesinos de la región y el ordenamiento territorial que ejercen los actores armados.

De hecho, en el 2007 Greicy se desplazó a Cúcuta durante algunos meses, luego de recibir amenazas de grupos paramilitares, y para poder regresar a su casa, estuvo obligada a negar su orientación sexual. "Tuve que irme, yo tengo carta de desplazada por eso, a mí me tocó irme para donde la familia un tiempo y esperar, porque esa gente es cíclica; ellos están un

tiempo y luego se van y así. Después volví a Buena Esperanza y saqué mi cédula, en ese tiempo me tuve que volver a vestir como hombre otra vez, cabello corto, todo", relata.

Conseguir trabajo para una mujer trans es difícil, mucho más en la ruralidad, por lo que Greicy trabaja en un bar del corregimiento atendiendo la barra, sirviendo tragos y cerveza. Muchos de sus clientes pertenecen a los grupos armados de la zona. "Ahora en el trabajo me encuentro gente de esa. Llegan a mandar, me dan órdenes para que no le ponga más música a nadie y así. Yo busco no meterme con nadie y no hacer nada en la calle que sea indebido", cuenta.

Las fronteras entre la vida de las personas y los actores de la guerra son difíciles, definir bandos claramente solo es posible para quien no está dentro de las dinámicas del conflicto. Muchas veces, cuando la guerra atraviesa el cuerpo y la cotidianidad, no es fácil distinguir buenos o malos. Las historias más inverosímiles ocurren así.

"Una vez me enamoré. La primera vez que lo vi me pareció hermoso; sin embargo, ¿sabe qué hacía ese muchacho? Era paramilitar. Él un día me escribió por el pin, eso era lo que estaba de moda en ese tiempo", se refiere al servicio de mensajería de los teléfonos Blackberry. "Él tenía un nombre, y luego lo cambió y también la foto; aun así, yo ya había alcanzado a verlo. Y así se mantuvo oculto un tiempo, escribiéndome, pero sin asegurarme quién era, eso era evidente. Una vez mataron a unos paramilitares y él de una vez puso cosas de luto. No sé, yo estaba segura de que era él. Un día estábamos en un baile y él llegó... Nosotros estuvimos, era un moreno hermoso, joven, pero muy desconfiado, y yo pues lo entendía, porque de una persona de esas qué más puede uno esperar. A ese hombre lo desaparecieron y nunca supe más de él", vuelve a su pasado.

Greicy se mantiene firme, no está dispuesta a abandonar el corregimiento de nuevo; esa es una de las razones por las que se vinculó a Asotransnor desde hace tres años, pues las personas trans también necesitan liderazgos y representación en las zonas rurales de Norte de Santander. Dentro de la fundación la han incentivado para que ingrese, como las demás, al programa de Trabajo Social. Su sueño es poder acceder a la educación superior. Sus encuentros con las demás son esporádicos, se limitan a los días en los que puede llegar hasta Cúcuta; sin embargo, Daniela habló mucho de la importancia que tiene para la fundación hacer presencia en la ruralidad nortesantandereana y de cómo Greicy representa un primer paso para ello. Sin embargo, la situación de orden público en Norte de Santander es un obstáculo que dificulta el trabajo de Asotransnor en ese sentido, porque "ahorita la cosa está muy difícil, vivimos con zozobra porque en cualquier momento puede haber un enfrentamiento o algo. No sé, es muy difícil. Pero aquí seguimos", afirma Greicy.

Una frontera ardiendo con las migrantes dentro

"Ser mujer trans en la frontera es duro", afirma Daniela. "Para nadie es un secreto el problema de seguridad que hay, el narcotráfico. Chicas migrantes que no pueden acceder al permiso temporal, mujeres trans pasando por una trocha donde hay violaciones, desapariciones, trata de personas, todo tipo de violencias. Luego, llegar aquí sin nada las hace más vulnerables por su orientación sexual y su condición de migrantes. Muchas de ellas terminan en la prostitución, comiendo de la bolsa de la basura; es fuerte el tema de la policía, que también las agrede mucho. Ahorita hay una chica a la que le dicen La Maracucha; ella cayó en el consumo de bazuco y terminó

como habitante de calle. A nosotras no nos cuesta brindarles ayuda, conocemos muy de cerca la desprotección, la discriminación y la soledad", explica el contexto.

Daniela me habla del acompañamiento que realizan desde Asotransnor en La Casa que Abraza, una iniciativa de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), inaugurada en febrero del 2021. Este espacio recibe población diversa venezolana que ha cruzado las trochas fronterizas para tratar de vivir en Colombia. La mayoría de estas personas están indocumentadas y han sido abusadas por los actores armados que controlan estos caminos. Para acompañarlas, La Casa que Abraza recibe ayuda de varias organizaciones de género de Cúcuta, que de forma gratuita ofrecen servicios de atención nutricional, asesoría jurídica, asistencia psicosocial y orientación en salud sexual y reproductiva.

Adriana Pérez, directora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, ha llamado constantemente la atención de instituciones y medios de comunicación para que se atienda la situación de violencia alarmante que viven las mujeres venezolanas y la población diversa que cruza la frontera. "Hemos tenido casos como el de una chica trans, migrante venezolana, a quien la policía detuvo en el centro de Cúcuta y le quemó el bolso con los documentos, ahí delante de ella. Aparte de eso le pegaron y le dispararon balines", denuncia.

En Norte de Santander las fronteras nunca se cerraron, se cerraron los puentes internacionales, pero las fronteras son porosas y los cruces son irregulares. La fundación Pares denunció desde el 2020 que el número de personas desaparecidas y asesinadas en esos cruces era escabroso. La situación

se mantiene así, y en ese sentido, Adriana menciona que el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, junto con otras organizaciones, como Asotransnor, identificó varias de estas rutas y el manejo que hacen de ellas los grupos armados ilegales; cuando una mujer o una persona LGBTI cruza la frontera, por allí corre el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada, trata de personas, violencia sexual y feminicidio.

El panorama con la llegada a Cúcuta, para quienes sobreviven, no es mucho mejor. La transfobia y la xenofobia operan con fuerza dentro de la ciudad; a menudo las personas trans que migran no encuentran albergues que quieran recibirlas, ni a nadie que quiera emplearlas o ayudarles. Esa suma de situaciones termina acorralando a la población diversa en las redes de prostitución y trabajo sexual. En el 2021 Caribe Afirmativo realizó un informe sobre la situación de la comunidad LGBTI en Colombia, en el que denunció problemas como la explotación laboral y los tratos crueles e inhumanos, señalamientos por razones de género y xenofóbicos, y el miedo constante de las personas a denunciar debido a la posibilidad de ser deportadas.

"Para nosotras este acompañamiento a la población OSIGD —con orientaciones sexuales e identidades de género diversas— migrante ha sido muy complejo; muchas de estas personas llegan a Cúcuta después de ver la cara de la muerte en esas trochas", narra Daniela. "Actualmente contamos con el apoyo de Caribe Afirmativo para brindar, a través de La Casa que Abraza, un refugio y apoyos alimentarios, repartidos en varias entregas, a las mujeres trans migrantes o retornadas. Pero nosotras somos una organización que no es asistencial, somos más dadas a la articulación, la gestión y la reclamación de derechos", agrega.

No seremos invisibles nunca más

A pesar de las amenazas, hace unos meses Daniela empezó a regresar a las calles en las noches para acompañar a las chicas durante el trabajo. Es en estas jornadas cuando más ocurren las vulneraciones a la población trans. Después de iniciar su proceso como fundación, el trabajo se ha ampliado a otros sectores, y la incidencia de quienes hacen parte del colectivo también se amplió: "En este momento la dinámica que estamos manejando es que, por evento, capacitación o actividad a la que seamos invitadas debe asistir cualquiera de quienes pertenecen a Asotransnor, porque eso va formando nuevos liderazgos y no deja la fundación en manos de unas pocas personas, además si el día de mañana no siguen con nosotras, pues al menos que se vayan formando y capacitando para su futuro", cuenta Daniela.

Las historias de Daniela están pobladas de silencios largos. Algunos recuerdos le endurecen el rostro al traerlos a la palabra. Aun así, dice con firmeza: "No puedo decirle que esto ha sido fácil, pero nosotras hemos huido siempre de la categoría eterna de víctimas. Lo que yo quiero para todas nosotras es salir de la marginalidad y los imaginarios estigmatizantes. Para eso tenemos que acceder a espacios educativos y políticos, romper de una vez con esa idea de que las mujeres trans o son putas o son peluqueras. Para nosotras, las mujeres que hacemos parte de Asotransnor, las historias de nuestras vidas son exitosas, todas hemos pasado de lo oscuro a la luz".

Así, con obstinación y de a poco, las integrantes de Asotrasnor se han dado a conocer a pesar de las dificultades. Han estado en espacios educativos de derechos humanos y población OSIGD con la policía y la Diócesis de Cúcuta. También han abierto alianzas con algunas universidades de la ciudad para que la población trans pueda acceder a carre-

ras profesionales. “Ahora con la alcaldía vamos a hacer un proceso de formación para las personas que tienen unidades productivas, para que puedan sacarlas adelante, hacer que crezcan y gestionar sus propios recursos con autonomía. La participación y la autogestión van de la mano para nosotras”, cuenta Daniela.

La fundación Asotransnor está compuesta en este momento por más de treinta personas con trabajos de incidencia en derechos humanos, sexuales y reproductivos, asesorías jurídicas, acompañamiento psicosocial y para el acceso a la educación y el trabajo. Pero sobre todo son juntanza, trabajo colectivo que se niega a la estigmatización o el asesinato silencioso, porque, como escribió Pedro Lemebel: “Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo, para que puedan volar”.

Referencias

Caribe Afirmativo y USAID (2021). *Informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en la subregión del Catatumbo*. https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2021/03/Catatumbo_web.pdf.

Defensoría del Pueblo (2020). Entre 2020 y 2021 asesinaron a 98 personas con orientación sexual e identidad de género diverso. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10218/Entre-2020-y-2021-asesinaron-a-98-personas-con-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero-diversas-OSIGD-dEFENSOR%C3%8DA.html.

Poetas del Fin del Mundo (24 de junio de 2020). Un poema de Pedro Lemebel: *Manifiesto* (1986). https://poetasdelfindelmundo.wordpress.com/2020/06/24/poema-de-pedro-lemebel/

Montes, A. (25 de agosto de 2021). En memoria de Karla Torres. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=s0WWgEp7pLg.

Somos Defensores (2020). *La mala hora. Informe anual 2020*. https://drive.google.com/file/d/1Ze-GofhR6k0c23oUCVN-ZlWrEMPH03JV/view.

Los vigías de la ciénaga San Silvestre

Por Xiomara Karina Montañez Monsalve

Xiomara Karina Montañez Monsalve (Barrancabermeja, 1979). Comunicadora social y periodista. Magíster en Ciencia Política. Docente e investigadora en el programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Periodista durante una década en el diario *Vanguardia* y actualmente directora del medio universitario *Periódico 15*. Coordinadora general de la Red Colombiana de Periodismo Universitario.

El médico Yesid Blanco y el politólogo Óscar Sampayo, dos integrantes de la Corporación Yariguíes, han acompañado en los últimos diez años a comunidades de Barrancabermeja, Santander, en la lucha por conservar la cuenca de la ciénaga San Silvestre, un ecosistema que abastece de agua a trescientas mil personas y donde habita el amenazado manatí antillano. La Corporación Yariguíes defiende la ciénaga y la salud de sus vecinos poniendo en evidencia los riesgos que implican dos rellenos sanitarios que vierten allí sustancias tóxicas. Por su activismo, Blanco y Sampayo han sido amenazados y perseguidos, y aunque huyeron de la región no abandonan sus causas.

—El bebé manatí se despegó de su mamá y empezó a jugar con mi hijo. ¡Empezó a jugar con mi hijo! ¿Acaso eso no es una señal?

Al otro lado de la pantalla, Yesid Blanco Calvete contaba los detalles que sostienen su conexión con Barrancabermeja y la ciénaga San Silvestre. De vez en cuando miraba a través de la ventana el paisaje gris y frío que por esos días de octubre del 2021 era común en Washington, Estados Unidos. Dijo que el día del encuentro con la mamá y el bebé manatí el agua era cristalina en el Crystal River Watersports de la Florida.

—Nos metimos al agua y fue cuando los dos se encontraron. Grabé ese momento con mi cámara GoPro. Mi esposa, mi hijo y yo dentro del agua, y un bebé manatí que parecía decirnos algo. La emoción no nos dejaba entender lo que sucedía; mi esposa incluso estaba aterrorizada porque pensaba que algo iba a pasar, y de pronto ella se volteó y la mamá manatí estaba justo a su lado. El señor que manejaba la embarcación nos decía: "Quietos, tranquilos, no se asusten, que ellos no hacen nada". Fue algo impactante y maravilloso.

Yesid, que es médico pediatra, cree que en ese momento mágico el destino movió sus hilos y lo puso en el camino que hoy lo tiene como uno de los colombianos que lucha por la conservación de la naturaleza y por la autonomía de los territorios.

Yesid hablaba sin despegar la mano derecha del pecho. Es un gesto que también hace cuando da discursos como inte-

grante de la Corporación Regional Yariguíes - Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, en adelante Corporación Yariguíes, como es comúnmente conocida. En sus intervenciones públicas, Yesid suele defender los intereses de comunidades rurales del Magdalena Medio.

En los últimos diez años, por ejemplo, respalda a los habitantes de Patio Bonito (una vereda de Barrancabermeja, Santander) que se oponen al funcionamiento de dos basureros ubicados muy cerca de sus viviendas y que afectan la ciénaga San Silvestre. Este ecosistema está protegido por su importancia ambiental, pues allí habita el manatí antillano (en peligro de extinción desde el año 2002), sus aguas abastecen a los pobladores de Barrancabermeja y sus peces son parte del sustento económico de la comunidad.

El encuentro de la familia de Yesid Blanco con los manatíes ocurrió en uno de sus viajes a Estados Unidos. Seguían las huellas de un capítulo del programa de televisión *Especiales Pirry,* que explicaba que cualquier persona que entre en contacto con la especie o afecte su ecosistema en la Florida puede pagar multas de hasta quinientos dólares y cárcel durante al menos tres meses.

El pediatra me contó después que su conexión con los manatíes viene desde que era un niño, cuando sus padres lo sacaron de la fría Tunja, Boyacá, a los tres años, y radicaron a toda la familia en Barrancabermeja, Santander, conocida como la capital petrolera de Colombia. En Barrancabermeja conoció al sacerdote Gabriel Ojeda Niño, su mentor. En el 2015, cuando el religioso falleció, a causa de la diabetes, dejó como legado a lugareños como Yesid la misión del trabajo comunitario.

El padre Ojeda, en calidad de rector de los colegios El Castillo y Seminario San Pedro Claver, y en su labor pastoral en al menos seis iglesias, se dio a conocer por darles un hogar

adoptivo a más de dos mil quinientos niños campesinos en las navidades, durante al menos una década.

En esas navidades las familias barranqueñas abrían las puertas de sus casas a niños de veredas como Linderos, Portugal, El Tigre, Bélgica, La Paz y La Renta, y casi siempre uno o dos días antes del 31 de diciembre los veían partir de la mano del padre Ojeda con maletas cargadas de juguetes, zapatos, ropa, libros y útiles escolares. Todo lo que necesitaban para empezar el año en sus veredas, todo para "ser mejores personas para el mundo", como expresaba el cura desde el púlpito en la misa de domingo.

—Nunca le dije al padre Ojeda que su labor me inspiraba. Son cosas que ahora reflexiono en mi condición de exiliado, lejos de mi madre, mi hermano y los niños que un día fueron mis pacientes. Él nos llevaba a la finca de retiro del colegio Seminario San Pedro, que quedaba a orillas de la ciénaga. De muchacho empezábamos a adentrarnos en el agua, que para mí era algo mágico; veía sus paisajes, sus flores, sus entramados. Me recordaba mucho a la Amazonía y la Orinoquía que veía en los libros de geografía. Yo les decía a mis compañeros de clase: "Vean, qué chévere que en Santander tengamos esto". Ahora que los conozco y los he defendido, sé que son dignos de un documental de National Geographic.

Dos meses después de mi primera conversación con el pediatra Yesid, él dio una entrevista, también por videollamada, a la revista *Semana*, sobre las afectaciones al medioambiente y a la salud de los habitantes de la vereda Patio Bonito, causadas por el funcionamiento de los basureros a cielo abierto.

El medio de comunicación dio a conocer con fotografías y videos hechos por la comunidad lo que la Corporación Yariguíes tanto denunció. Desde la apertura del relleno sanitario en el 2015 se han presentado nacimientos de niños con

malformaciones, algunos han muerto a los pocos minutos del alumbramiento y los que sobreviven padecen de neumonías y sarpullidos. Además, el vertimiento de lixiviados a la ciénaga San Silvestre causó el aumento de la mortandad de peces y restringió la pesca.

Lo que el médico no contó en esa entrevista es que tuvo que salir de Colombia el 5 de septiembre del 2018, luego de participar en una reunión informativa sobre el *fracking*. Los compañeros de varias organizaciones y defensores de derechos humanos llegaron al lugar y se lo llevaron porque había sido amenazado. Pensó en irse a España, pero no podía llevar a su esposa ni a su hijo. Escogió Estados Unidos con la aspiración de llegar a Canadá. Desde ese momento ha trabajado en distintos oficios mientras encuentra trabajo en el mundo de la medicina, que es su pasión y verdadera profesión.

A Yesid le han haqueado las cuentas de redes sociales, ha sido perseguido económicamente y ha sufrido montajes judiciales. En el 2020 presentó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— de la Organización de Estados Americanos —OEA—. Yesid contó que su situación llama la atención de quienes lo escuchan porque su profesión es la de médico pediatra.

—¿Por qué me convertí en un activista político? Debo aclarar que nunca fue mi misión de vida, yo solo quería que los niños de escasos recursos de Barrancabermeja tuvieran la misma oportunidad que tuve de aprender esquí náutico en nuestra ciénaga, que se preservaran los manatíes y que esa misma conexión que tienen los afluentes del río Magdalena la tuviera la ciudadanía con el medioambiente, pero fuimos inexpertos, nos ganaron la pasión y el amor por este lugar, y dejamos que las maquinarias políticas nos usaran. Volverme el antipolítico y el antiélite de una economía que pretendía ganar dinero con

ese basurero me convirtió en un blanco de estas organizaciones mafiosas. Después descubriríamos que el relleno estaba secundado por brazos de paramilitares, como lo confesó alias *Ernesto Báez*.

El pediatra explicó que las amenazas y las persecuciones que sufrió tenían como objetivo alejarlo de su activismo político. Pero, contrario a ello, las situaciones adversas lo animan a continuar con la lucha a favor del complejo de ciénagas San Silvestre, La Cira y El Llanito, humedales que desde hace más de cien años reciben la contaminación generada por el proceso de refinación del petróleo y que hoy sufren las consecuencias de dos rellenos sanitarios que funcionan a su alrededor.

Los dolores de la ciénaga

Los integrantes de la Corporación Yariguíes se hicieron visibles en el año 2013 debido al estallido de una movilización social en Barrancabermeja. En esos días algo olía mal: la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS— analizaba las solicitudes de licencias ambientales para la apertura de dos basureros: Anchicayá y Yerbabuena, debido al cierre del relleno sanitario La Esmeralda, el más antiguo de la ciudad petrolera. En las manifestaciones del 2013 se alzaron las voces a favor de la ciénaga San Silvestre, una fuente hídrica ubicada en el corazón del valle del Magdalena Medio y que vierte sus aguas a los ríos Sogamoso y Magdalena, por medio de un caño que lleva su mismo nombre.

En ese momento, los integrantes de la Corporación Yariguíes y los ciudadanos de Barrancabermeja, sobre todo de la vereda Patio Bonito, estaban preocupados porque la construcción de los basureros amenazaba el espejo de agua, que abastece a trescientos mil habitantes de la región del Magdalena

Medio, el corredor del jaguar, el hábitat del manatí antillano y a la comunidad de pescadores de la vereda, a unos cuarenta y cinco minutos de la cabecera municipal. Las protestas y los reclamos legales no surtieron efecto. La CAS otorgó las licencias en marzo del 2013 y en julio del 2014. Los basureros se construyeron y entraron en funcionamiento en el 2015.

En el 2006, la cuenca hídrica de la ciénaga San Silvestre había sido protegida por la CAS con la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado —DRMI—, y desde ese momento se incluyó en el sistema nacional de áreas protegidas. Por eso, el Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica Humedal San Silvestre, al que pertenece la Corporación Yariguíes, ha señalado que los permisos y el funcionamiento de los rellenos sanitarios son ilegales, pues las licencias se otorgaron en un territorio donde es prioridad la conservación del patrimonio natural.

Durante las protestas del 2013, las comunidades pesqueras, los habitantes de la vereda Patio Bonito e integrantes de la Corporación Yariguíes, como Óscar Sampayo y el médico Yesid Blanco, no imaginaron que la lucha terminaría en un largo proceso jurídico para proteger los derechos de las comunidades y del ecosistema de la ciénaga.

Resistir y empoderarse

Cuando en el 2006 la CAS creó el DRMI, la ciénaga San Silvestre quedó por fuera del plan de ordenamiento territorial de Barrancabermeja. La finalidad de esta acción era proteger el espejo de agua de la contaminación por los lixiviados generados en el tratamiento de la basura en el antiguo relleno sanitario del municipio, llamado La Esmeralda. Este operaba desde 1997, a un kilómetro del área protegida.

Lo contradictorio es que la entidad que protegió la ciénaga fue la misma que en el 2013 y el 2014 autorizó la licencia para la construcción de dos basureros: Anchicayá y Yerbabuena, respectivamente. La CAS otorgó los permisos basándose en unos estudios que presentó la empresa Entorno Verde y que fueron encargados en el 2009 por la administración municipal del alcalde Elkin Bueno Altahona. El estudio fue financiado por la multinacional petrolera Occidental de Colombia, OXY.

Entorno Verde entregó el documento en medio de la emergencia ambiental que se presentó por el cierre del relleno La Esmeralda, pero el documento no pasó por el Concejo municipal para su aprobación. En el informe se determinaron tres zonas para la posible disposición, entre esas el Polígono 100, en donde funcionan los nuevos sitios de disposición de basuras, en plena zona de amortiguación de la ciénaga.

Óscar Sampayo, politólogo de la Universidad de Antioquia e integrante de la Corporación Yariguíes, recuerda que Entorno Verde también hizo estudios para Ecopetrol, cuando el Ministerio de Medio Ambiente le pidió a la estatal petrolera que cambiara el sitio donde deposita los residuos de la explotación en Barrancabermeja. Este operaba dentro del bloque de la Cira Infantas, en el corregimiento El Centro. La solicitud de este cambio obedeció a que se proyectaba la modificación del plan de manejo ambiental integral de Mares —PMAI de Mares—, un requisito necesario para poder emplear nueva tecnología en la extracción de petróleo.

La vereda Patio Bonito ha sido el lugar más perjudicado con el funcionamiento de los rellenos sanitarios. El basurero de Anchicayá quedó a menos de doscientos metros de una escuela y dos fuentes de agua (las quebradas Vizcaína y El Zarzal), que son indispensables para la pesca. Según Sampayo,

estas condiciones son irregulares porque la legislación exige una distancia de al menos quinientos metros.

Cuando en marzo del 2013 la CAS le entregó la licencia al grupo RSTI y este entró a operarla a través de la empresa Rediba, los ambientalistas y la comunidad llevaron el caso ante las instancias judiciales, donde alegaron la vulneración de intereses y derechos colectivos relativos al goce de un ambiente sano, y entablaron una acción popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la CAS y Rediba. El 12 de julio del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de los demandantes, y la licencia de funcionamiento quedó suspendida.

En el 2019, los representantes legales de Anchicayá pidieron al alto tribunal que se levantara la medida cautelar, lo cual fue rechazado por las comunidades, las organizaciones y el Concejo de Barrancabermeja. A la fecha, julio del 2022, la decisión se mantiene en firme. Además de conocerse la violación de derechos humanos de comunidades vulnerables y las afectaciones al medioambiente, en el proceso jurídico se han ventilado otras irregularidades. La Procuraduría General de la Nación abrió en el 2020 una investigación contra el exalcalde Elkin Bueno Altahona, cuya administración recibió el estudio de la empresa Entorno Verde, financiado por la OXY, para la apertura del basurero Anchicayá.

El exmandatario y cuatro funcionarios de aquel entonces, entre ellos Jorge Norberto Ferreira Ballesteros, exgerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja, deberán responder por las presuntas irregularidades en un contrato de 3.800 millones de pesos, con el que se buscaba la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados.

Otra ha sido la suerte del basurero de Yerbabuena. La licencia para el funcionamiento de este relleno sanitario tam-

bién se solicitó con los estudios que la empresa Entorno Verde hizo en el 2009. Un año después el cuestionado empresario de las basuras Reinaldo Bohórquez[1] compró el terreno de Yerbabuena, ubicado dentro del DRMI de la ciénaga San Silvestre. Finalmente, Rediba recibió los permisos en julio del 2014, y desde el 2015 tiene a su cargo la operación.

Óscar Sampayo todavía se pregunta cómo autorizaron la construcción de los basureros si, según se conoce a través de normas y estudios, la concentración de acuíferos como los de la ciénaga San Silvestre son zonas de recarga hídrica para el Magdalena Medio. El politólogo Óscar Sampayo y el médico pediatra Yesid Blanco han hecho un seguimiento de lo que ha ocurrido desde que se autorizó el relleno sanitario de Yerbabuena y de la manera en que ha sido administrado por Rediba y la operación de la multinacional Veolia, encargada de la recolección en Barrancabermeja, Aguachica y Bucaramanga.

En sus registros se encuentran desde la mortandad de peces, los nacimientos de niños con malformaciones, las afecciones en la piel y las vías respiratorias, y la mala calidad del agua que consume la comunidad campesina. También han dado a conocer que en el negocio de las basuras participan clanes políticos de la región y empresarios cuestionados por sus nexos con grupos paramilitares.

Como lo hicieron con la apertura del relleno sanitario Anchicayá, la Corporación Yariguíes y la comunidad interpusieron acciones legales para que se le suspendiera la licencia a Yerbabuena, pero la Corte Constitucional declaró improcedentes dos acciones de tutela que se presentaron en el 2016, alegando en

1 El jefe paramilitar *Ernesto Báez* ha dicho en varias ocasiones que Reinaldo Bohórquez se acercó al grupo armado que comandaba para que fueran socios en los negocios de las basuras (ver "Ernesto Báez revela más relaciones de las AUC con políticos de Santander", del 23 de julio del 2012, en *Caracol Radio*).

la sentencia T-227 del 2017 que, si bien la operación del relleno de Rediba "expuso a la población a sustancias contaminantes [...], también se han adelantado medidas para corregir la operación y el cumplimiento de la licencia ambiental".

El hábitat del jaguar o *Panthera onca* también era una preocupación para las organizaciones y las comunidades. Las zonas boscosas que bordean las quebradas Vizcaína y El Zarzal, en Patio Bonito, integran el corredor trazado desde el norte de Argentina hasta México, para asegurar la conservación de la especie. El basurero, como señalan los líderes de la Corporación Yariguíes, contamina el ecosistema del jaguar y afecta su cadena alimenticia y su reproducción.

Nada de esto lo tuvo en cuenta la Corte Constitucional. Tampoco importó que, en marzo del 2015, el mismo año en el que Anchicayá y Yerbabuena entraron en operación, el entonces ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, y la ONG internacional Fundación Panthera, bajo la dirección de Alan Rabinowitz, firmaran un convenio de cooperación para ratificar la entrada de Colombia al corredor del jaguar, junto a otros trece países.

Además, no se tuvieron en cuenta las pruebas que el pediatra Yesid Blanco aportó al proceso adelantado en la Corte Constitucional: una serie de estudios en los que se evidenció la elevación de mercurio y vanadio en la ciénega San Silvestre, así como la muerte de tortugas, nutrias y manatíes, y el nacimiento de niños y perros con anencefalia, es decir, sin partes del encéfalo y el cráneo. De acuerdo con el pediatra, esta es una condición directamente relacionada con la exposición a un medioambiente contaminado.

—En ese momento detectamos a 23 niños con la enfermedad de Job o síndrome de hiperinmunoglobulina, unas úlceras en la piel en las que la exposición a la contaminación del

medioambiente tiene mucho que ver. Lo dimos a conocer a *Noticias Uno* en el 2017 y fue un escándalo nacional. Pero nada pasó.

Reconocer los errores

El politólogo Óscar Sampayo y el pediatra Yesid Blanco Calvete reconocieron que como organización también fallaron, ya que la lucha emprendida contra el licenciamiento y la entrada en operación de ambos basureros estuvo antecedida por la alianza con un personaje que, según afirman, puso en riesgo el nombre de la organización, aumentó las amenazas en contra del politólogo y llevó al exilio al médico.

Se trata del político Darío Echeverri Serrano, del Partido Liberal, que en enero del 2016 se posesionó como alcalde de Barrancabermeja, después de hacer campaña de la mano de grupos ambientalistas. El mal trago sirvió, como lo recordó Óscar, para unirse y participar en la revocatoria del mandato de Echeverri.

—Él llegó poniéndose su camisa de ambientalista, nos acompañó a hacer bloqueos y nos paramos en la carretera un par de veces a marchar. Pero la política es así aquí, en Santander, en Colombia. ¡Es tremenda! De lo que nos enteramos tres años después fue que llegó al poder porque el empresario de las basuras, Reinaldo Bohórquez, invirtió dinero en su campaña. Al llegar a la alcaldía cambió su postura con nosotros; los compromisos que había establecido, los pactos por el cuidado de la naturaleza y del agua los incumplió. Fue entonces cuando empezamos a actuar en el proceso de su revocatoria.

Pero la revocatoria que se realizó el 2 de junio del 2017 no prosperó. No se alcanzó el umbral mínimo de votos válidos para destituirlo y, por lo tanto, continúo en el cargo. Un

año después, como parte de una investigación que se le abrió por constreñimiento al electorado durante esa votación atípica, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones —CTI— de la Fiscalía General de la Nación. Al alcalde Echeverri le dieron el beneficio de casa por cárcel mientras el ente judicial hacía la investigación. Yesid Blanco señaló que en ese momento el político emprendió una campaña de estigmatización contra la Corporación Yariguíes y sus integrantes. Echeverri los declaró "objetivo militar".

—Me empezaron a demandar por fraude. Fue una campaña de desprestigio en la que involucraba mi capacidad como pediatra. Cada niño que se moría en la Clínica Magdalena, donde trabajaba como director de la Unidad de Cuidados Intensivos, era por mi culpa, y todo lo daban a conocer por redes sociales. También nos hicieron seguimiento. No podía estar solo y la Corporación Yariguíes me dio todo el apoyo. La persecución fue horrible. Me encontré con pacientes a los que les ofrecían hasta cinco millones de pesos para que firmaran un poder y así demandarme por mala práctica médica. Decidí dejar la clínica contra mi voluntad y me fui a trabajar a la Policlínica de Ecopetrol, donde me acosaron sindicalistas de la Unión Sindical Obrera —USO—, cercanos a Darío Echeverri, hasta que me llevaron al Tribunal de Ética Médica, que aún no me ha dado respuesta sobre mi proceso.

Óscar Sampayo y Yesid Blanco coincidieron en que todo lo que puede llegar a convertirse en una prueba en contra de las empresas multinacionales requiere de estudios e investigaciones que, expresó, "solo ellos pueden pagar", pues las organizaciones y las comunidades no cuentan con el dinero para hacerlo, y el Estado no los apoya en esos procesos. Y, cuando por fin reciben ayuda y son escuchados, se convierten en blan-

co de bandas criminales o grupos armados que también tienen intereses en los proyectos extractivos, aseguró el pediatra.

Frente a este capítulo en la historia de la Corporación Yariguíes, Óscar Sampayo y Yesid Blanco solo han pasado la página para seguir escribiendo la memoria del movimiento ambientalista, por medio de sus acciones con las comunidades afectadas. Para ambos, hacer pedagogía significa hacer presencia en los lugares donde el Gobierno colombiano les abre la puerta a las multinacionales, y dar acompañamiento a las nuevas organizaciones que se han gestado.

En Puerto Wilches, Santander, por ejemplo, apoyan al Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, AguaWil, que está compuesto mayoritariamente por jóvenes del municipio que han sido amenazados por motivar las manifestaciones en contra de lo que técnicamente se conoce como los proyectos piloto de investigación integral (PPII) en yacimientos no convencionales, con la utilización de la técnica de "fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal", conocido como *fracking*. En esa zona, la multinacional ExxonMobil busca realizar el segundo piloto de exploración con esta técnica, denominado Platero, que estaría en manos de Ecopetrol.

Seguir un legado

Para 1935, las huelgas en la industria petrolera avivaron el movimiento social y laboral en Barrancabermeja. A la par de las decisiones que tomaba el gobierno de Alfonso López Pumarejo ante la necesidad de calmar los ánimos de los marchantes y de frenar el avance de sindicatos como el de la USO, las manifestaciones estallaban y salían a las calles miles de trabajadores que vestían de blanco, que organizaban ollas comunitarias y escribían en semanarios clandestinos las memorias

de sus reuniones. Cambiar de banco cada cierto tiempo era una de las recomendaciones que daban los sindicalistas a los trabajadores, frente al temor de muchos de no recibir el salario. La Troco era una de las empresas que amenazaba con esa práctica como forma de presión durante los paros.

El músico, deportista y trabajador de Ecopetrol Arnulfo López Ortiz recuerda estas y otras historias en su libro *Las anécdotas de Arnulfo sobre Barrancabermeja*. En diciembre de ese año, por ejemplo, hubo una huelga que se extendió durante una semana, y uno de sus líderes fue un hombre llamado Gilberto Vieira, que años más tarde haría carrera en el Partido Comunista de Colombia. En ese momento las autoridades y las multinacionales pusieron la lupa en estos liderazgos, y empezaron a estigmatizarlos y a despedirlos. Pero la lucha sindical tenía un aliado, la comunidad: las esposas de algunos de los trabajadores de la empresa petrolera, hermanos y hasta padres los acompañaban en la lucha y, de paso, preparaban exquisitos platos típicos a base de pescados, que eran servidos en hojas de bijao antes de cerrar las jornadas de protesta.

Se podría decir que para los años setenta, década en la que algunos investigadores, como Mauricio Archila Neira, tratan de ubicar el nacimiento de los movimientos sociales a favor del medioambiente, el empoderamiento de las comunidades tenía ingredientes adicionales: la participación de actores políticos y de grupos ecológicos de universidades públicas de Pereira, Tolima y el Valle del Cauca.

En 1979, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se dio una de las primeras grandes movilizaciones en contra de proyectos de modernización que atentaban contra el ambiente en el departamento del Magdalena. El gobierno propuso rendirle un homenaje al libertador Simón Bolívar, con la construcción de una ciudadela industrial en la isla de Salamanca, e

intervenir la reserva de manglar, lo que tuvo una repercusión nacional a raíz de las denuncias que publicó la revista *Alternativa*, dirigida por Daniel Samper Pizano. Apenas en 1998 este lugar fue declarado de importancia mundial por parte de la Unesco, y hoy, como otras reservas del país, sigue bajo protección ante amenazas como el turismo descontrolado y la contaminación.

Las organizaciones ambientales de Barrancabermeja se han apropiado de esta historia para escribir una nueva y que las futuras generaciones continúen con el legado. La más reciente ocurre en el contexto del negocio de las basuras, los actos de corrupción, los políticos investigados y señalados por grupos paramilitares, y una comunidad que mide a todos estos actores en los estrados judiciales, los medios de comunicación y las redes sociales.

Llenarse de paciencia

No fue fácil encontrar a Óscar Sampayo. En el 2021 seguía su cuenta de Twitter, donde alertaba sobre las amenazas que constantemente recibía por medio de panfletos que circulaban por grupos de WhatsApp y redes sociales; en ese momento tuvimos contacto. Los medios de comunicación de la región y del país le abrieron los micrófonos para que denunciara la desaparición de su padre, Miguel Sampayo, un hecho que parecía estar ligado al liderazgo ambiental que Óscar ejerce en el Magdalena Medio.

Por las amenazas tuvo que salir de Barrancabermeja y esconderse de una serie de enemigos que un día se hacen llamar Águilas Negras y al otro firman con el alias de algún paramilitar. No sabe con certeza quién lo persigue, pero por el pasado de violencias de la región entiende que las amenazas pueden pasar del papel a las acciones.

Cuando finalmente aceptó hablar por videollamada desde un lugar que no quiso dar a conocer, Óscar Sampayo aclaró que su único interés y el de la Corporación Yariguíes es que el mundo conozca que, pese a las intimidaciones y agresiones, sus integrantes siguen firmes ante lo que pueda ocurrir con los basureros y la explotación petrolera en la región.

En esa primera conversación me explicó todo lo relacionado con los basureros de Yerbabuena y Anchicayá. El sábado 5 de febrero del 2022 Óscar y yo nos encontramos en la reunión informativa que convocaron la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA— y Ecopetrol, en la que se presentó a la comunidad el proyecto de modificación del PMAI de Mares, un instrumento que por ley deben elaborar las empresas para llevar a cabo las actividades de explotación de hidrocarburos de manera armónica con el contexto social y ambiental.

Con las modificaciones al PMAI de Mares la petrolera traza la ruta para extraer petróleo hasta el 2036 y ampliar operaciones en nuevas zonas de los tres bloques petroleros: Llanito, Lizama y El Centro, conformado por "130 unidades territoriales, entre corregimientos, veredas y sus sectores", según informaron en una cartilla de socialización.

El lugar de la audiencia fue el Club Internacional del corregimiento El Centro, sitio delimitado como el bloque petrolero más grande de la región, que concentra el 49 % de la zona explotada por Ecopetrol en Barrancabermeja. A la socialización se conectaron comunidades de Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y Simacota, a través de una transmisión simultánea que la ANLA condujo desde el puerto petrolero, y que los líderes de esas comunidades siguieron mediante pantallas ubicadas en los salones comunales.

Seguí atenta las recomendaciones de Óscar: "Llénense de paciencia y escuchen. La clave para resistir es entender que empresas como Ecopetrol son más fuertes que el mismo Estado". Las preguntas de los asistentes a Ecopetrol y la ANLA apuntaban a lo que pasará con las cuencas hídricas, las reservas naturales protegidas, la apertura o el acondicionamiento de vías para el uso tanto de las empresas como de los habitantes del sector, e incluso, a la manera en que el PMAI de Mares va a impactar a las nuevas generaciones con respecto a temas como la educación y la seguridad alimentaria y de la vida.

En la pantalla mostraron mapas donde se resaltaban los bloques petroleros y las cuencas hídricas, y unos videos pedagógicos que, al parecer, no evidenciaban todos los lugares que tendrán impactos de los nuevos proyectos de Ecopetrol. La comprensión de las explicaciones era difícil, entre otras cosas, por la terminología técnica.

Los anfitriones de la socialización dieron café oscuro hecho en una greca como la que usan los trabajadores en las plantas petroleras y un almuerzo en cajita con el tradicional plato que se sirve en los casinos de la empresa. Óscar Sampayo pasaba por alto todos estos detalles, estaba concentrado en su computador. Me explicó que gracias a cien accionantes de la Corporación Yariguíes y la Corporación San Silvestre Green se citó a una audiencia pública para el 19 de febrero del 2022, en la que la ANLA y Ecopetrol tenían que dar información detallada a los habitantes de los municipios que son afectados por el proyecto.

Los organizadores entregaron pequeñas bolsas con tapabocas, alcohol y gel; algunos asistentes las recibieron con cordialidad y otros los dejaron en las sillas. También repartieron una cartilla a color e ilustrada, que resumía el proyecto con la

misma información limitada que se presentó en las diapositivas. "¡Qué chiste!", expresó Óscar al mirarla en detalle.

—¿Se da cuenta de que la gente no pide nada del otro mundo? Es lo mínimo que Ecopetrol puede hacer por ellos porque va a invadir su territorio y a cambiar sus costumbres. Con el PMAI de Mares, la empresa proyecta la producción de hidrocarburos en el valle del Magdalena Medio hasta el 2036 y la comunidad tiene muchas dudas.

Por un momento, el diputado Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez se robó la atención y los aplausos al reclamarles a la ANLA y a Ecopetrol por no invitar a la Asamblea Departamental a la reunión informativa y por recordar lo que llamó el "ecocidio" en la construcción de la represa de Hidrosogamoso y la poca atención que ha recibido el páramo de Santurbán ante lo que sería la explotación minera.

Alcides Maldonado Gómez, personero municipal de El Carmen, aprovechó para felicitar al Ejército por el patrullaje en la zona: "Ya sabemos que no solo se presentan en elecciones". Propuso conversar sobre un tema importante, teniendo en cuenta que en los estudios ambientales que se adelantan para el PMAI de Mares no se puede desconocer el contexto social: "Se nos presenta la problemática del microtráfico. Esto ya es un cáncer en las comunidades campesinas, y si ustedes nos hablan de proyectos de alto impacto, a los primeros que deben impactar es a nosotros".

Me despedí de Óscar Sampayo el sábado 5 de febrero a las cinco de la tarde. Regresé a Bucaramanga, no sin antes hacer un recorrido por un lugar que le recuerda a todo barranqueño que el puerto petrolero sí tuvo agua potable y que aún se consigue. Solo que no llega a las casas por los grifos. Hay que ir a buscarla: en Barrancabermeja es tradición que cuando el sol apenas despunta, y también minutos antes de ocultarse,

los pobladores bajen hasta el antiguo colegio de la USO, hagan fila y llenen tarros, canecas, ollas, *calambucos* o *pimpinas* con el agua que sale de una llave que desde los años setenta permanece para el uso público.

Recordé cuando mi abuelo Rogelio Monsalve Quecho, un campesino de Barichara y vigilante del Banco Ganadero, de genio templado y sonrisa fresca, amenazaba a mi tío Luis Alfonso con tener que ir a buscar "el agua a la USO" si desobedecía sus deberes. Para un joven de los años ochenta, que se resistía a pegarse a la malla y emplearse en la empresa donde trabajaban sus padres, hermanos y vecinos, y que solo quería ser motociclista, este era el peor castigo.

Luis Alfonso debía salir y buscar el agua, una labor que, por cierto, casi siempre era de jóvenes y viejos pobres, quienes, con la ayuda de una *zorra*, lo que ahora se conoce como un vehículo de tracción animal, y a cambio de unas cuantas monedas, llevaban el líquido hasta las puertas de las casas de los petroleros.

Esa llave, la que se ubica en la entrada de la refinería y en el acceso que tiene la empresa en el barrio 25 de Agosto, fue la única que dejaron instalada después del desmonte de la planta de procesamiento de agua. La que se construyó para llevar el suministro al barrio El Rosario, campamento donde habitaban los *gringos* que construyeron las plantas. Un total de siete llaves como las del colegio de la USO existieron en el puerto petrolero; proveían el agua a los trabajadores nacionales que poblaban el Campamento Colombia, en terrenos de lo que hoy es la plaza de mercado en el sector comercial.

Hace un tiempo hice una historia sobre el agua en Barrancabermeja. Recordé que Ecopetrol me habló al respecto y guardé esa información. Según la Empresa Colombiana de Petróleos, ir a buscar el agua a esas llaves demuestra la con-

fianza que la población deposita en ellos. Y, entonces, mientras observaba a los que se acercaban allí esa tarde de febrero, recordé a las comunidades que participaron en la reunión informativa de la modificación del PMAI de Mares. Pensé en sus dudas, resueltas a medias, en su acceso a un agua contaminada por los basureros, en las enfermedades que les produce, en la contaminación de la ciénaga San Silvestre, en la mortandad de peces, nutrias y manatíes. El panorama es oscuro para las comunidades y la ciénaga, por la intransigencia de las empresas. Pero ahí todavía están las voces de las comunidades y el apoyo de la Corporación Yariguíes, que en estos años, a pesar de las amenazas, han sido los vigías de la ciénaga.

Referencias

Caracol Radio (23 de julio de 2012). "Ernesto Báez revela más relaciones de las AUC con políticos de Santander". https://caracol.com.co/radio/2012/07/23/regional/1343045940_727348.html.

Corte Constitucional (2017). Sentencia T-227 de 2017. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-227-17.htm.

López, A. (2011). *Las anécdotas de Arnulfo sobre Barrancabermeja*. Barrancabermeja: Corporación Memoria y Patrimonio.

Velásquez, A. (2011). *Los Yariguíes: resistencia y exterminio*. Barrancabermeja: Corporación Memoria y Patrimonio.

Una catarsis que cure las heridas

Por Lina Robles Luján

Lina Robles Luján (Barranquilla, 1977). Comunicadora social - periodista de la Universidad del Norte. Actualmente es corresponsal de *Publimetro* en el Atlántico. Ha trabajado como reportera en *El Heraldo* y en Señal Colombia. Fue docente de redacción creativa de la Universidad Autónoma del Caribe y se desempeñó como jefa de comunicaciones de la fundación La Cueva de Barranquilla.

Red Sur Barranquilla promueve el empoderamiento, el liderazgo y la participación política de las y los jóvenes en el departamento del Atlántico a través de un dispositivo de arte público y teatral: el *Monumento por la dignidad y la memoria* de las víctimas del conflicto armado.

Aquella tarde de noviembre del 2010, cuando los actores salieron a escena, la Plaza de la Aduana, en el centro histórico de Cartagena, capital de Bolívar, ardía de calor. Como tantas otras veces, los integrantes del colectivo Red Sur Barranquilla tenían todo dispuesto para comenzar "La gran caminata", un segmento de la obra e iniciativa *Monumento por la dignidad y la memoria*, en el que un grupo de actores representa el desplazamiento de campesinos a causa de las balas y los explosivos detonados por los grupos armados en Colombia. Pero, a diferencia de otros días, la tensión se apoderó de los actores y de la audiencia cuando en medio de una multitud de rostros oscuros, sin forma, alguien gritó: "¡Les vamos a meter una bomba!".

Aunque no era la primera vez que diversos agresores estigmatizaban o señalaban la caminata, pues ya en el pasado algunas personas les habían gritado que practicaban brujería, esta vez fue distinto, recordó Stefany Paola Mosquera Salcedo, vicepresidenta y lideresa de Red Sur Barranquilla; porque el miedo se apoderó de los integrantes del colectivo que, ante aquella amenaza, decidieron dispersarse sin terminar la puesta en escena. El miedo había ganado de nuevo.

El *Monumento por la dignidad y la memoria* es un dispositivo de arte, en tanto combina artefactos simbólicos y puestas en escena con las que pueden interactuar los espectadores, que tiene un carácter público, comunitario e itinerante. De esta manera, Red Sur Barranquilla interviene espacios públicos buscando visibilizar las violaciones a los derechos humanos y

aportar a la construcción de memoria social de lo que ha dejado el conflicto armado. Sus representaciones tienen la misión de preservar el significado de los hechos de violencia que han ocurrido en el Caribe colombiano y de generar reflexiones en la audiencia que observa esta puesta en escena, que ya se ha presentado en diversos escenarios a lo largo y ancho del país. "Por fortuna la mayoría de las veces, las reacciones son positivas y eso es lo bonito de poder representar este *Monumento* y de que más y más personas quieran integrarse, participar y contar su historia", destacó Stefany.

Después de la amarga experiencia en Cartagena, los integrantes de Red Sur Barranquilla pensaron en otras formas para protegerse y así poder escenificar la obra con tranquilidad. Desde entonces, por temas de seguridad, el montaje siempre permanece con una barrera de integrantes que están observando alrededor, atentos a cualquier amenaza. Porque, "de cierta manera, representar el *Monumento* siempre es un riesgo y un desafío para defender los derechos en nuestro país, porque vemos el miedo en el público", manifestó Libardo Diago Velásquez, uno de los primeros líderes de este colectivo.

Meses antes de lo sucedido en Cartagena, los integrantes de Red Sur Barranquilla habían vivido otra situación de amenaza, en aquella ocasión en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. En ese montaje, en el 2011, intervinieron unos actores que portaban overoles negros y lucían velos con una decoración en forma de jaula encima de sus cabezas. En la obra, a estos personajes los llaman *focos* y, aunque no señalan a ningún actor armado en particular, representan los diversos grupos al margen de la ley. De repente, mientras avanzaba la puesta en escena en uno de los espacios cercanos a la Plaza de Majagual, los actores se encontraron con un grupo de policías, y uno de los agentes lanzó una expresión sarcástica:

"Deberían prestarnos esos overoles para cuando entramos a esos barrios". Pese a esta cruda provocación, proveniente de las fuerzas del orden legal, el *Monumento* pudo presentarse en su totalidad frente a una audiencia impávida, conformada por hombres y mujeres que vieron el montaje en silencio, la mayoría sin expresión y otros con un dejo de rechazo que podría traducirse como indiferencia.

Sobre esta intimidación ocurrida en Sincelejo, Libardo analiza que también aquellos que son victimarios desafortunadamente se ven reflejados en el *Monumento* porque el arte y lo simbólico posibilitan eso: "Esto fue bastante fuerte y duro para nosotros; evidenciar cómo las víctimas y también los victimarios se reconocen en el *Monumento*".

El ceño de Libardo se frunce cuando expresa que es consciente de que esta puesta en escena no solo remueve sentimientos de dolor, sino también de miedo, por lo que "no estamos exentos a que nos digan: cómo carajos se atreven a mostrar esto en este sitio, sabiendo que aquí pasó esto y que es posible que esté aquí alguien que no quiere que eso se sepa. Pero la colectividad nos ha permitido permanecer", afirmó.

En la mayoría de los montajes, los integrantes de Red Sur Barranquilla son abordados por todo tipo de personas, entre dolientes y víctimas, a quienes se les encarga escuchar y dar consuelo. La victimización que han vivido algunas de estas personas incluso permanece en el anonimato, porque muchas les confiesan a los integrantes del colectivo que no han denunciado su caso ante las autoridades y ni siquiera tienen un documento legal que les permita confirmar la desaparición de algún ser querido. Son voces que han sido silenciadas por el miedo y la violencia, pero que encuentran en el *Monumento* un lugar para rendir homenaje a las víctimas y vivir el duelo.

Presencias, la esencia del *Monumento*

La utilería de *Monumento por la vida, la dignidad y la memoria* está compuesta por una bandera de Colombia de trescientos metros de largo y por trescientas lápidas de madera con sus respectivas cruces. Es una puesta en escena itinerante que viaja por Cundinamarca y el Caribe colombiano. La obra toma elementos del arte para representar la violación a los derechos humanos en medio del conflicto armado, como un ejercicio de memoria.

Red Sur Barranquilla nació en el año 2001, cuando hizo la primera puesta en escena del *Monumento,* que se llevó a cabo en uno de los sitios más emblemáticos de Barranquilla: la Plaza de la Paz, por ser el corazón de la ciudad y uno de los espacios al aire libre más grandes de la urbe. En ese momento "las lápidas visibilizan a las víctimas de 'falsos positivos', pero después el espectro se fue abriendo hacia víctimas de otros crímenes sociales. En estas lápidas podemos encontrar nombres de víctimas reales. Son trescientas, pero estas son una representación realmente mínima de todas las víctimas del país", recalcó Libardo.

Esa primera intervención estuvo conformada por ladrillos de color blanco, los cuales tenían lápidas pintadas en uno de sus lados, con el mismo estilo gráfico de los carteles funerarios. En ellas se identificaba el nombre de la víctima, el hecho de violencia que sufrió y el lugar y la fecha de ocurrencia del mismo. La mayoría de los nombres fueron aportados por víctimas que le contaron su historia al colectivo.

El montaje también tenía "tropezones", que son figuras humanas elaboradas en madera, con un tamaño de un metro con setenta centímetros, en las que se ponen fotografías de las víctimas: "A veces me da miedo entrar allí donde están, por-

que nos tropezamos con ellos y se ven tan reales que muchas veces he llorado cuando representamos el *Monumento,* porque son miles de personas a las que les arrebataron a sus familias y ya no están allí", reconoció Stefany, reflejando temor en su expresión y en sus manos temblorosas.

En el 2008 Red Sur Barranquilla comenzó a hacer ajustes en ese montaje y los ladrillos empezaron a transformarse en lápidas de madera, para posibilitar una mayor movilidad de la obra. Además, el colectivo incluyó, en un principio, una bandera de Colombia de quince metros para tapizar parte del suelo; este símbolo creció con el paso de los años, hasta llegar a los trescientos metros. "El uso de esta bandera ha sido criticado. Nos preguntan por qué usamos un símbolo patrio y lo ubicamos en el piso. De alguna manera es nuestra forma de ver el montaje, y el arte nos lo permite. Vemos de manera crítica ese símbolo y lo que ha pasado por defender esa bandera en el país", aseguró Libardo.

Junto a esta instalación se escenifica un *performance* —acción performática e intencional—, representado por jóvenes que previamente han adquirido experiencia teatral, con énfasis en derechos humanos, en las aulas y los procesos de formación de Red Sur Barranquilla. Han sido estos jóvenes, junto con la comunidad, quienes han participado en la construcción de la narrativa de la obra y quienes han protagonizado los relatos que la conforman. Antes de la pandemia podían participar alrededor de cien jóvenes en escena, proceso que retomaron en el 2022 para comenzar un nuevo ciclo.

Hasta ahora, ni Libardo ni Stefany han solicitado permiso a las autoridades para escenificar el *Monumento,* porque consideran que la obra debe ser libre para poderse representar. Además, porque asumen que el espacio es público y sirve como lugar de comunicación para las iniciativas comunitarias.

Los momentos del performance

El performance está compuesto por tres escenas: en una los actores representan el reclutamiento forzado; en otra, las líneas imaginarias y el control del territorio que imponen los grupos armados ilegales; y en la tercera, el horror de las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados "falsos positivos". Estos relatos cortos son construidos a partir de sus experiencias vitales o de aquellas de personas cercanas o conocidas, y están acompañados de estribillos de canciones, palabras o frases repetitivas que se lanzan en la escena.

Una caminata bajo el sol

El primer momento fue denominado "Pasos por la dignidad". Es una caminata que realizan los hombres y las mujeres que participan en la obra. Van cubiertos con un chal o con velos negros y recorren un trayecto determinado previamente hasta llegar al sitio donde se congregan los actores de la obra. Generalmente, ese punto de encuentro es un espacio abierto —una plaza— en el que convergen hacia un escenario que aguarda con lápidas de madera y varias sombrillas de colores negro y blanco. Allí se lee la frase palpitante: NUNCA MÁS. Esta escena representa el tránsito vivido por familias que, en medio del dolor, han tenido que desplazarse, huir de su hogar, por cuenta del conflicto.

El duelo

Al llegar a la plaza, cada uno va instalando y dejando su lápida. A ese momento lo denominan "El duelo". Es un segmento de contemplación en el que las mujeres protagonizan el dolor, por ser las más afectadas en el conflicto armado. Según el lugar donde se escenifique el *Monumento,* se recrean testimonios o proclamas que han sido construidas y recreadas colectiva-

mente desde el 2016. Son estos testimonios los que mantienen vivo el montaje, que se enriquece con nuevos relatos, muchos de ellos aportados durante la instalación.

Mientras todo esto ocurre, un grupo de personas llega caminando. Usan sombrillas negras que simbolizan a las familias de las víctimas. Las mujeres lucen velos que les ocultan sus rostros y que simbolizan "el dolor de las mujeres, de las madres a las que les desaparecieron a sus hijos, a quienes no volvieron a ver", explicó Libardo.

Cada vez que se presenta la obra, Libardo, Stefany y los demás integrantes de Red Sur Barranquilla ubican estratégicamente varias lápidas que no están marcadas, con el fin de generar interacción con el público, buscando que otras víctimas que no han podido hacer catarsis se acerquen al *Monumento* y puedan escribir con marcadores, en alguna de esas lápidas, el nombre de aquel ser querido que fue asesinado o desaparecido, la fecha, el hecho victimizante y el lugar donde ocurrió. "Muchos nombres de las víctimas que han escrito allí incluso no han sido registrados en el Registro Único de Víctimas y por eso es importante para nosotros que sean visibilizados, para que estos hechos no vuelvan a pasar, que no se repitan, porque si conocemos nuestra historia, no habrá escenario para que se repita y eso es lo que más deseamos con este monumento", manifestó Stefany.

Sanar heridas

Finalmente, en la plaza o en el espacio público escogido, la obra culmina con el segmento dedicado a "la resiliencia". Los espectadores pueden apreciar los momentos de tránsito y de dolor que viven las personas afectadas por la violencia, y reconocer que en Colombia existe un conflicto armado que ha dejado víctimas. En la puesta en escena, esas víctimas aparecen represen-

tadas como mariposas, luciendo un vestuario colorido. Así, el *Monumento* logra su propósito de tocar al público para sensibilizar, generar una reflexión y hacer catarsis. La escena final termina en un abrazo colectivo de los actores acompañado con la frase de cierre NUNCA MÁS, porque "si bien el conflicto nos ha tocado, también existe esa posibilidad de poder reconocerlo y así transformarnos para que no se siga repitiendo", expresó Stefany. Horas después del cierre de la puesta en escena, el montaje se mantiene exhibido de forma efímera de tres a cinco horas.

Un refugio

Para llegar a la casa de Red Sur Barranquilla hay que entrar por una vía destapada en el barrio Lipaya. De acuerdo con un estudio publicado por el Banco de la República en el 2011, este sector es uno de los más pobres de Barranquilla. Para ese año, reveló el documento, el 78 % de la población se encontraba en estado de pobreza. En esta zona de la ciudad, conformada por los barrios Me Quejo, La Manga, Nueva Colombia, La Paz, Los Olivos, El Pueblito, Sourdis, Siete de Agosto, Las Malvinas, El Bosque y Santo Domingo, entre otros, la mayoría de los habitantes se dedica al trabajo informal, y las desigualdades sociales están agudizadas por otros conflictos que repercuten en la violencia. Es por ello que muchos de los jóvenes de estos barrios encuentran en Red Sur Barranquilla un lugar a donde llegar y un colectivo al cual pertenecer.

La oficina de Red Sur Barranquilla queda en el segundo piso de la Fundación Casa de la Mujer, uno de los pocos bastiones dedicados al trabajo social en el barrio Lipaya, un territorio en forma de triángulo situado en el suroccidente de Barranquilla. La casa está escondida en la parte de atrás de una sede del SENA, frente a un terreno baldío que hace las veces de parque.

En el primer piso hay un salón comunal y un patio al aire libre, poblado de plantas florales y macetas de colores vibrantes.

En la oficina casi siempre se encuentra Stefany Mosquera, vicepresidenta de Red Sur Barranquilla. Ella tiene 27 años y desde hace doce años desarrolla una labor de voluntariado en este colectivo. En esta sede, contó la lideresa, "confluimos diferentes tipos de organizaciones sociales de Barranquilla. Red Sur Barranquilla nace para promover el liderazgo y el empoderamiento de los y las jóvenes en el suroccidente de la ciudad desde la formación, la cultura y el arte".

En este proceso, en el aula del salón comunal de la Casa de la Mujer, cientos de jóvenes han recibido formación en temas de sociopolítica, con énfasis en la problemática social que vive el país y en derechos humanos. Después, son entrenados en artes escénicas y teatro. Muchos de ellos, reveló Libardo, "han sido víctimas del conflicto armado. También muchas de las personas que han participado en este *Monumento* han sido víctimas directa o indirectamente de la guerra en este país".

De actores a maestros

John Fredy Llanos comenzó el proceso en Red Sur Barranquilla en el 2015, cuando tenía veintitrés años. Este joven nació en el municipio de Baranoa, Atlántico, donde se dedicaba a actuar en montajes religiosos como la *Loa de los santos reyes magos*, una escenificación en vivo realizada cada mes de enero por la Iglesia católica.

En medio de esas inquietudes artísticas entró en contacto en el mundo del teatro con Stefany y Libardo. Así comenzó a verse influenciado por las corrientes del teatro de lo prohibido, el teatro efímero y el teatro comunitario en Barranquilla. "Desde ese momento me enamoré de la propuesta y hasta el

día de hoy", recordó John Fredy, quien describió que en los encuentros con el colectivo de Red Sur Barranquilla conoció a jóvenes artistas de todo tipo: del tatuaje, de la danza, de las artes plásticas, y a jóvenes que nunca se habían acercado al teatro, pero que entraron y se quedaron en el grupo.

"Conocí a los chicos del barrio Lipaya cuando nosotros hacíamos un proyecto que se llamó Más Cultura, Más Paz, en el que tratamos de hacer un encuentro con tres comunidades específicas, con las cuales elaboré mi proyecto de tesis; las comunidades de Baranoa, la comunidad del suroccidente de Barranquilla y las comunidades ribereñas, como La Luz, La Chinita y Soledad. En ese proceso hicimos un encuentro de jóvenes en Lipaya y ahí conocimos a todos los *pelaos*", relató John Fredy sobre su acercamiento a las comunidades impactadas por la labor de Red Sur Barranquilla.

Aunque en principio John Fredy pensaba estudiar nutrición, se decidió por la carrera de Arte Dramático en la Universidad del Atlántico, porque a los dos años de estar en Red Sur Barranquilla, en el 2017, tomó la decisión de seguir su pasión por el arte escénico como su proyecto de vida. En la actualidad está cursando los últimos semestres para obtener su título como Maestro en Arte Dramático.

"El *Monumento* dice muchas cosas y es una voz que se alza en protesta, porque también es una manifestación al decir: 'Miren, aquí estamos, están nuestros muertos, las víctimas de la guerra', y en los ojos de la gente vemos a veces el rechazo y también una identificación en aquellos que han vivido el conflicto en carne propia", expresó John Fredy.

Luis Fernando Ortiz Torres es otro de los jóvenes que ha acompañado el proceso. Él también recordó que se aproximó a Red Sur Barranquilla por los talleres que ofrecía el colectivo desde el proyecto de Más Cultura, Más Paz. Tenía solo quince

años cuando comenzó a participar, y así como John Fredy, a raíz de esta experiencia, se decidió a estudiar la carrera de Arte Dramático.

Luis Fernando recordó que un compañero que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes lo invitó a que hiciera parte del grupo en el 2012 y a que se integrara desde el barrio Ciudadela 20 de Julio a los jóvenes del barrio Lipaya. "Red Sur Barranquilla me ha aportado muchísimo en los talleres que me han dictado, tanto artísticos como políticos, sociales y culturales, y a nivel personal también en cómo comunicarme para crear otros talleres y seguir compartiendo experiencias con jóvenes y desde el arte. En mi relación con el papel que represento en el *Monumento* como actor realmente me sumerjo en el personaje ante la audiencia", dijo Luis Fernando, quien en la intervención artística representa a uno de los jóvenes que son reclutados forzadamente.

Así como a John Fredy, a Luis Fernando, participar en el *Monumento,* lo ha llevado a sentir esa intimidación al representar en el espacio público escenas que muchos desean borrar y simplemente eliminar, como si nunca hubieran pasado: "El tema de mostrar el *Monumento* es bastante delicado porque es casi que un acto performático, que uno toca en relación con el público y con las personas dolientes que comparten todo lo que se ve allí. A uno le da un poco de temor, porque uno no sabe la audiencia cómo lo va a recibir y uno siempre está a la expectativa".

En la actualidad, Luis Fernando está cursando el último semestre de Arte Dramático. Tanto él como John Fredy representan a una generación de jóvenes que terminaron dedicados al arte en Barranquilla, participando en compañías de teatro local, fruto del proceso artístico que emprendieron en Red Sur Barranquilla.

La violencia y la memoria, del campo a la ciudad

Red Sur Barranquilla nació en el 2001 durante un diplomado de formación en derechos humanos que ofrecía de manera gratuita la Asociación Pro-Desarrollo de Familia (Aprodefa), con el fin de crear redes de personas que pudieran tener una participación política en esta ciudad. Dentro de este proceso, uno de los primeros líderes de este colectivo, el sociólogo Libardo Diago Velásquez, trabajó junto a un grupo de jóvenes buscando abrir una biblioteca comunitaria en el barrio Lipaya y constituir una red de jóvenes del suroccidente de Barranquilla. A esta red se unieron, en diversos procesos de participación política local, otros grupos de emprendedores de memoria, de mujeres y de instituciones educativas, en lo que se conoció como la Constituyente por el Suroccidente.

En el 2001 este primer grupo de fundadores, conformado por Libardo y otros líderes de Barranquilla, partió a Bogotá, la capital del país, para crear alianzas con otra iniciativa a nivel nacional denominada Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz, que acompañaba diversos procesos de jóvenes en varios territorios de Colombia. Fue así como el colectivo empezó a construir lazos con quienes también venían trabajando en temas relacionados con el arte, los jóvenes, el conflicto, la memoria y la paz.

Tres años después, en el 2004, los integrantes de Red Sur Barranquilla asistieron en Bogotá a una puesta en escena del grupo teatral de la Fundación Cultural Rayuela, denominada *Monumento por la vida, la dignidad y la memoria*. Esta comenzó a escenificarse en Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Soacha y otros espacios de Cundinamarca. La propuesta surgió ante "la desaparición de jóvenes en estos sectores de Cundinamarca, en casos que ocurrieron entre el 2004 y el 2006, y a partir del 2008 empezamos a conocer como los mal llamados 'falsos po-

sitivos', pero que son realmente ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública", recordó Libardo.

A partir del 2006, luego de varios encuentros e intercambios con Rayuela, en medio de diversas puestas en escena itinerantes por parajes de Cundinamarca, los integrantes de Red Sur Barranquilla decidieron replicar esta experiencia en Barranquilla y en varios escenarios de la costa Caribe, conscientes de que en su región existían vacíos y silencios en el campo de la memoria. "Siempre se ha vendido esa idea de Barranquilla como el mejor vividero del mundo, de que la guerra estaba en otra parte del país, menos aquí, pero comenzamos a identificar entre nuestros amigos, familiares y allegados que, de alguna u otra forma, eran también víctimas del conflicto armado", explicó Stefany.

Red Sur Barranquilla se encargó de recopilar esas historias no contadas, a partir de su acercamiento con la comunidad que participaba en los montajes, en reuniones y grupos focales, para así recuperar la memoria de lo que había ocurrido en el territorio porque, como explicó Stefany, de alguna forma los padres y los mayores, para proteger a los más jóvenes y para resguardar su propia identidad, decidieron dejar esas historias atrás, en el monte, en las trochas, en sus lugares de origen en Bolívar, Córdoba y Magdalena.

No obstante, ese conflicto también se vino a las ciudades, representado en las fronteras invisibles (divisiones imaginarias del territorio impuestas a los ciudadanos por los actores armados) y el control territorial de grupos al margen de la ley relacionados con el microtráfico. Todos estos fenómenos respaldaron más el interés de Red Sur Barranquilla en trabajar por reivindicar los derechos humanos y el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derecho, para resignificarlos y para que así ellos pudieran ejercer mecanismos de partici-

pación e incidencia en sus comunidades, con el fin de transformar sus realidades.

En este contexto, poner en escena el *Monumento* en Barranquilla era una iniciativa que cada vez cobraba más sentido para los integrantes de Red Sur Barranquilla. Entre otras cosas, porque "en esos años comenzó a conocerse toda la problemática de los 'falsos positivos' en Barranquilla y en toda Colombia, y el *Monumento* se creó como un espacio para poder reivindicar los derechos de las víctimas, para poder visibilizar y denunciar lo que estaba pasando en ese momento histórico y lo que sigue pasando con las víctimas en el país", manifestó Libardo.

Libardo y Stefany ven el *Monumento* como una herramienta política para visibilizar el sentir de las víctimas y, como ellos lo expresan, poder "sacar esa verdad a la calle", para mostrar estos hechos, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento, buscando que no sean olvidados y que perduren en la memoria de la sociedad. "Muchas veces, la gente en las ciudades no atraviesa por ese tipo de situaciones, porque no las conocen. Necesitamos poder mostrar eso que está pasando en nuestro campo, qué es lo que les está pasando a nuestras campesinas y campesinos y a sus hijas e hijos. Por eso, contarle al público que muchas personas inocentes fueron desaparecidas, muertas y pasadas por guerrilleros dados de baja en combate es un proceso liberador", reflexionó Stefany.

Entre tanto, Libardo anotó que a través de los relacionamientos que ha mantenido con las víctimas que se acercan al montaje, él mismo se ha sentido tocado por el conflicto armado, particularmente a raíz de la amistad que construyó con la lideresa Martha Díaz, quien se convirtió en un símbolo de las madres que buscan justicia por los "falsos positivos" en el Atlántico. En el 2006 esta mujer perdió a su hijo Douglas

Alberto Tavera, quien fue presentado por el Ejército como un presunto integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, muerto en combate. "Con Martha hemos tenido un relacionamiento muy especial y ella me ha ayudado a sensibilizarme con su dolor a flor de piel, y el haber conocido a personas como ella, que quieren saber la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos, me mueve a continuar con el *Monumento* hacia el futuro", recalcó Libardo.

Lideresa y víctima: una dualidad llena de dolor

Alta, de piel trigueña, cabello largo, liso y de color café, y con ojos almendrados que brillan cada vez que habla de su trabajo con los jóvenes, así es Stefany. Sin embargo, su carisma alegre se empaña cuando habla de su familia, que fue fragmentada por la violencia. "Esta es una historia que muy pocos conocen de mi vida y que me ha motivado a luchar por los derechos humanos y por las mujeres y los niños y las niñas", reconoció.

Stefany es descendiente de una familia integrada por militares y policías residentes en Barranquilla. Su único tío, por parte de su papá, Julio César Mosquera Góngora, policía militar, en servicio en La Guajira, murió a manos de la guerrilla de las FARC en 1998. Como en muchos casos de víctimas del conflicto armado, existen diversas versiones de los hechos. Detrás de la muerte de este patrullero se tejieron muchas historias, y aún en la actualidad, sus familiares no saben con certeza cuál fue la verdadera.

De acuerdo con la versión oficial, el 18 de noviembre de 1998 un grupo de uniformados se desplazaba en una camioneta de la Policía Militar, en zona rural de La Guajira, cuando fueron atacados por integrantes de las FARC, quienes les habrían lanzado una granada, siendo el tío de Stefany el único

fallecido en el atentado. No obstante, otra versión señala que al tío de Stefany lo capturaron miembros de las FARC, quienes lo arrastraron por una calle de un pueblo junto con otros compañeros, y luego le propinaron varios disparos, "lo acribillaron en la mitad del pueblo", lamentó Stefany.

El horror no terminó allí, porque otros testigos contaron que al patrullero, aún agonizante, le lanzaron una granada, y que "de su cuerpo se desprendieron una pierna y un brazo", según le contó a Stefany la única hija de Julio César, que ha recopilado información de lo que pasó con su padre, a quien no tuvo la oportunidad de conocer en vida porque para el momento de los hechos ella aún estaba en el vientre de su madre.

"Recuerdo mucho ese día que estábamos viendo la televisión y dijeron que hubo un atentado donde hubo heridos y un muerto, y mostraron lamentablemente el nombre de mi tío", detalla Stefany. En ese entonces, ella era apenas una niña de cuatro años, pero el recuerdo de ese dolor familiar se sembró en su mente como una de las primeras memorias de su niñez y de la violencia en el país. Por eso evoca ese día, esa noticia, los gritos, el llanto y el sentimiento de tristeza que la embargó a ella y a toda su familia. "Ese fue un suceso terrible para mi familia, porque mi tío era como un padre para mí", la voz de Stefany se quiebra y se entrecorta, mientras derrama varias lágrimas. "Era como mi papá y siento que el amor que le tenía a él era bastante fuerte, por los lindos recuerdos que tengo de niña con él. Mantengo memorias de él desde los cuatro años y uno no recuerda cómo eran esas cosas a esa edad".

Los restos del patrullero fueron trasladados en helicóptero hasta Barranquilla. Cuando el cuerpo fue entregado a la familia, la conmoción se expandió por el barrio Siete de Abril, donde vivía Stefany con sus abuelos. Ella recordó que el pa-

trullero fue llorado por toda la comunidad porque era muy querido en ese sector.

Pero este no ha sido el único encuentro que tuvo la familia de Stefany con la violencia. "Mi padre, por ser policía, también sufrió amenazas, por parte de bandas criminales que hacían presencia en el barrio por la captura de un cabecilla", reveló la lideresa, quien detalló que a su familia la amenazaron con quemarle la casa, por lo que tuvo que desplazarse a las afueras de la ciudad, a una finca en el corregimiento de Juan Mina, Atlántico. "Salimos sin nada, con la ropa que teníamos puesta, a escondernos, y tuvimos que vender la casa donde vivíamos", lamentó.

Entre tropezones y reconocimientos

Si bien en su trayectoria Red Sur Barranquilla ha enfrenado situaciones difíciles, como las amenazas, que han generado temor entre sus integrantes y han obstaculizado la puesta en escena del *Monumento,* esta no es la única barrera que han tenido para sacar adelante este proceso de memoria, pues existe otra dificultad, tal vez menos visible, pero tan permanente que pone en riesgo su continuidad: la financiación económica.

A lo largo de los años, los creadores del *Monumento* lo han postulado para participar en varias convocatorias de estímulos locales, pero no han conseguido ser financiados consecutivamente por ninguna institución local o nacional. Si han recibido algún apoyo, principalmente de parte del Ministerio de Cultura, ha sido para mantener los elementos que contiene el montaje, como las lápidas y los tropezones, en un continuo trabajo de voluntariado dedicado a preservar estos objetos de memoria.

Por ser expuestas en espacios públicos, la lluvia y el sol han deteriorado las piezas que conforman el *Monumento.* En ese

sentido, sostener financieramente esta instalación es un reto, porque se hace necesario renovar muchos elementos escénicos. Incluso, en ocasiones los integrantes de Red Sur Barranquilla no pueden trasladar el montaje completo, porque no cuentan con los recursos para el transporte de todas las piezas de la puesta en escena.

Para Libardo, "el Estado debe generar procesos de memoria y no lo está haciendo. Esto no está siendo asumido por las instituciones que lo deben hacer y ese deber de memoria incluye apoyar y propiciar los escenarios y las condiciones necesarias para que iniciativas como el *Monumento por la vida, la dignidad y la memoria* sean elementos pedagógicos que transiten por los colegios y se mantengan en el tiempo".

Otra dificultad que identifica Libardo es la agudización del conflicto armado en el país y, particularmente, las agresiones a los liderazgos sociales tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, porque "con todos los asesinatos a líderes y lideresas muchos de nosotros nos sentimos asustados, porque sabemos que, de una u otra forma, esto es una iniciativa que desea visibilizar esa problemática como defensores de derechos humanos", concluyó.

Aun así, el colectivo sigue adelante, con su mejor esfuerzo para tratar de sostener esta iniciativa de memoria, porque, dijo Stefany, "todo esto lo hacemos por amor. Por amor a cambiar nuestro país, por seguir aportando, porque sabemos que todo puede cambiar si comienza desde nosotros, y estoy completamente convencida de eso para poder cambiar la raíz de este conflicto".

A pesar de las dificultades económicas, el colectivo ha recibido varios reconocimientos y ha logrado articularse con procesos de memoria y de paz. Por ejemplo, debido a su compromiso con la recuperación de la memoria, a los integrantes

de Red Sur Barranquilla los invitaron a participar en la construcción del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC y en el seguimiento a su implementación. También los han invitado a participar en varios estudios académicos sobre el conflicto armado en el país. De igual forma, estuvieron compartiendo su experiencia en espacios con víctimas del conflicto armado y mujeres cocaleras en el Putumayo.

En el 2021 el *Monumento* fue laureado con el Premio Internacional del Público por la Paz (PPP), creado en el 2013 por un equipo de ciudadanos del común con el propósito de reconocer la labor de personas artesanas de paz, y de iniciativas de paz a escalas local, nacional e internacional, buscando que sean conocidas por el público.

De modo que así, entre tropezones y reconocimientos, ha logrado sostenerse el proceso de Red Sur Barranquilla, mientras Libardo, Stefany y otros integrantes del colectivo siguen desarrollando las puestas en escena del *Monumento,* uniendo esfuerzos con diversas organizaciones juveniles en el suroccidente de Barranquilla para que esta iniciativa sea preservada y permanezca en el tiempo.

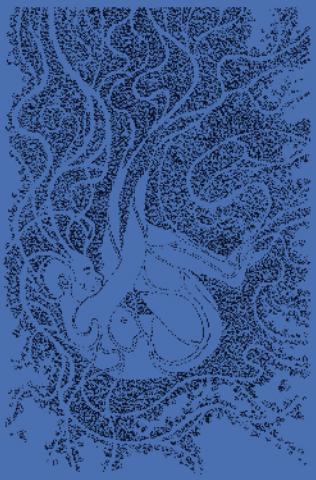
Referencias

Cepeda Emiliani, L. (2011). Los sures de Barranquilla. La distribución espacial de la pobreza. *Documentos de trabajo sobre economía regional*. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-142.pdf.

Museo de la Memoria de Colombia (s. f.). Monumento por la Dignidad y la Memoria. https://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/monumento-por-la-dignidad-y-la-memoria/.

Public Peace Prize (15 de marzo de 2021). Monumento por la Dignidad y la Memoria. https://publicpeaceprize.org/monumento-por-la-dignidad-y-la-memoria/.

Red Sur Barranquilla (9 de agosto de 2021). Monumento por la Dignidad y la Memoria. https://redsurbarranquilla.com/2021/08/09/monumento-por-la-dignidad-y-la-memoria/.



"Ocho cronistas narran la solidaridad, se convierten en exploradores de la condición humana en diversos parajes de la geografía colombiana. Las páginas de este libro son luz cenital sobre vidas que se entregan al cuidado de otros (seres humanos, fauna, flora, tierra, aguas...) y que, en contextos de guerra, significan esperanza. Así como las tensiones sociales y el conflicto armado sacan lo peor de las personas, tienen también el poder de germinar bondad, los más inusitados mecanismos de protección".

Ana Cristina Restrepo Jiménez
Periodista

Defender la vida
9 786287 592193